

Septiembre 9 de 1949

47ª REUNION — 42ª SESION ORDINARIA

Presidencia del contraalmirante (R.) ALBERTO TEISAIRE,
presidente provisional del Honorable Senado

Secretarios: señores ALBERTO H. REALES y SANTIAGO A. JOB

SENADORES PRESENTES:

AMELOTTI, Osvaldo
ANTILLE, Armando G.
ARRIETA, Alfredo J. L.
AVENDAÑO, Arcadio B.
BASALDUA, Juan Carlos
BAVIO, Ernesto F.
CRUZ, Luis
DURAND, Alberto
ENDEIZA, Victor W.
GÓMEZ DEL JUNCO, Felipe
GÓMEZ HENRIQUEZ, Samuel
LAZARO, Juan Fernando de
LORENZÓN, Ricardo Octavio
LUCO, Francisco R.
MATHUS HOYOS, Alejandro
MENDIONDO, F. Daniel
RAMELLA, Pablo A.
SOLER, Lorenzo (h.)
TANCO, Miguel A.
TEISAIRE, Alberto
VIVIANI, Rinaldo
ZERDA, Justiniano de la

AUSENTE, CON AVISO:

MADARIAGA, Eduardo

AUSENTES, CON LICENCIA:

GIAVARINI, Alejandro Bautista
MOLINARI, Diego Luis
SCATAMACCHIA, Mauricio Antonio

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje del Poder Ejecutivo, por el que solicita acuerdo.

II.—Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados.

III.—Petición particular.

IV.—Despachos de comisión.

2.—Proyecto de ley del senador de Lázaro, por el que se acuerda pensión a doña María Antonia Oyuela de Villamayor.

3.—A moción del senador Bavio, se resuelve fijar el orden de los asuntos a tratar en el día de la fecha.

4.—Manifestaciones.

5.—Consideración del despacho de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, en el proyecto de ley, en revisión, por el que se aprueba el Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (1945/46) y el Convenio de Revisión de Artículos finales de los Convenios, 1946. Se aprueba y queda convertido en ley.

6.—Consideración del despacho de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, en el proyecto de ley, en revisión, por el que se aprueban diversos convenios adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo. Se aprueba y queda convertido en ley.

7.—Consideración del despacho de la Comisión de Defensa Nacional, en el proyecto de ley del senador Tanco y otros senadores, por el que se acuerda el título de Expedicionarios al Polo Sur

pro búsqueda del «Antarctic» a los sobrevivientes de la corbeta «Uruguay». Se aprueba.

8.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación General y Asuntos Técnicos, en el proyecto de ley del senador Durand y otros senadores, por el que se modifica la ley 4.097 sobre juegos de azar.

9.—Apéndice:

Sanciones del Honorable Senado.

—En Buenos Aires, a los nueve días del mes de septiembre de 1949, siendo las 10 y 15, dice el

Sr. Presidente (Teisaire). — La sesión está abierta.

I

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Teisaire). — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

I

Mensaje del Poder Ejecutivo, por el que se solicita acuerdo. (A la Comisión de Acuerdos.)

II

Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados

La Honorable Cámara de Diputados envía los siguientes proyectos de ley, en revisión:

—Por el que se prorrogan por el término de diez años las pensiones graciables cuyo término de beneficio venciera durante el corriente año. (A la Comisión de Peticiones.)

—Por el que se prorroga por el término de un año, el plazo de 180 días previsto en el artículo 3º, inciso d), de la ley 13.501. (A la Comisión de Transportes.)

III

Petición particular

El señor director de las Históricas Padercitas de San Francisco Solano solicita subsidio para obras. (A la Comisión de Obras Públicas.)

IV

Despachos de comisión

PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En el proyecto de ley de los señores senadores Avendaño y otros senadores, sobre préstamos a los propietarios de predios urbanos o rurales, en las provincias de Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, con destino a la perforación de pozos, construcción de represas y su habilitación. (A la orden del día.)

EDUCACIÓN:

En el proyecto de ley del señor senador Amelotti, por el que se autoriza la transferencia a la Dirección de Menores de la Colonia de Vacaciones Santa Rita, sita en la provincia de Córdoba. (A la orden del día.)

2

PENSION A DOÑA MARIA ANTONIA OYUELA DE VILLAMAYOR. — PROYECTO DE LEY DEL SENADOR DE LAZARO

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Acuérdate a doña María Antonia Oyuela de Villamayor, nieta del teniente 2º don Fernando de la Oyuela, guerrero de la Independencia, la pensión mensual de cuatrocientos pesos moneda nacional (\$ 400), por el término de ley.

Art. 2º — El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará al artículo 3º de la ley 13.478.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Juan Fernando de Lázaro.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El proyecto que tengo el honor de presentar a la consideración del Honorable Senado tiende a realizar un acto de justicia para con la nieta de un eminente servidor del Estado, en las horas iniciales de la nacionalidad: el teniente 2º don Fernando de la Oyuela, guerrero de la Independencia y soldado eficiente en las luchas de la organización nacional.

Llenados los recaudos que la ley exige para gozar de los beneficios que el Congreso acuerda en concepto de pensiones graciables, creo inoficioso agregar a estas breves palabras consideración alguna, pues acreditados como quedan con la enunciación de los servicios del causante los derechos de su nieta a percibir la pensión que por el presente proyecto se le otorga, sólo me resta solicitar para el mismo el voto favorable de mis distinguidos colegas.

Juan Fernando de Lázaro.

—A la Comisión de Peticiones.

3

MOCION

Sr. Bavio. — Pido la palabra.

Hago moción, señor presidente, para que en la sesión de hoy tratemos los siguientes asuntos: orden del día 86, despacho de la Comisión de Relaciones Exteriores; orden del día 87, de la misma comisión; orden del día 99, despacho de la Comisión de Defensa Nacional, y orden del día 101, despacho de la Comisión de Legislación General y Asuntos Técnicos.

—Apoyado.

II

CONVENIOS ADOPTADOS POR LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

—Se lee:

Despacho de comisión**Honorable Senado:**

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de ley, venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados, por el que se aprueban los siguientes convenios adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo:

Nº	Año	
17	1925	Sobre reparación de los accidentes del trabajo.
19	1925	Sobre igualdad de trato a los trabajadores extranjeros y nacionales en materia de reparación de los accidentes del trabajo.
21	1926	Sobre simplificación de la inspección de los emigrantes a bordo de los barcos.
22	1926	Sobre contrato de ajuste de los marinos.
23	1926	Sobre repatriación de los marinos.
26	1928	Sobre institución de métodos para la fijación de salarios mínimos.
27	1929	Sobre indicación del peso en los grandes bultos transportados por barcos.
29	1930	Sobre trabajo forzoso u obligatorio.

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
(Junio 1º de 1949)

Texto y antecedentes del proyecto de ley sobre aprobación de convenios y recomendaciones sancionadas por la Conferencia Internacional del Trabajo

PROYECTO DE LEY**El Senado y Cámara de Diputados, etc.**

Artículo 1º — Apruébanse los siguientes convenios adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo:

Nº	Año	
17	1925	Sobre reparación de los accidentes del trabajo.
19	1925	Sobre igualdad de trato a los trabajadores extranjeros y nacionales en materia de reparación de los accidentes del trabajo.
21	1926	Sobre simplificación de la inspección de los inmigrantes a bordo de los barcos.
22	1926	Sobre contrato de ajuste de los marinos.
23	1926	Sobre repatriación de los marinos.
26	1928	Sobre institución de métodos para la fijación de salarios mínimos.
27	1929	Sobre indicación del peso en los grandes bultos transportados por barcos.
29	1930	Sobre trabajo forzoso u obligatorio.

Nº	Año	
30	1930	Sobre reglamentación de la duración del trabajo en el comercio y las oficinas.
32	1932	Sobre protección contra los accidentes de los trabajadores dockers ocupados en la carga y descarga de los buques. (Revisado.)
33	1932	Sobre edad de admisión de los niños en los trabajos no industriales.
34	1933	Sobre agencias retribuidas de colocaciones.
41	1934	Sobre trabajo nocturno de las mujeres. (Revisado.)
42	1934	Sobre reparación de las enfermedades profesionales. (Revisado.)
45	1935	Sobre empleos de mujeres en trabajos subterráneos en las minas de todas clases.
50	1936	Sobre reglamentación de ciertos sistemas particulares de reclutamiento de los trabajadores indígenas.
52	1936	Sobre vacaciones anuales pagadas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja le prestéis vuestra aprobación.

Sala de la comisión, 24 de agosto de 1949.

Diego Luis Molinari. — Ernesto F. Bivio. — Juan Fernando de Lázaro. — Pablo A. Ramella. — Samuel Gómez Henríquez. — Juan Carlos Basaldúa. — Lorenzo Soler (h.). — Alejandro Mathus Hoyos. — Francisco R. Luco.

Nº	Año	
30	1930	Sobre reglamentación de la duración del trabajo en el comercio y las oficinas.
32	1932	Sobre protección contra los accidentes de los trabajadores dockers, ocupados en la carga y descarga de los buques (revisado).
33	1932	Sobre edad de admisión de los niños en los trabajos no industriales.
34	1933	Sobre agencias retribuidas de colocaciones.
41	1934	Sobre trabajo nocturno de las mujeres (revisado).
42	1934	Sobre reparación de las enfermedades profesionales (revisado).
45	1935	Sobre empleo de mujeres en trabajos subterráneos en las minas de todas clases.
50	1936	Sobre reglamentación de ciertos sistemas particulares de reclutamiento de los trabajadores indígenas.
52	1936	Sobre vacaciones anuales pagadas.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ANTECEDENTES

Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1938.

Al Honorable Congreso de la Nación.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, en el inciso 5º de su artículo 19, aprobada por ley número 11.722 (art. 3º) de septiembre 25 de 1933, el Poder Ejecutivo somete a consideración de vuestra honorabilidad, traducido al español, el texto de las recomendaciones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en sus reuniones tercera a sexta, celebradas desde 1921 a 1924, así como el de los proyectos de convenio y de las recomendaciones adoptadas por la misma conferencia en sus reuniones séptima a vigésima efectuadas desde 1925 a 1936. Son esos proyectos de convenio y recomendaciones los que se enumeran a continuación:

I. — Proyecto de convenio

Séptima reunión (Ginebra, 1925).

- 17. — Reparación de los accidentes del trabajo.
- 18. — Reparación de las enfermedades profesionales.
- 19. — Igualdad de trato a los trabajadores extranjeros y nacionales en materia de reparación de los accidentes del trabajo.
- 20. — Trabajo nocturno en las panaderías.

Octava reunión (Ginebra, 1926).

- 21. — Simplificación de la inspección de los emigrantes a bordo de los barcos.

Novena reunión (Ginebra, 1926).

- 22. — Contrato de ajuste de los marinos.
- 23. — Repatriación de los marinos.

Décima reunión (Ginebra, 1927).

- 24. — Seguro de enfermedad de los trabajadores de la industria, del comercio y del servicio doméstico.
- 25. — Seguro de enfermedad de los trabajadores agrícolas.

Undécima reunión (Ginebra, 1928).

- 26. — Institución de métodos para la fijación de salarios mínimos.

Duodécima reunión (Ginebra, 1929).

- 27. — Indicación del peso en los grandes bultos transportados por barcos.
- 28. — Protección contra los accidentes de los trabajadores ocupados en la carga y descarga de los buques.

Décimocuarta reunión (Ginebra, 1930).

- 29. — Trabajo forzoso u obligatorio.
- 30. — Reglamentación de la duración del trabajo en el comercio y las oficinas.

Décimoquinta reunión (Ginebra, 1931).

- 31. — Limitación de las horas de trabajo en las minas de carbón.

Décimosexta reunión (Ginebra, 1932).

- 32. — Protección contra los accidentes de los trabajadores ocupados en la carga y descarga de los buques (revisado).
- 33. — Edad de admisión de los niños en los trabajos no industriales.

Décimoséptima reunión (Ginebra, 1933).

- 34. — Agencias retribuidas de colocaciones.
- 35. — Seguro obligatorio de vejez de los asalariados de las empresas industriales y comerciales, de los profesiones liberales, así como de los trabajadores a domicilio y del servicio doméstico.
- 36. — Seguro obligatorio de vejez de los asalariados de las empresas agrícolas.
- 37. — Seguro obligatorio de invalidez de los asalariados de las empresas industriales y comerciales, de las profesiones liberales, así como de los trabajadores a domicilio y del servicio doméstico.
- 38. — Seguro obligatorio de invalidez de los asalariados de las empresas agrícolas.
- 39. — Seguro obligatorio de muerte de los asalariados de las empresas industriales y comerciales, de las profesiones liberales, así como de los trabajadores a domicilio y del servicio doméstico.
- 40. — Seguro obligatorio de muerte de los asalariados de las empresas agrícolas.

Décimooctava reunión (Ginebra, 1934).

- 41. — Trabajo nocturno de las mujeres (revisado).
- 42. — Enfermedades profesionales (revisado).
- 43. — Horas de trabajo en las fábricas automáticas de vidrio.
- 44. — Indemnizaciones o subsidios a los obreros en paro forzoso.

Décimonovena reunión (Ginebra, 1935).

- 45. — Empleo de las mujeres en trabajos subterráneos en las minas de toda clase.
- 46. — Limitación de las horas de trabajo en las minas de carbón (revisado).
- 47. — Reducción de las horas de trabajo a cuarenta por semana.
- 48. — Conservación de los derechos a pensión de los migrantes en los seguros de invalidez, vejez y muerte.
- 49. — Reducción de la duración del trabajo en las fábricas de botellas de vidrio.

Vigésima reunión (Ginebra, 1936).

- 50. — Reglamentación de ciertos sistemas particulares de reclutamiento de los trabajadores indígenas.
- 51. — Reducción de la duración del trabajo en las obras públicas.
- 52. — Vacaciones anuales pagadas.

II. — Recomendaciones

Tercera reunión (Ginebra, 1921).

- 11. — Medios de prevención del paro en la agricultura.
- 12. — Protección, antes y después del parto, de las mujeres empleadas en la agricultura.
- 13. — Trabajo nocturno de las mujeres en la agricultura.
- 14. — Trabajo nocturno de los niños y de los jóvenes en la agricultura.
- 15. — Enseñanza técnicoagrícola.
- 16. — Alojamiento de los obreros agrícolas.
- 17. — Seguros sociales en la agricultura.
- 18. — Aplicación del descanso semanal en los establecimientos comerciales.

Cuarta reunión (Ginebra, 1922).

- 19. — Comunicación a la Oficina Internacional del Trabajo de todas las informaciones estadísticas o de otro género relativas a la emigración, la inmigración, la repatriación y el tránsito de los migrantes.

Quinta reunión (Ginebra, 1923).

- 20. — Principios generales para la organización de servicios de inspección, destinados a asegurar la aplicación de las leyes y reglamentos para la protección de los trabajadores.

Sexta reunión (Ginebra, 1924).

- 21. — Utilización del tiempo libre de los trabajadores.

Séptima reunión (Ginebra, 1925).

- 22. — Importe mínimo de las indemnizaciones en materia de reparación de los accidentes del trabajo.
- 23. — Jurisdicciones competentes para la solución de los conflictos relativos a la reparación de los accidentes del trabajo.
- 24. — Reparación de las enfermedades profesionales.
- 25. — Igualdad de trato a trabajadores extranjeros y nacionales en materia de reparación de los accidentes del trabajo.

Octava reunión (Ginebra, 1926).

- 26. — Protección de las mujeres y las jóvenes emigrantes a bordo de los barcos.

Novena reunión (Ginebra, 1926).

- 27. — Repatriación de los capitanes y de los aprendices.
- 28. — Principios generales de la inspección del trabajo de los marinos.

Décima reunión (Ginebra, 1927).

- 29. — Principios generales del seguro de enfermedad.

Undécima reunión (Ginebra, 1928).

- 30. — Aplicación de los métodos para la fijación de salarios mínimos.

Duodécima reunión (Ginebra, 1929).

- 31. — Prevención de los accidentes del trabajo.
- 32. — Responsabilidad relativa a los dispositivos de seguridad en las máquinas accionadas por fuerza mecánica.
- 33. — Reciprocidad en materia de protección de los trabajadores ocupados en la carga y descarga de los buques.
- 34. — Consulta a las organizaciones profesionales para establecer reglamentos sobre la seguridad de los trabajadores ocupados en la carga y descarga de los buques.

Décimocuarta reunión (Ginebra, 1930).

- 35. — Imposición indirecta del trabajo.
- 36. — Reglamentación del trabajo forzoso u obligatorio.
- 37. — Reglamentación de la jornada de trabajo en hoteles, restaurantes y establecimientos similares.
- 38. — Reglamentación de la jornada de trabajo en las empresas de espectáculos y otros lugares de diversión.
- 39. — Reglamentación de la jornada de trabajo en los establecimientos dedicados al tratamiento o la hospitalización de enfermos, lisiados, indigentes y alienados.

Décimosexta reunión (Ginebra, 1932).

- 40. — Reciprocidad en la protección de los «doctores» contra los accidentes.
- 41. — Edad de admisión de los niños en los trabajos no industriales.

Décimoséptima reunión (Ginebra, 1933).

- 42. — Agencias de colocaciones.
- 23. — Seguro de invalidez, vejez y muerte.

Décimooctava reunión (Ginebra, 1934).

- 44. — Seguro de desocupación y diversas formas de asistencia a los desocupados.

Décimonovena reunión (Ginebra, 1935).

- 45. — Paro de los jóvenes.

Vigésima reunión (Ginebra, 1936).

- 46. — Eliminación progresiva de ciertos sistemas particulares de reclutamiento.
- 47. — Vacaciones anuales pagadas.

Con respecto a las recomendaciones, el Poder Ejecutivo considera que vuestra honorabilidad está llamada a apreciar, durante el curso de su labor legislativa, la oportunidad y conveniencia de tener en cuenta el contenido de cada una de ellas en particular, sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo, en uso de las facultades que le confieren los artículos 86, inciso 2º y 68 de la Constitución nacional las contemple a su vez al expedir las instrucciones y reglamentos para la ejecución de las leyes de la Nación, o al presentar a vuestra honorabilidad proyectos de ley basados en aquellos principios y normas que se estimen de especial interés nacional.

En cuanto a los proyectos de convenio, aunque el Poder Ejecutivo somete todos ellos a consideración de vuestra honorabilidad, sólo pide y aconseja la aprobación de los diecisiete que se mencionan en el adjunto

proyecto de ley: Estos últimos se refieren a formas de protección jurídica de los trabajadores, concordantes en mayor o menor grado, con las que se han incorporado ya a la legislación positiva interna del país. No quiere decir esto, como bien lo sabe vuestra honorabilidad, que sea obstáculo para aprobar el proyecto de convenio el hecho de que no se ajuste a las leyes nacionales en vigor sobre la materia. Los proyectos de convenio, cuya aprobación solicita, señalan un nivel de protección del trabajo en muchos puntos superior al que aseguran las correspondientes leyes argentinas. Así, por ejemplo, el que versa sobre reparación de accidentes del trabajo obligaría a extender los beneficios de la ley número 9.688 a los obreros, empleados o aprendices ocupados por las empresas, explotaciones o establecimientos de cualquier naturaleza, públicos o privados, en lugar de reservarlos a los ocupados en las industrias o empresas específicas que enumera el artículo 2º de la ley mencionada. Los de 1926, sobre contrato de ajuste y repatriación de los marinos, contienen disposiciones que completarían, mejorándolas sensiblemente, las del título VI, libro III, del Código de Comercio y la de las reglamentaciones administrativas referentes a esos puntos. La aprobación del proyecto de 1928, que instituye métodos para la fijación de salarios mínimos, implicaría la necesidad de hacer extensivos los principios de la ley número 10.505, de trabajo a domicilio, a otras formas de explotación industrial en las que los salarios sean excepcionalmente bajos. El proyecto de 1932, relativo a la protección de los estibadores o *dockers* contra los accidentes, daría una base firme a las disposiciones reglamentarias sobre prevención de accidentes, que el Poder Ejecutivo puede establecer en virtud de la facultad en él delegada por el artículo 29 de la ley número 9.688. El proyecto revisado en 1934, que trata la reparación de las enfermedades profesionales, exigiría la modificación del artículo 22 de la ley número 9.688, en el sentido de que la enfermedad se considerase profesional por el solo hecho de haber trabajado quien la contrajera en las actividades consideradas generadoras de riesgo por la legislación nacional. El de 1936, sobre vacaciones anuales remuneradas, de ser ratificado, tendría la consecuencia de promover la revisión de las disposiciones incorporadas al Código de Comercio por la ley número 11.729, a fin de extender su aplicación y crear los medios de contralor y las sanciones que ahora faltan a la institución. El Poder Ejecutivo, pues, auspicia la aprobación de proyectos de convenio que otorgan a los trabajadores beneficios mayores que los ya establecidos por las leyes nacionales.

Sin embargo, por razones de diverso orden, no puede aconsejar la aprobación de todos los textos presentados, hay algunos proyectos de convenio, por de pronto, como el de 1922, sobre reparación de enfermedades profesionales (número 18) y el de 1929, sobre protección a los *dockers* (número 28), que han sido revisados, son estos los que se mencionan en el proyecto de la ley aprobatoria. Hay otros como los de 1931 y 1935, sobre duración del trabajo en las minas de hulla y de lignito, y el de 1934, sobre la misma materia en las fábricas automáticas de vidrio, cuya ratificación a nada conduciría por no existir en el territorio nacional explotaciones de esa índole. Tampoco aconseja la aprobación del proyecto de convenio de 1925, sobre trabajo nocturno en las panaderías. Las dificultades siempre exteriorizadas para acomodar el principio de la Nación Argentina a la ley nocturna

turno a las exigencias de una realidad industrial típica que, no sólo en la Argentina, sino en muchos otros países, se resiste a admitir rígidas soluciones, hacen preferible no contraer un compromiso internacional que impediría, durante diez años, aplicar la ley interna en forma distinta de la prescrita por el convenio. Es lo que se hace en el momento actual con la conformidad de las organizaciones patronales y obreras interesadas. El Poder Ejecutivo no requiere, por otra parte, la aprobación de los proyectos de convenios relativos a los seguros sociales de enfermedad, vejez, invalidez, muerte y desocupación. Aunque este gobierno sigue con atención los considerables progresos de la previsión social en el mundo y especialmente, durante estos últimos años en el continente americano y le preocupa hondamente el perfeccionamiento e integración del régimen imperante en la República en este orden, considera que la singular trascendencia de la cuestión y la complejidad de la eventual organización de un sistema completo de seguros sociales exigen un detenido cuidado previo, a falta del cual sería prematuro obligar contractualmente a la Nación a seguir las normas señaladas por los referidos textos. Finalmente, no propicia la aprobación del proyecto de convenio de 1935, sobre reducción de las horas de trabajo a cuarenta por semana, por cuanto y careciendo ese texto de contenido obligatorio, sólo implica una declaración de principios en favor de la citada medida como instrumento para combatir la desocupación. Sin necesidad práctica, pues, de pronunciarse en esta oportunidad sobre tan debatido punto de política social, este gobierno cree, no obstante, que debe llamar la atención de vuestra honorabilidad acerca de las diversas circunstancias ilustrativas. El proyecto de convenio referido sólo ha sido objeto, hasta fin de junio pasado, de una única ratificación, y sólo otros dos gobiernos habían recomendado la aprobación a sus respectivas autoridades competentes. La Conferencia Internacional del Trabajo deberá, además, pronunciarse en forma definitiva en el año próximo sobre este mismo asunto. Por último, ni las escasas experiencias llevadas a cabo en el extranjero, ni la evolución seguida por el paro en nuestro país, ni el panorama de la economía mundial, aconsejan por ahora asumir un compromiso internacional, aunque teórico, en tan delicado asunto.

En lo que respecta a los proyectos de convenio y a las recomendaciones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en las cuatro reuniones ulteriores a las mencionadas en este mensaje, el Poder Ejecutivo habrá también de dejar normalizado su trámite en breve término.

Este gobierno, que envió ya una delegación representativa y completa a la reunión de junio último de la Conferencia Internacional del Trabajo y que ahora está empeñado en ponerse al día respecto de todas las resoluciones adoptadas precedentemente por esa Conferencia, sea bajo forma de recomendaciones o de proyectos de convenio, acredita con ello su firme designio de ajustarse a las obligaciones nacidas del Pacto Constitutivo de la Organización Internacional del Trabajo. Al obrar así no le mueve únicamente el deseo de cumplir los compromisos contraídos por la República hacia una institución digna de auspicio por las elevadas finalidades que se propone y el acierto de su importante labor cumplida, sino asimismo su honda y constante preocupación de promover en la República el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los obreros de la ciudad y del campo y de

contribuir en forma efectiva al afianzamiento y progreso de la cooperación pacífica entre las naciones.

De acuerdo con las prescripciones de la Constitución nacional en materia de tratados internacionales, el Poder Ejecutivo solicita a vuestra honorabilidad la aprobación del proyecto de ley que se acompaña.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

ROBERTO M. ORTIZ.

José María Cantilo. — Diógenes Taboada.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Apruébanse los siguientes convenios adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo:

Nº	Año	
17	1925	Sobre reparación de los accidentes del trabajo.
19	1925	Sobre igualdad de trato a los trabajadores extranjeros y nacionales en materia de reparación de los accidentes del trabajo.
21	1926	Sobre simplificación de la inspección de los inmigrantes a bordo de los barcos.
22	1926	Sobre contrato de ajuste de los marinos.
23	1926	Sobre repatriación de los marinos.
26	1928	Sobre institución de métodos para la fijación de salarios mínimos.
27	1929	Sobre indicación del peso en los grandes bultos transportados por barcos.
29	1930	Sobre trabajo forzoso u obligatorio.
30	1930	Sobre reglamentación de la duración del trabajo en el comercio y las oficinas.
32	1932	Sobre protección contra los accidentes de los trabajadores <i>dockers</i> ocupados en la carga y descarga de los buques. (Revisado).
33	1932	Sobre edad de admisión de los niños en los trabajos no industriales.
34	1933	Sobre agencias, retribuidas, de colocaciones.
41	1934	Sobre trabajo nocturno de las mujeres. (Revisado).
42	1934	Sobre reparación de las enfermedades profesionales. (Revisado).
45	1935	Sobre empleo de mujeres en trabajos subterráneos en las minas de toda clase.
50	1936	Sobre reglamentación de ciertos sistemas particulares de reclutamiento de los trabajadores indígenas.
52	1936	Sobre vacaciones anuales pagadas.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

José María Cantilo. — Diógenes Taboada.

Proyecto de convenio (número 17) relativo a la reparación de los accidentes del trabajo (1)

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, de la Sociedad de las Naciones.

(1) Este convenio ha entrado en vigor el 1º de abril de 1927.

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 19 de mayo de 1925, en su séptima reunión,

Después de haber decidido aprobar diversas proposiciones relativas a la reparación de los accidentes del trabajo, cuestión comprendida en el primer punto de la orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un proyecto de convenio internacional,

Adopta, con fecha 10 de junio de mil novecientos veinticinco, el proyecto de convenio siguiente, que se someterá a la ratificación de los miembros de la Organización Internacional del Trabajo, de conformidad con las disposiciones de la parte XIII del tratado de Versalles y partes correspondientes de los demás tratados de paz:

Artículo 1º — Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente convenio se obliga a asegurar a las víctimas de accidentes del trabajo o a sus derechohabientes, condiciones de reparación por lo menos iguales a las previstas en el presente convenio.

Art. 2º — Las legislaciones y reglamentaciones sobre la reparación de los accidentes del trabajo deberán aplicarse a los obreros, empleados o aprendices ocupados por las empresas, explotaciones o establecimientos de cualquiera naturaleza, públicos o privados.

Sin embargo, será de la incumbencia de cada miembro prever en su legislación nacional las excepciones que estime necesarias en cuanto se refiera a:

- a) Las personas que ejecuten trabajos eventuales ajenos a la empresa del patrono;
- b) Los trabajadores a domicilio;
- c) Los miembros de la familia del patrono que trabajen exclusivamente por cuenta de éste y que vivan con él;
- d) Los trabajos no manuales cuya ganancia exceda de un límite que podrá fijarse por la legislación nacional.

Art. 3º — No están comprendidos en el presente convenio:

- 1º Los marinos y pescadores que han de ser objeto de un convenio ulterior;
- 2º Las personas que gocen de un régimen especial por lo menos equivalente al previsto en el presente convenio.

Art. 4º — El presente convenio no se aplicará a la agricultura, para la cual continuará en vigor el convenio sobre la reparación de los accidentes del trabajo en la agricultura, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en su tercera reunión.

Art. 5º — Las indemnizaciones que deban pagarse en caso de accidente seguido de defunción, o en caso de accidente que determine una incapacidad permanente, se pagarán a la víctima o a sus derechohabientes en forma de renta.

Sin embargo, estas indemnizaciones podrán pagarse total o parcialmente en forma de capital cuando se garantice a las autoridades competentes un empleo razonable del mismo.

Art. 6º — En caso de incapacidad, se concederá la indemnización, lo más tarde, a contar del quinto día

después del accidente, ya sea imputable al patrono o a una institución de seguros contra accidentes o a una institución de seguros contra enfermedades.

Art. 7º — Se concederá un suplemento de indemnización a las víctimas de accidentes que queden incapacitadas y necesiten la asistencia constante de otra persona.

Art. 8º — Las legislaciones nacionales insertarán las medidas de inspección que se estimen necesarias, así como los procedimientos para la revisión de las indemnizaciones.

Art. 9º — Las víctimas de accidentes del trabajo tendrán derecho a la asistencia médica y a la asistencia quirúrgica y farmacéutica que se reconozca necesaria a consecuencia de los accidentes. La asistencia médica será de cuenta, bien del patrono, bien de las instituciones de seguros contra accidentes, bien de las instituciones de seguros contra enfermedades o contra invalidez.

Art. 10. — Las víctimas de accidentes del trabajo tendrán derecho al suministro y a la renovación normal, por el patrono o por el asegurador, de los aparatos de prótesis y de ortopedia cuyo uso se reconozca necesario. Sin embargo, las legislaciones nacionales podrán admitir a título excepcional, que se substituya el suministro y la renovación de los aparatos por la concesión a la víctima del accidente de una indemnización suplementaria, que se fijará en el momento de la determinación o de la revisión del importe de la reparación y que represente el costo probable del suministro y de la renovación de dichos aparatos.

Las legislaciones nacionales incluirán, en lo que se refiere a la renovación de los aparatos, las medidas de control necesarias para evitar los abusos o para garantizar el debido uso de las indemnizaciones suplementarias.

Art. 11. — Las legislaciones nacionales insertarán las disposiciones que, dadas las condiciones particulares de cada país, sean más adecuadas para asegurar en toda circunstancia el pago de la reparación a las víctimas de accidentes y a sus derechohabientes, y para garantizarlos contra la insolvencia del patrono o del asegurador.

Art. 12. — Las ratificaciones oficiales del presente convenio, en las condiciones previstas en la parte XIII del tratado de Versalles y en las partes correspondientes de los demás tratados de paz, serán comunicadas al secretario general de la Sociedad de las Naciones, y registradas por él.

Art. 13. — El presente convenio entrará en vigor tan pronto como el secretario general haya registrado las ratificaciones de dos miembros de la Organización Internacional del Trabajo.

Este convenio sólo obligará a los miembros cuya ratificación haya sido registrada en la Secretaría de la Sociedad de las Naciones.

En lo sucesivo, el presente convenio entrará en vigor para cada miembro en la fecha en que haya sido registrada su ratificación en la Secretaría.

Art. 14. — Inmediatamente que hayan sido registradas en la secretaría las ratificaciones de dos miembros de la Organización Internacional del Trabajo, el secretario general de la Sociedad de las Naciones lo notificará a todos los miembros de dicha organización. Igualmente, les será notificado el registro de las ratificaciones que sean ulteriormente comunicadas por los demás miembros de la organización.

Art. 15. — Bajo reserva de las disposiciones del artículo 18, todo miembro que ratifique el presente con-

venio se obliga a aplicar las disposiciones de los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 y 11, lo más tarde el 1º de enero de 1927, y a tomar las medidas que fueren necesarias para hacer efectivas dichas disposiciones.

Art. 16. — Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente convenio se obliga a aplicarlo en sus colonias, posesiones o protectorados, con arreglo a las disposiciones del artículo 421 del Tratado de Versalles y de los artículos correspondientes de los demás tratados de paz.

Art. 17. — Todo miembro que haya ratificado el presente convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de cinco años, a contar de la fecha de la entrada en vigor del mismo, por medio de una comunicación dirigida al secretario general de la Sociedad de las Naciones, y registrada por él. La denuncia no surtirá efecto hasta pasado un año de la fecha de su registro en la secretaría.

Art. 18. — El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la conferencia general, por lo menos una vez cada diez años, un informe sobre la aplicación del presente convenio y decidirá si procede incluir en la orden del día de la Conferencia la revisión o modificación de dicho convenio.

Art. 19. — Los textos francés e inglés del presente convenio son igualmente auténticos.

Proyecto de convenio (número 19) relativo a la igualdad de trato a los trabajadores extranjeros y nacionales en materia de reparación de los accidentes del trabajo (1).

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones, Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 19 de mayo de 1925, en su séptima reunión,

Después de haber decidido aprobar diversas proposiciones relativas a la igualdad de trato a los trabajadores extranjeros y a los nacionales, víctimas de accidentes del trabajo, segunda cuestión comprendida en la orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un proyecto de convenio internacional,

Adopta, con fecha cinco de junio de mil novecientos veinticinco, el siguiente proyecto de convenio que se someterá a la ratificación de los miembros de la Organización Internacional del Trabajo, de conformidad con las disposiciones de la parte XIII del Tratado de Versalles y partes correspondientes de los demás tratados de paz:

Artículo 1º — Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente convenio se obliga a conceder a los nacionales de cualquier otro miembro que lo haya ratificado y que fueran víctimas de accidentes del trabajo ocurridos en el territorio de aquél, o a sus derechohabientes, el mismo trato que asegure a sus propios nacionales, en materia de reparación de los accidentes del trabajo.

Esta igualdad de trato será otorgada a los trabajadores extranjeros y a sus derechohabientes, sin ningun-

(1) Este convenio ha entrado en vigor el 8 de septiembre de 1926.

na condición de residencia. Sin embargo, en lo que se refiere a los pagos que un miembro, o sus nacionales, hayan de hacer fuera de su propio territorio en virtud de este principio, las disposiciones que hayan de tomarse se registrarán, si fuera necesario, por arreglos particulares estipulados con los miembros interesados.

Art. 2º — Para la reparación de los accidentes ocurridos a los trabajadores ocupados de una manera temporal o intermitente en el territorio de un miembro por cuenta de una empresa domiciliada en el territorio de otro miembro, podrá determinarse por acuerdo especial entre los miembros interesados, que se aplicará la legislación de este último.

Art. 3º — Los miembros que ratifiquen el presente convenio y en los cuales no exista un régimen de indemnización o de seguros a tanto alzado de accidentes del trabajo, convienen en instituir un régimen de este género, en un plazo de tres años a contar de la ratificación.

Art. 4º — Los miembros que ratifiquen el presente convenio se obligan a prestarse mutuamente asistencia con objeto de facilitar su aplicación, así como la ejecución de sus leyes y reglamentos respectivos en materia de reparación de accidentes del trabajo, y a comunicar a la Oficina Internacional del Trabajo, que lo notificará a los demás miembros interesados, toda modificación de las leyes y reglamentos vigentes en materia de reparación de los accidentes del trabajo.

Art. 5º — Las ratificaciones oficiales del presente convenio en las condiciones previstas en la parte XIII del Tratado de Versalles y en las partes correspondientes de los demás tratados de paz, serán comunicadas al secretario general de la Sociedad de las Naciones, y registradas por él.

Art. 6º — El presente convenio entrará en vigor tan pronto como el secretario general haya registrado las ratificaciones de dos miembros de la Organización Internacional del Trabajo.

Este convenio sólo obligará a los miembros cuya ratificación haya sido registrada en la secretaría.

En lo sucesivo, el presente convenio entrará en vigor para cada miembro en la fecha del registro de su ratificación en la secretaría.

Art. 7º — Inmediatamente que hayan sido registradas en la secretaría las ratificaciones de dos miembros de la Organización Internacional del Trabajo, el secretario general de la Sociedad de las Naciones lo notificará a todos los miembros de dicha organización. Igualmente les notificará el registro de las ratificaciones que se le comuniquen ulteriormente por los demás miembros de la organización.

Art. 8º — Bajo reserva de las disposiciones del artículo 6º, todo miembro que ratifique el presente convenio se compromete a aplicar las disposiciones de los artículos 1º, 2º, 3º y 4º, lo más tarde, el 1º de enero de 1927, y a tomar las medidas que fueren necesarias para hacer efectivas dichas disposiciones.

Art. 9º — Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente convenio se compromete a aplicarlo en sus colonias, posesiones o protectorados, con arreglo a las disposiciones del artículo 21 del Tratado de Versalles y de los artículos correspondientes de los demás tratados de paz.

Art. 10. — Todo miembro que haya ratificado el presente convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, contado desde la entrada en vigor del convenio, por medio de una comunicación

al secretario general de la Sociedad de las Naciones, quien la registrará. La denuncia no surtirá efecto hasta pasado un año desde la fecha de su registro en la secretaría.

Art. 11. — El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar, por lo menos, una vez cada diez años, a la conferencia general, un informe sobre la aplicación del presente convenio, y decidirá si procede incluir en la orden del día de la conferencia la cuestión de la modificación de dicho convenio.

Art. 12. — Los textos francés e inglés del presente convenio son igualmente auténticos.

Recomendación (número 25) referente a la igualdad de trato a trabajadores extranjeros y nacionales en materia de reparación de los accidentes del trabajo.

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones, Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 19 de mayo de 1925, en su séptima reunión,

Después de haber decidido aprobar diversas proposiciones relativas a la igualdad en el trato a los trabajadores tanto extranjeros como nacionales, víctimas de accidentes del trabajo, segunda cuestión inscrita en la orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una recomendación,

Adopta con fecha cinco de junio de mil novecientos veinticinco, la siguiente recomendación, que se someterá al examen de los miembros de la Organización Internacional del Trabajo, para que la lleven a la práctica, en forma de ley nacional o de otra manera, de conformidad con las disposiciones de la parte XIII del Tratado de Paz:

I. — La conferencia recomienda que, para la aplicación del convenio relativo a la igualdad de trato a los trabajadores extranjeros o nacionales para la reparación de los accidentes del trabajo, cada miembro de la Organización Internacional del Trabajo tome las medidas necesarias:

- Para facilitar a los beneficiarios de una indemnización que no residan en el país en que deba pagárseles ésta, el cobro de las cantidades que se les adeuden y para garantizar la observancia de las condiciones establecidas en las leyes y reglamentos para el pago de dichas cantidades;
- Para que, en caso de litigio por falta o suspensión de pago, o reducción del importe de una indemnización debida a una persona que no resida en el país en que se origine su derecho a indemnización, pueda entablarse una acción ante los tribunales competentes de dicho país, sin que el interesado se vea obligado a estar presente en persona;
- Para que el beneficio de las exenciones de derechos fiscales, de la expedición gratuita de documentos oficiales y de las demás ventajas concedidas por la legislación de un miembro, en materia de reparación de los accidentes del trabajo, sea ampliado en las mismas condiciones a los nacionales de los demás miembros que hayan ratificado el convenio antes citado.

II. — La conferencia recomienda que en los países en que no haya un régimen de indemnización o de seguros fijos para los accidentes del trabajo, los gobiernos, hasta que sea instituido dicho régimen, faciliten a los obreros extranjeros el beneficio de la legislación nacional de éstos en materia de reparación de los accidentes del trabajo.

Proyecto de convenio (número 21) referente a la simplificación de la inspección de los emigrantes a bordo de los barcos (1).

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones, Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 26 de mayo de 1926, en su octava reunión.

Después de aprobar diversas proposiciones referentes a las simplificaciones de la inspección de los inmigrantes a bordo, cuestión inscrita en la orden del día de dicha reunión y

Después de haber acordado que dichas proposiciones revistan la forma de un proyecto de convenio internacional,

Adopta, con fecha cinco de junio de mil novecientos veintiséis, el siguiente proyecto de convenio, para su ratificación por los miembros de la Organización Internacional del Trabajo, de acuerdo con las disposiciones de la parte XIII del Tratado de Versalles y partes correspondientes de los demás tratados de paz:

Artículo 1º — Para la aplicación del presente convenio, las autoridades competentes de cada país definirán los términos «buque de emigrantes» y «emigrantes».

Art. 2º — Todo miembro que ratifique el presente convenio se compromete a aceptar, en principio, y a reserva de las disposiciones siguientes, que el servicio oficial de inspección encargado de velar por la protección de los emigrantes a bordo de un «buque de emigrantes», no sea realizado por más de un gobierno.

Esta disposición no constituye obstáculo para que el gobierno de otro país pueda, ocasionalmente, hacer acompañar a sus emigrantes por uno de sus representantes embarcado a su costa en calidad de observador y siempre y cuando no se inmiscuya en las funciones del inspector oficial.

Art. 3º — Si un inspector oficial de los emigrantes es instalado a bordo de un barco de emigrantes, será designado, por regla general, por el gobierno del país cuyo pabellón lleva el barco. Sin embargo, ese inspector puede ser designado por otro gobierno en virtud de acuerdo entre el gobierno del país cuyo pabellón lleva el barco y uno o varios gobiernos a cuyas nacionalidades pertenezcan los emigrantes que se encuentren a bordo.

Art. 4º — La determinación de los conocimientos prácticos y de las cualidades profesionales y morales indispensables que se exigirán a un inspector oficial, será de la competencia del gobierno que lo designe.

Un inspector oficial no puede, en ningún caso, estar directa o indirectamente en relaciones con el armador o la compañía de navegación ni depender de ellos.

Esta disposición no es obstáculo para que un gobierno pueda, excepcionalmente y obligado por nece-

sidad absoluta, designar al médico del barco como inspector oficial.

Art. 5º — El inspector oficial velará por el respeto de los derechos de los emigrantes según la ley del país cuya bandera lleva el barco o de cualquier otra ley que sea aplicable, así como de los acuerdos internacionales y los contratos de transporte.

El gobierno del país cuya bandera lleva el barco comunicará al inspector oficial, cualquiera que sea la nacionalidad de éste, el texto de las leyes y reglamentos vigentes que interesen a la condición de los emigrantes, así como los acuerdos internacionales y contratos en vigor relativos al mismo objeto, que hayan sido comunicados a dicho gobierno.

Art. 6º — La autoridad del capitán a bordo no mengua con el presente convenio. El inspector oficial no estorbará en ningún caso a la autoridad del capitán, y solamente se ocupará de velar por la aplicación de las leyes, reglamentos, acuerdos o contratos que se refieran directamente a la protección y al bienestar de los emigrantes a bordo.

Art. 7º — Ocho días después de la llegada al puerto de destino, el inspector oficial entregará un informe al gobierno del país a que pertenece el barco, el cual comunicará un ejemplar de este informe a los otros gobiernos interesados que lo hayan solicitado previamente.

Una copia de este informe será entregada por el inspector oficial al capitán del barco.

Art. 8º — Las ratificaciones oficiales del presente convenio en las condiciones previstas en la parte XIII del Tratado de Versalles y en las partes correspondientes de los demás tratados de paz, serán comunicadas al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registradas por él.

Art. 9º — El presente convenio entrará en vigor en cuanto las ratificaciones de dos miembros de la Organización Internacional del Trabajo hayan sido registradas por el secretario general.

Este convenio sólo obligará a los miembros cuya ratificación haya sido registrada en la secretaría.

En lo sucesivo, este convenio entrará en vigor, para cada miembro, en la fecha en que haya sido registrado en la secretaría.

Art. 10. — En cuanto se registren en la secretaría las ratificaciones de dos miembros de la Organización Internacional del Trabajo, el secretario general de la Sociedad de las Naciones pondrá el hecho en conocimiento de todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Les notificará también el registro de las ratificaciones que le comuniquen posteriormente los demás miembros de la organización.

Art. 11. — Bajo reserva de las disposiciones del artículo 9º, todo miembro que ratifique el presente convenio se compromete a aplicar los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º, lo más tarde el 1º de enero de 1928, y a tomar las medidas necesarias para hacer efectivas dichas disposiciones.

Art. 12. — Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente convenio se compromete a aplicarlo en sus colonias, posesiones o protectorados, de acuerdo con las disposiciones del artículo 421 del Tratado de Versalles y de los correspondientes artículos de los demás tratados de paz.

Art. 13. — Todo miembro que ratifique el presente convenio puede denunciarlo al expirar un período de diez años contados desde el momento en que este convenio entre en vigor, comunicándolo al secretario

general de la Sociedad de las Naciones, quien registrará la denuncia. La denuncia no tendrá efecto sino un año después de haber sido registrada en la secretaría.

Art. 14. — Por lo menos una vez cada diez años el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la conferencia general un informe referente a la aplicación del presente convenio, y decidirá si conviene inscribir en la orden del día de la Conferencia la cuestión de la revisión o modificación de dicho convenio.

Art. 15. — Los textos francés e inglés del presente convenio son igualmente auténticos.

Proyecto de convenio (número 22) relativo al contrato de alistamiento de los marinos (1)

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones, Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1926 en su novena reunión.

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al contrato de alistamiento de los marinos, cuestión incluida en el primer punto del orden del día de la reunión, y después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un proyecto de convenio internacional.

Adopta, con fecha veinticuatro de junio de mil novecientos veintiséis, el proyecto de convenio siguiente para su ratificación por los miembros de la Organización Internacional del Trabajo, conforme a las disposiciones de la parte XIII del Tratado de Versalles y partes correspondientes de los demás tratados de paz:

Artículo 1º — El presente convenio se aplica a todos los navíos de mar matriculados en el país de uno de los miembros que ratifique el presente convenio y a los armadores, capitanes y marinos de estos navíos. No se aplica:

- A los navíos de guerra,
- A los navíos del Estado que no tengan aplicación comercial,
- A los navíos afectos al cabotaje nacional,
- A los yates de recreo,
- A las embarcaciones comprendidas bajo la denominación de *Indian country craft*.
- A los barcos de pesca,

A las embarcaciones marítimas de un desplazamiento bruto inferior a cien toneladas, o a trescientos metros cúbicos y, si se trata de navíos afectos al *Home trade*, de un desplazamiento inferior al límite fijado para el régimen particular de estos navíos por la legislación nacional en vigor en el momento de la adopción del presente convenio.

Art. 2º — Para la aplicación del presente convenio, los términos siguientes deben entenderse:

- a) El término «navío», comprende todo navío o embarcación de cualquier naturaleza que sea, de propiedad pública o privada, que efectúe habitualmente una navegación marítima;
- b) El término «marino», comprende a toda persona empleada o contratada a bordo, bajo cualquier título que sea, y figurando en la lista de

la tripulación, excepción hecha de los capitanes, pilotos, alumnos de los navíos escuelas y aprendices, cuando éstos estén ligados por un contrato especial de aprendizaje; excluye a las tripulaciones de la flota de guerra y a las demás personas al servicio permanente del Estado;

- c) El término «capitán», comprende a toda persona que tenga el mando y la responsabilidad de un navío, excepción hecha de los pilotos;
- d) Los términos «navíos afectos al *home trade*», se aplican a los navíos afectos al comercio entre puertos de un país dado y puertos de un país vecino, en los límites geográficos fijados por la legislación nacional.

Art. 3º — El contrato de alistamiento es firmado por el armador o su representante y por el marino.

Deben darse al marino, y eventualmente a su consejero, facilidades para examinar el contrato de alistamiento antes de que éste sea firmado.

Las condiciones del contrato que ha de firmar el marino serán determinadas por la legislación, de manera que aseguren que la autoridad pública competente puede velar por su cumplimiento.

Las disposiciones que preceden relativas a la firma del contrato son consideradas como observadas si se establece por un acta de la autoridad competente que las cláusulas del contrato han sido confirmadas a la vez por el armador o su representante y por el marino.

La legislación nacional debe prever las disposiciones para garantizar que el marino entiende el sentido de las cláusulas del contrato.

El contrato no debe contener ninguna disposición que sea contraria a la legislación nacional o al presente convenio.

La legislación nacional debe prever todas las demás formalidades y garantías concernientes a la conclusión del contrato que se juzgue necesarias para proteger los intereses del armador y del marino.

Art. 4º — Deben ser tomadas medidas apropiadas, de acuerdo con la legislación nacional, para garantía de que el contrato de alistamiento no contiene ninguna cláusula por la cual las partes convinieran de antemano en derogar las reglas normales de competencia de la jurisdicción.

Esta disposición no debe ser interpretada como excluyendo el recurso al arbitraje.

Art. 5º — Todo marino debe recibir un documento conteniendo la mención de sus servicios a bordo del navío. La legislación nacional debe determinar la forma de este documento, las menciones que deben figurar y las condiciones en que debe ser establecido.

Este documento no contendrá apreciación alguna sobre la calidad del trabajo del marino ni ninguna indicación sobre su salario.

Art. 6º — El contrato de alistamiento puede ser hecho por duración determinada, o por viaje, o, si la legislación nacional lo permite, por duración indeterminada.

El contrato de alistamiento debe indicar claramente los derechos y las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

Debe contener, obligatoriamente, las siguientes menciones:

- 1º El apellido y nombre del marino, la fecha de su nacimiento o su edad, así como el lugar de su nacimiento;

- 2º El lugar y la fecha de la conclusión del contrato;
- 3º La designación del navío o navíos a bordo del cual o de los cuales el marino se compromete a servir;
- 4º El efectivo de la tripulación del navío, si la legislación nacional prescribe esta mención;
- 5º El viaje o viajes que emprenda, si pueden ser determinados en el momento del contrato;
- 6º El servicio a que debe ser agregado el marino;
- 7º Si es posible, el lugar y la fecha en que el marino está obligado a presentarse a bordo para comenzar su servicio;
- 8º Los víveres a suministrar al marino, salvo en el caso en que la legislación nacional prevea un régimen diferente;
- 9º El importe de los salarios;
10. El término del contrato, o sea:

- a) Si el contrato ha sido concertado para una duración determinada, la fecha fijada para la expiración del contrato;
- b) Si el contrato ha sido firmado por viaje, el destino convenido para fin del contrato y la indicación del plazo en que el marino será licenciado después de su llegada a ese destino;
- c) Si el contrato ha sido hecho por duración indeterminada, las condiciones en que cada parte podrá denunciar el contrato, así como el plazo de aviso, no pudiendo este plazo de aviso ser más corto para el armador que para el marino.
11. El permiso pagado anual, acordado al marino, después de un año pasado al servicio del mismo armador, si la legislación nacional prevé tal permiso;
12. Todas las demás menciones que la legislación nacional imponga.

Art. 7º — Cuando la legislación nacional prevea que habrá a bordo una lista de tripulación, ésta deberá indicar que el contrato de alistamiento ha sido transcrito en la lista de la tripulación o agregado a esta lista.

Art. 8º — A fin de permitir al marino que se asegure de la naturaleza y del alcance de sus derechos y obligaciones, la legislación nacional debe prever disposiciones que fijen las necesarias medidas para que el marino se pueda informar de manera precisa, a bordo, sobre las condiciones de su empleo, ya sea porque se fijen las cláusulas del contrato de alistamiento en un sitio fácilmente accesible a la tripulación, bien por toda otra medida adecuada.

Art. 9º — El contrato de alistamiento por duración indeterminada caduca por denuncia del contrato, por una u otra de las partes, en un puerto de carga o de descarga del navío, bajo la condición de que sea observado el plazo de aviso convenido a este fin, y que debe ser por lo menos de veinticuatro horas.

El aviso debe ser dado por escrito; la legislación nacional debe determinar las condiciones en que debe ser dado el aviso, de manera a evitar toda objeción ulterior de las partes.

La legislación nacional debe determinar las circunstancias excepcionales en que el plazo de aviso, aunque este sea dado en forma de lista, no tendrá efecto la rescisión del contrato.

Art. 10. — El contrato de alistamiento concertado por viaje, por duración determinada o indeterminada, quedará legalmente rescindido en los casos siguientes:

- a) Mutuo consentimiento de las partes;
- b) Fallecimiento del marino;
- c) Pérdida o incapacidad absoluta del navío para la navegación;
- d) Cualquier otra causa estipulada por la legislación nacional o el presente convenio.

Art. 11. — La legislación nacional debe fijar las circunstancias en que el armador o el capitán tienen la facultad de despedir inmediatamente al marino.

Art. 12. — Asimismo debe determinar la legislación nacional las circunstancias en que el marino tiene la facultad de pedir su inmediato desembarco.

Art. 13. — Si el marino prueba al armador o a su representante que tiene la posibilidad de obtener el mando de un navío, el empleo de oficial, el de oficial mecánico, o cualquier otro empleo de mayor categoría que el que ocupa, o que, por circunstancias surgidas después de su contrato, el abandono presenta para él un interés capital, puede pedir su sustitución por una persona competente, aceptada por el armador o su representante, sin que ello signifique nuevos gastos para el armador.

En este caso, el marino tiene derecho a los salarios correspondientes a la duración del servicio prestado.

Art. 14. — Cualquiera que sea la causa de expiración o de rescisión del contrato, la anulación de todo alistamiento debe ser registrada en el documento entregado al marino, conforme al artículo 5º, y en lista la de la tripulación, con una mención especial la que, a petición de una u otra de las partes, debe tener el visado de la autoridad pública competente.

En todos los casos el marino tiene derecho a hacerse dar, por el capitán, un certificado por separado en el que se haga aprecio de su trabajo o se indique, por lo menos, si ha cumplido a satisfacción las obligaciones de su contrato.

Art. 15. — Corresponde a la legislación nacional el prever las medidas adecuadas para asegurar la observancia de las disposiciones del presente convenio.

Art. 16. — Las ratificaciones oficiales del presente convenio en las condiciones previstas por la parte XIII del Tratado de Versalles y las partes correspondientes de los demás tratados de paz, serán comunicadas al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registradas por él.

Art. 17. — El presente convenio entrará en vigor cuando las ratificaciones de dos miembros de la Organización Internacional del Trabajo hayan sido registradas por el secretario general.

No obligará sino a los miembros cuya ratificación haya sido registrada en la secretaría.

En lo sucesivo, este convenio entrará en vigor para cada miembro, en la fecha en que haya sido registrada su ratificación en la secretaría.

Art. 18. — Tan pronto como las ratificaciones de dos miembros de la Organización Internacional del Trabajo hayan sido registradas en la secretaría, el secretario general de la Sociedad de las Naciones notificará este hecho a todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Igualmente les notificará el registro de las ratificaciones que ulteriormente sean comunicadas por los demás miembros de la organización.

Art. 19. — A reserva de las disposiciones del artículo 17, todo miembro que ratifique el presente convenio se compromete a aplicar las disposiciones de los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 lo más tarde el 1º de enero de 1928 y a tomar las medidas que sean necesarias para hacer efectivas estas disposiciones.

Art. 20. — Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente convenio se compromete a aplicarlo en sus colonias, posesiones o protectorados, de acuerdo con las disposiciones del artículo 421 del Tratado de Versalles y de los artículos correspondientes de los demás tratados de paz.

Art. 21. — Todo miembro que haya ratificado el presente convenio puede denunciarlo al expirar un período de diez años, después de la fecha de entrada en vigor inicial del convenio, por un acta comunicada al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registrada por él. La denuncia no puede tener efecto sino un año después de ser registrada en la Secretaría.

Art. 22. — El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la conferencia, por lo menos una vez cada diez años, un informe sobre la aplicación del presente convenio y decidirá si ha lugar a inscribir en el orden del día de la conferencia la cuestión de la revisión o de la modificación de dicho convenio.

Art. 23. — Los textos francés e inglés del presente convenio son igualmente auténticos.

Proyecto de convenio (número 23) relativos a la repatriación de los marinos (1)

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones: Convocada en Ginebra por el Consejo de administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 7 de junio de 1926, en su novena reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la repatriación de los marinos, cuestión comprendida en el primer punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un proyecto del convenio internacional, adopta, con fecha veintitrés de junio de mil novecientos veintiséis, el siguiente proyecto de convenio para su ratificación por los miembros de la Organización Internacional del Trabajo, conforme a las disposiciones de la parte XIII del Tratado de Versalles, y partes correspondientes de los demás tratados de paz:

Artículo 1º — El presente convenio se aplica a todos los buques que se dediquen regularmente a la navegación marítima y que estén matriculados en el país de uno de los miembros que haya ratificado el presente convenio, lo mismo que a los propietarios, capitanes y tripulantes de estos buques.

El presente convenio no es aplicable:

- A los buques de guerra,
A los navíos del Estado no dedicados al comercio,
A los barcos dedicados al cabotaje nacional,
A los yates de recreo,

(1) Este convenio ha entrado en vigor el 16 de abril de 1928.

A los *indian country craft*,
A los barcos de pesca.

A los barcos de un desplazamiento inferior a 100 toneladas o 300 metros cúbicos, y si se trata de navíos dedicados al *home trade*, el límite de desplazamiento es el fijado para el régimen particular de estos navíos por la legislación nacional en vigor en el momento de la adopción del presente convenio.

Art. 2º — Por lo que se refiere a la aplicación del presente convenio, los términos que siguen se entenderán de este modo:

- a) El término «navío», se refiere a todo buque o barco de cualquiera especie, de propiedad pública o particular, que se dedique regularmente a la navegación marítima;
- b) El término «marino», comprende todas las personas (excepto los capitanes, pilotos, alumnos de los buques escuelas y aprendices obligados por un contrato especial de aprendizaje) empleadas o contratadas a bordo y que figuren en la lista de la tripulación. Quedan excluidos los tripulantes de la flota de guerra y demás marinos al servicio permanente del Estado;
- c) El término «capitán», se refiere a todas las personas, excepto los pilotos, que manden y tengan la responsabilidad de un buque;
- d) El término «buque destinado al *home trade*», se aplica a los buques que realizan el comercio entre los puertos de un país determinado y los puertos de un país vecino, dentro de los límites geográficos fijados por la legislación nacional.

Art. 3º — Todo marinero desembarcado durante su contrato o al término de éste, tiene derecho a ser transportado a su país, al punto de alistamiento o al punto de salida del barco. La legislación nacional debe adoptar las disposiciones necesarias a este efecto, sobre todo para determinar a quién incumbe la repatriación.

La repatriación se considera como asegurada cuando se haya dado al marino un empleo aceptable a bordo de un buque que se dirija a uno de los destinos determinados en virtud del párrafo precedente.

Se considera repatriado el marino desembarcado en su país, en el punto de su alistamiento, en un punto próximo o en el puerto de salida del buque.

La legislación nacional, y a falta de disposiciones legislativas al contrato de alistamiento, determinará las condiciones en que tienen derecho a ser repatriados los marinos extranjeros embarcados en un país que no sea el suyo. Sin embargo, las disposiciones de los párrafos anteriores siguen siendo aplicables a los marinos embarcados en su propio país.

Art. 4º — Los gastos de repatriación no irán a cargo del marino, si éste ha sido abandonado por:

- a) Un accidente ocurrido en el transcurso del servicio a bordo;
- b) Un naufragio;
- c) Una enfermedad que no puede imputarse ni a un hecho voluntario ni a una negligencia del mismo;
- d) Despido por cualquier causa ajena a su voluntad.

Art. 5º — La indemnización por repatriación debe comprender todos los gastos relativos al transporte, al alojamiento y manutención del marino durante el viaje. Están comprendidos los gastos del marino en tierra hasta que emprenda su regreso.

Cuando el marino es repatriado como miembro de una tripulación, tendrá derecho a la remuneración por los servicios prestados durante el viaje.

Art. 6º — La autoridad pública del país del pabellón del buque tendrá la obligación de cuidarse de la repatriación de todos los marineros, sin distinción de nacionalidad, en los casos en que este convenio les sea aplicable. En caso necesario, deberá adelantar los gastos de repatriación.

Art. 7º — Las ratificaciones oficiales del presente convenio en las condiciones previstas en la parte XIII del Tratado de Versalles y partes correspondientes de los demás tratados de paz, serán comunicadas al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registradas por él.

Art. 8º — El presente convenio entrará en vigor cuando las ratificaciones de dos miembros de la Organización Internacional del Trabajo sean registradas por el secretario general.

No obligará más que a los miembros cuya ratificación haya sido registrada por la Secretaría.

Este convenio entrará en vigor, para cada miembro en la fecha en que la ratificación haya sido registrada por la Secretaría.

Art. 9º — Inmediatamente después que las ratificaciones de los miembros de la Organización Internacional del Trabajo se hayan registrado por la Secretaría, el secretario general de la Sociedad de las Naciones notificará este hecho a todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo; igualmente les notificará el registro de las ratificaciones que le sean comunicadas ulteriormente por los demás miembros de la organización.

Art. 10. — A reserva de las disposiciones del artículo 8º, todo miembro que ratifique el presente convenio se compromete a aplicar las disposiciones de los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º lo más tarde, el 1º de enero de 1928 y a tomar las medidas que juzgue necesarias para hacer efectivas estas disposiciones.

Art. 11. — Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente convenio se compromete a aplicarlo en sus colonias, posesiones o protectorados, conforme a las disposiciones del artículo 421 del Tratado de Versalles y artículos correspondientes de los demás tratados de paz.

Art. 12. — Todo miembro que haya ratificado el presente convenio puede denunciarlo a la expiración de un período de diez años, después de la fecha, en que sea puesto en vigor inicial el convenio, por un acta comunicada al secretario general de la Sociedad de las Naciones y por él registrada. La denuncia no tendrá efecto más que un año después de haber sido registrada por la Secretaría.

Art. 13. — El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá, por lo menos una vez cada diez años, presentar a la conferencia general un informe sobre la aplicación del presente convenio y decidirá si se debe inscribir en el orden del día de la conferencia la cuestión de la revisión o de la modificación de dicho convenio.

Art. 14. — Los textos francés e inglés del presente convenio, son los auténticos.

Proyecto de convenio (número 26), relativo a la institución de métodos para la fijación de salarios mínimos (1).

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones; Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 30 de mayo de 1928, en su undécima reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a los métodos para la fijación de salarios mínimos, cuestión que constituye el punto primero del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un proyecto de convenio internacional, adopta, con fecha dieciséis de junio de mil novecientos veintiocho, el proyecto de convenio siguiente para su ratificación por los miembros de la Organización Internacional del Trabajo, de acuerdo con las disposiciones de la parte XIII del Tratado de Versalles y partes correspondientes de los demás tratados de paz:

Artículo 1º — Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente convenio, se compromete a establecer o conservar métodos que permitan la fijación de tipos mínimos de salarios para los trabajadores empleados en las industrias o partes de industria (especialmente en las industrias a domicilio) en las que no exista un régimen eficaz para la fijación de los salarios, por medio de contratos colectivos u otro sistema, y en las que los salarios sean excepcionalmente bajos.

La palabra «industrias» comprende, a los fines de este convenio, las industrias de transformación y el comercio.

Art. 2º — Cada miembro que ratifique el presente convenio queda en libertad para decidir, después de consultar a las organizaciones patronales y obreras, caso de que existan en la industria o parte de la industria en cuestión, a qué industrias o parte de industria, y especialmente a qué industrias a domicilio o parte de estas industrias, podrán aplicarse los métodos para la fijación de salarios mínimos, previstos en el artículo 1º.

Art. 3º — Cada uno de los miembros que ratifique el presente convenio queda en libertad para determinar los métodos para la fijación de salarios mínimos, así como las modalidades de su aplicación.

Sin embargo,

1º Antes de aplicar los métodos a una industria, o parte de una industria determinada, se consultará a los representantes de los patronos y de los obreros interesados, a los representantes de sus organizaciones respectivas, caso de que estas organizaciones existan; se consultará también a todas las personas, especialmente calificadas, ya sea por su profesión o sus funciones y a las que la autoridad competente crea oportuno dirigirse;

2º Los patronos y obreros interesados deberán participar en la aplicación de los métodos, en la forma y en la medida que determinará la legislación nacional, pero siempre en número igual y en un mismo pie de igualdad;

(1) Este convenio ha entrado en vigor el 14 de junio de 1930.

3º Los tipos mínimos de salarios fijados serán obligatorios para los patronos y obreros interesados y no podrán ser rebajados por ellos, mediante acuerdo individual, ni por contrato colectivo, salvo autorización general o particular de la autoridad competente.

Art. 4º — Todo miembro que ratifique el presente convenio debe tomar las medidas necesarias mediante un sistema de control y de sanciones, para que los patronos y obreros interesados conozcan los tipos mínimos de salario en vigor y para que los salarios pagados no sean inferiores a los tipos mínimos aplicables.

Todo trabajador al que sea aplicable el tipo mínimo y que haya recibido salarios inferiores a estos tipos, tendrá derecho a percibir la suma que se le debe, dentro de un plazo fijado por la legislación nacional, por vía judicial o por cualquier vía legal.

Art. 5º — Todo miembro que ratifique el presente convenio deberá enviar todos los años a la Oficina del Trabajo un informe general en el que figure la lista de las industrias o partes de industria a las que se apliquen los métodos de fijación de los salarios mínimos, dando a conocer, al mismo tiempo, las modalidades de aplicación de estos métodos y sus resultados. En esta exposición figurarán indicaciones sumarias sobre el número aproximado de trabajadores sometidos a esta reglamentación, los tipos de salarios mínimos fijados y, en caso necesario, las demás medidas importantes que se tomen respecto de los mismos.

Art. 6º — Las ratificaciones oficiales del presente convenio según las condiciones previstas en la parte XIII del Tratado de Versalles y partes correspondientes de los demás tratados de paz, serán comunicadas al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registradas por él.

Art. 7º — El presente convenio no obligará más que a los miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuya ratificación haya sido registrada en la secretaría.

Entrará en vigor doce meses después de haber sido registradas por el secretario general las ratificaciones de dos miembros.

En lo sucesivo, este convenio entrará en vigor para cada miembro doce meses después de la fecha del registro de su ratificación.

Art. 8º — Tan pronto como las ratificaciones de dos miembros de la Organización Internacional del Trabajo hayan sido registradas en la secretaría, el secretario general de la Sociedad de las Naciones lo notificará a todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Les notificará igualmente el registro de las ratificaciones que le sean ulteriormente comunicadas por los demás miembros de la organización.

Art. 9º — Todo miembro que haya ratificado el presente convenio puede denunciarlo al expirar un período de diez años después de la fecha de la entrada en vigor inicial del convenio, por un acta comunicada al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registrada por él. La denuncia tendrá efecto un año después de haber sido registrada en la secretaría.

Todo miembro que haya ratificado el presente convenio, y que, en el plazo de un año, después de la expiración del período de diez mencionado en el párrafo precedente, no haga uso de la facultad de denuncia, prevista por el presente artículo, quedará

obligado por un nuevo período de cinco años y, en lo sucesivo, podrá denunciar el presente convenio a la expiración de cada período de cinco años, dentro de las condiciones previstas por el presente artículo.

Art. 10. — Por lo menos una vez cada diez años el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la conferencia un informe sobre la aplicación del presente convenio y decidir si ha lugar a inscribirse en el orden del día de la conferencia la cuestión de la revisión o de la modificación de dicho convenio.

Art. 11. — Los textos francés e inglés del presente convenio son igualmente auténticos.

Recomendación (número 30) concerniente a la aplicación de los métodos para fijación de salarios mínimos.

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones,

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 30 de mayo de 1928, en su undécima reunión;

Después de haber acordado adoptar diversas proposiciones relativas a los métodos para fijación de salarios mínimos, cuestión que constituye el primer punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una recomendación,

Adopta con fecha dieciséis de junio de mil novecientos veintiocho, la recomendación siguiente, que debe someterse al examen de los miembros de la Organización Internacional del Trabajo, para que tenga efecto en forma de ley nacional u otra forma, de conformidad con las disposiciones de la parte XIII del Tratado de Versalles y partes correspondientes de los demás tratados de paz.

A

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,

Después de haber adoptado un proyecto de convenio referente a la institución de métodos para la fijación de salarios mínimos, y

Deseando completar este proyecto de convenio recordando, a título de indicación para los Estados miembros, ciertos principios generales que, según la experiencia y la práctica actual, dan resultados satisfactorios,

Recomienda a cada miembro de la organización que tome en consideración los principios y reglas que se enuncian a continuación:

I

1) A fin de que cada miembro que ratifique el convenio esté en posesión de las informaciones necesarias que le permitan tomar una decisión con referencia a la aplicación de los métodos para fijar salarios mínimos, los salarios efectivamente pagados y el régimen, si existe, para la reglamentación de los salarios, deberían ser objeto de una encuesta en cada industria o parte de industria en la cual los patronos o los obreros pidan la aplicación de los métodos, y proporcionen datos que prueben, desde luego, que no cuentan con un régimen eficaz para la fijación de salarios y que estos salarios son excepcionalmente bajos.

2) Sin afectar a la libertad que el proyecto de convenio deja a los Estados miembros para la determinación, en sus países respectivos, de las industrias o partes de industrias a las cuales estimen oportuno aplicar los métodos para la fijación de los salarios mínimos, podría haber interés en examinar más especialmente las industrias o partes de industrias en las que se empleen habitualmente mujeres.

II

1) Los métodos para la fijación de los salarios mínimos, cualquiera que sea su forma (por ejemplo, consejos de industria para cada industria en particular, consejos centrales para grupos de industrias, tribunales de arbitraje obligatorio) debieran dar lugar a una encuesta previa sobre las condiciones de la industria o de parte de la industria de que se trata, así como a la consulta a las partes esencial y principalmente interesadas, es decir, los patronos y los obreros, de esta industria o parte de industria; en todo caso, debería solicitarse su opinión en todas las cuestiones relativas a la fijación de los salarios mínimos, teniendo en cuenta, de la manera más amplia y equitativa.

2. a) Para dar mayor autoridad a los tipos eventualmente establecidos, sería deseable que se concediese a los patronos y a los trabajadores interesados una participación directa y paritaria en las deliberaciones y en las decisiones de los organismos para la fijación de salarios, mediante representantes iguales en número y con igual número de votos. En cualquier caso, si se concede tal representación a una de las dos partes, la otra deberá estar representada en el mismo pie de igualdad. Los organismos encargados de la fijación de salarios mínimos deberían comprender también una o varias personas independientes cuyos votos hagan posible la adopción de acuerdos decisivos en caso de que los votos de los patronos y de los obreros se dividieran en partes iguales: estas personas independientes deberían ser elegidas, cuando fuese posible, de acuerdo con los representantes patronales y obreros de los organismos encargados de fijar los salarios mínimos o después de consultados dichos representantes.

b) A fin de que los representantes patronales y obreros puedan tener la confianza de aquellos cuyos intereses representan los patronos y obreros interesados, deberán tener el derecho, en la medida en que las circunstancias lo permitan, de participar en la designación de sus representantes y, en cualquier caso, las organizaciones de patronos y las de obreros deberán ser invitadas a proponer los nombres de personas para formar parte de los organismos para la fijación de salarios.

c) La persona o personas independientes a que se refiere el apartado a), deberán ser elegidas de entre las personas de uno u otro sexo que posean necesariamente las condiciones exigibles para el cumplimiento de sus funciones, y que no tengan en la industria o rama de la industria de que se trate, ningún interés que pueda hacer suponer su parcialidad.

d) Cuando en una industria o rama de una industria sea empleada un gran número de mujeres, convendría, en la medida de lo posible, que algunas de éstas formaran parte de los organismos para fijación de salarios, representación de obreras, y que una o varias mujeres fueran designadas entre las personas

III

Para la determinación de los tipos mínimos de salarios que deberán fijarse, los organismos de fijación de salarios deberán tener en cuenta la necesidad de asegurar a los obreros un nivel de vida suficiente. A tal efecto, convendría primeramente inspirarse en los tipos de salarios pagados para trabajos similares en las industrias en que los trabajadores se hallan suficientemente organizados, y han llegado a concertar contratos colectivos eficaces, y de no tener este término de comparación, deberán inspirarse en el nivel general de salarios en el país o la localidad respectivos.

Deberán existir disposiciones para prever la revisión de los tipos mínimos de salarios fijados por los organismos de fijación de los mismos, cuando los obreros o los patronos que forman parte de estos organismos así lo deseen.

IV

Para la protección eficaz de los salarios de los obreros interesados y a fin de ahorrar a los patronos los riesgos de una competencia desleal, las medidas destinadas a asegurar el pago de salarios que no sean inferiores a los salarios mínimos fijados deberán comprender:

- Medidas que tengan por fin poner a los patronos y a los trabajadores al corriente de los tipos en vigor;
- Un control oficial de los salarios efectivamente pagados;
- Sanciones en caso de infracción de los tipos en vigor y medidas destinadas a prevenir estas infracciones.

1) Para que los trabajadores que, desde luego, tienen menos facilidades que los patronos para informarse por sus propios medios sobre las decisiones de los organismos para la fijación de salarios estén al corriente de los tipos mínimos que deberían pagarse, se podrá obligar a los patronos a fijar cuadros detallados indicando los tipos en vigor, en lugares fácilmente accesibles de los locales en que los trabajadores estén ocupados, y para los obreros a domicilio en los locales donde se distribuya el trabajo, o se entregue una vez terminado, o donde se paguen los salarios.

2) Convendría emplear un número suficiente de inspectores con facultades análogas a las que han sido propuestas para los inspectores del trabajo en la recomendación referente a los principios generales para la organización de los servicios de inspección, adoptada por la conferencia general de 1923; estos inspectores deberán llevar a cabo encuestas entre los patronos y los trabajadores interesados, a fin de comprobar si los salarios efectivamente pagados están conformes con los tipos o índices en vigor, y tomar, eventualmente, las medidas que puedan ser autorizadas en los casos de infracción de los tipos fijados.

Para facilitar a los inspectores el mejor cumplimiento de sus funciones, los patronos podrán ser obligados a llevar listas completas y exactas de los salarios pagados por ellos, o, cuando se trate de trabajadores a domicilio, una lista de estos obreros con sus direcciones, así como a suministrarles cartillas

de salarios u otros documentos análogos que contengan los datos necesarios para comprobar si los salarios efectivamente pagados están en conformidad con los índices en vigor.

3) En los casos en que los trabajadores no se hallen en general, en condiciones de ejercer personalmente, por la vía judicial u otra legal, su derecho a percibir el importe del salario que les sea debido de conformidad con los tipos mínimos en vigor, podrán preverse aquellas otras medidas eficaces para prevenir las infracciones a los tipos fijados.

B

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo se cree en el deber de llamar la atención de los gobiernos sobre el principio del salario igual, sin distinción de sexo, para un trabajo de valor igual, consagrado por el artículo 427 del Tratado de Paz.

Proyecto de convenio (número 27), relativo a la indicación del peso en los grandes bultos transportados por barco (1).

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones, convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 30 de mayo de 1929, en su duodécima reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la indicación del peso en los grandes bultos transportados por barco, cuestión comprendida en el primer punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un proyecto de convenio internacional,

Adopta, con fecha veintiuno de julio de mil novecientos veintinueve, el siguiente proyecto de convenio para su ratificación por los miembros de la Organización Internacional del Trabajo de conformidad con las disposiciones de la parte XIII del Tratado de Versalles y partes correspondientes de los demás tratados de paz:

Artículo 1º— Todo bulto u objeto que pese 1.000 kilogramos (una tonelada métrica) o más de peso bruto, consignado en los límites del territorio de todo miembro que ratifique el presente convenio, y que haya de ser transportado por mar o vía navegable interior, deberá, antes de ser embarcado, llevar marcado su peso en el exterior, en forma clara y duradera.

La legislación nacional podrá autorizar la indicación del peso aproximado en aquellos casos excepcionales en que sea difícil determinar el peso exacto.

Tan sólo está obligado a velar por la observancia de esta disposición el gobierno del país de expedición del bulto u objeto, a excepción del gobierno de cualquier otro país cuyo territorio haya de atravesar el bulto para llegar a su destino.

Incumbe a las legislaciones nacionales decidir si la obligación de indicar el peso de la manera antes

(1) Este convenio ha entrado en vigor el 9 de marzo de 1932.

mencionada debe corresponder al remitente o a otra persona.

Art. 2º— Las ratificaciones oficiales del presente convenio en las condiciones previstas en la parte XIII del Tratado de Versalles y en las partes correspondientes de los demás tratados de paz, serán comunicadas al secretario general de la Sociedad de las Naciones, y registradas por él.

Art. 3º— El presente convenio no obligará sino a los miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuya ratificación haya sido registrada en la secretaría.

El convenio entrará en vigor doce meses después de que las ratificaciones de dos miembros hayan sido registradas por el secretario general.

En lo sucesivo, este convenio entrará en vigor para cada miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Art. 4º— Tan pronto como las ratificaciones de dos miembros de la Organización Internacional del Trabajo hayan sido registradas en la secretaría, el secretario general de la Sociedad de las Naciones notificará este hecho a todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Les comunicará, igualmente, en registro de las ratificaciones que le sean comunicadas ulteriormente por los demás miembros de la organización.

Art. 5º— Todo miembro que haya ratificado el presente convenio puede denunciarlo al final de un período de diez años, a contar de la fecha de entrada en vigor inicial del convenio, por comunicación dirigida al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registrada por él. La denuncia no tendrá efecto sino un año después de haber sido registrada en la secretaría.

Todo miembro que haya ratificado el presente convenio y que, en el plazo de un año, después de la expiración del período de diez, mencionado en el precedente apartado, no haga uso de la facultad de denuncia prevista por el presente artículo, quedará durante un nuevo período de diez años y, en lo sucesivo, podrá denunciar el presente convenio al final de cada período de diez años, en las condiciones previstas por el presente artículo.

Art. 6º— Al final de cada período de diez años, contados a partir de la entrada en vigor del presente convenio, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la conferencia general un informe sobre la aplicación del presente convenio y decidirá si ha lugar a inscribir en el orden del día de la conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Art. 7º— En el caso de que la Conferencia Internacional adoptase un nuevo convenio que constituya revisión total o parcial del presente, la ratificación por un miembro del nuevo convenio revisado, implicaría la denuncia en pleno derecho del presente convenio, sin condición de plazo, a pesar del artículo 5º precedente, bajo reserva de que el nuevo convenio revisado haya entrado en vigor.

A partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo convenio, de revisión, el presente convenio no podrá ser ya objeto de ratificación por los miembros.

El presente convenio quedará, sin embargo, en vigor en su forma y contenido, para los miembros que lo hubieran ratificado y que no ratificasen el nuevo convenio revisado.

Art. 8º— Los textos francés e inglés del presente convenio son igualmente auténticos.

Proyecto de convenio (número 29) relativo al trabajo forzoso u obligatorio (1)

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones, Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 10 de junio de 1930, en su décimocuarta reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al trabajo forzoso u obligatorio, cuestión que constituye el punto primero del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un proyecto de convenio internacional,

Adopta, con fecha veintiocho de junio de mil novecientos treinta, el siguiente proyecto de convenio, para su ratificación por los miembros de la Organización Internacional del Trabajo, de acuerdo con las disposiciones de la parte XIII del Tratado de Versalles y partes correspondientes de los demás tratados de paz;

Artículo 1º — Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente convenio se compromete a suprimir el empleo del trabajo forzoso u obligatorio, bajo todas sus formas, en el más breve plazo posible.

A los fines de esta supresión total, el trabajo forzoso u obligatorio podrá ser empleado durante el período transitorio únicamente para fines públicos y a título excepcional, en las condiciones y con las garantías estipuladas por los artículos siguientes.

A la expiración de un plazo de cinco años, a partir de la entrada en vigor del presente convenio y en ocasión del informe previsto en el artículo 31, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo examinará la posibilidad de suprimir, sin nuevo aplazamiento, el trabajo forzoso u obligatorio bajo todas sus formas y decidirá si ha lugar a inscribir esta cuestión en el orden del día de la conferencia.

Art. 2º — A los fines del presente convenio, el término «trabajo forzoso u obligatorio» designará todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente.

Sin embargo, el término «trabajo forzoso u obligatorio» no comprenderá, a los fines del presente convenio:

- Todo trabajo o servicio exigido en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio y aplicado a trabajos de carácter puramente militar;
- Todo trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos de un país que se gobierne plenamente por sí mismo;
- Todo trabajo o servicio exigido de un individuo como consecuencia de una condena pronunciada por sentencia judicial, a condición de que este trabajo o servicio sea ejecutado bajo la vigilancia y el control de las autoridades públicas y de que dicho individuo no sea cedido o puesto a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado;

d) Todo trabajo o servicio exigido en casos de fuerza mayor, es decir, en casos de guerra, siniestros o amenazas de siniestro, tales como incendios, inundaciones, hambres, temblores de tierra, epidemias y epizootias violentas, invasiones de animales, de insectos o de parásitos vegetales dañinos, y en general de todas las circunstancias que pongan en peligro o amenazan poner en peligro la vida o las condiciones normales de existencia del conjunto o de una parte de la población;

e) Los pequeños trabajos de aldea, es decir, los trabajos ejecutados en interés directo de esta colectividad por sus miembros, trabajos que, por tanto, pueden ser considerados como obligaciones cívicas normales que incumben a los miembros de la colectividad, a condición de que la misma población o sus representantes directos tengan el derecho de pronunciarse sobre la justificación de esos trabajos.

Art. 3º — A los fines del presente convenio, el término «autoridades competentes» designará a las autoridades metropolitanas, o bien a las autoridades centrales superiores del territorio interesado.

Art. 4º — Las autoridades competentes no deberán imponer o dejar que se imponga el trabajo forzoso u obligatorio en provecho de particulares, de compañías o de personas jurídicas de carácter privado.

Si existiera tal forma de trabajo forzoso u obligatorio en provecho de particulares, de compañías o de personas jurídicas de carácter privado en la fecha en que la ratificación del presente convenio por un Estado miembro haya sido registrada por el secretario general de la Sociedad de las Naciones, este miembro deberá suprimir el trabajo forzoso u obligatorio en la fecha de entrada en vigor del presente convenio.

Art. 5º — Ninguna concesión hecha a particulares, compañías o personas jurídicas habrá de tener como consecuencia la imposición de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio con objeto de producir o de recolectar los productos que esos particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado utilizan y con los que comercian. Si las concesiones existentes implican disposiciones que tengan por consecuencia la imposición de semejante trabajo forzoso u obligatorio, esas disposiciones deberán ser derogadas tan pronto como sea posible, a fin de satisfacer las prescripciones del artículo 1º del presente convenio.

Art. 6º — Los funcionarios de la administración, incluso cuando deban estimular a las poblaciones a su cargo a que se dediquen a una forma cualquiera de trabajo, no deberán ejercer sobre esas poblaciones una presión colectiva o individual al objeto de hacerlas trabajar para particulares, compañías o personas jurídicas.

Art. 7º — Los jefes que no ejerzan funciones administrativas no deberán recurrir al trabajo forzoso u obligatorio.

Los jefes que ejerzan funciones administrativas podrán recurrir con la autorización expresa de las autoridades competentes al trabajo forzoso u obligatorio en las condiciones previstas en el artículo 10 del presente convenio.

Los jefes legalmente reconocidos y que no reciban una remuneración adecuada bajo otra forma, podrán beneficiar del disfrute de servicios personales debidamente reglamentados, siempre que se tomen todas las medidas útiles para evitar abusos.

Art. 8º — La responsabilidad de toda decisión de recurrir al trabajo forzoso u obligatorio incumbirá a

las autoridades civiles superiores del territorio interesado.

Sin embargo, estas autoridades podrán delegar en las autoridades locales superiores el poder de imponer trabajo forzoso u obligatorio en caso de que este trabajo no tenga por efecto alejar a los trabajadores de su residencia habitual. Dichas autoridades podrán igualmente delegar en las autoridades locales superiores durante los períodos y en las condiciones que serán estipuladas por la reglamentación prevista en el artículo 23, la facultad de imponer un trabajo forzoso u obligatorio para la ejecución del cual los trabajadores deban alejarse de su residencia habitual, cuando se trate de facilitar el traslado de funcionarios de la administración en ejercicio de sus funciones y el transporte de material de la administración.

Art. 9º — Salvo las disposiciones contrarias estipuladas en el artículo 10 del presente convenio, toda autoridad con derecho para imponer trabajo forzoso u obligatorio no deberá permitir que se recurra a esta forma de trabajo si no se asegura previamente de que:

- El servicio o trabajo a realizar es de un interés directo e importante para la colectividad llamada a ejecutarlo;
- Este servicio o trabajo es de una necesidad actual o inminente;
- Ha sido imposible procurarse la mano de obra voluntaria para la ejecución de este servicio o trabajo, a pesar de la oferta de salarios y de condiciones de trabajo iguales, por lo menos, a las que se hallen en práctica para trabajos o servicios análogos en el territorio interesado;
- No resultará de dicho trabajo o servicio una carga demasiado pesada para la población actual, teniendo en cuenta la mano de obra disponible y su aptitud para emprender el trabajo en cuestión.

Art. 10. — El trabajo forzoso u obligatorio exigido a título de impuesto, y el trabajo forzoso u obligatorio impuesto para los trabajos de interés público por los jefes que ejerzan funciones administrativas, deberá ser progresivamente suprimido.

En espera de esta abolición, cuando el trabajo forzoso u obligatorio sea exigido a título de impuesto y cuando el trabajo forzoso u obligatorio sea impuesto por jefes que ejerzan funciones administrativas para la ejecución de trabajos de interés público, las autoridades interesadas deberán asegurarse previamente de que:

- El servicio o trabajo a ejecutar es de un interés directo e importante para la colectividad llamada a ejecutarlo;
- El servicio o trabajo es de una necesidad actual o inminente;
- No resultará de dicho trabajo o servicio una carga demasiado pesada para la población actual, habida cuenta de la mano de obra disponible y de su aptitud para emprender el trabajo en cuestión;
- La ejecución de este trabajo o servicio no obligará a los trabajadores a alejarse del lugar de su residencia habitual;
- La ejecución de este trabajo o servicio estará dirigida de acuerdo con las exigencias de la religión, de la vida social y de la agricultura.

Art. 11. — Sólo podrán estar sujetos al trabajo forzoso u obligatorio los adultos válidos del sexo masculino, cuya edad no sea inferior a dieciocho años ni superior a cuarenta y cinco. Salvo para las categorías de trabajo previstas en el artículo 10 del presente convenio, deberán observarse las limitaciones y condiciones siguientes:

- Reconocimiento previo (siempre y cuando esto sea posible) por un médico designado por la administración competente para comprobar la ausencia de toda enfermedad contagiosa, y la aptitud física de los interesados para soportar el trabajo impuesto y las condiciones en que será ejecutado;
- Exención del personal escolar, alumnos y profesores, así como del personal administrativo en general;
- Permanencia en cada colectividad del número de hombres adultos y válidos indispensables para la vida familiar y social;
- Respeto de los vínculos conyugales y familiares.

A los fines indicados en el párrafo c) arriba mencionado, la reglamentación prevista en el artículo 23 del presente convenio, fijará la proporción de los individuos de la población permanente masculina y válida que podrá ser objeto de un reclutamiento determinado, sin que esta proporción pueda, en ningún caso, ser superior al 25 % de esta población. Al fijar esa proporción, las autoridades competentes deberán tener en cuenta la densidad de población, el desarrollo social y físico de esta población, la época del año y el estado de los trabajos a efectuar por los interesados en el lugar y por su propia cuenta; de una manera general deberán respetar las necesidades económicas y social de la vida normal de la colectividad considerada.

Art. 12. — El período máximo durante el cual un individuo cualquiera podrá estar sujeto al trabajo forzoso u obligatorio bajo sus diversas formas, no deberá ser superior a sesenta días por cada período de doce meses, debiendo incluirse en estos sesenta días, los días de viaje necesarios para ir y volver al lugar donde se ejecute el trabajo.

Cada trabajador sujeto al trabajo forzoso u obligatorio deberá estar en posesión de un certificado en el que se indiquen los períodos de trabajo forzoso u obligatorio que haya efectuado.

Art. 13. — Las horas normales de trabajo de toda persona sujeta al trabajo forzoso u obligatorio, deberán ser las mismas, y las horas de trabajo efectuadas además de la jornada normal deberán ser remuneradas con arreglo a las mismas tarifas que las tarifas en uso para las horas suplementarias de los trabajadores libres.

Se deberá conceder un día de reposo semanal a todas las personas sometidas a cualquier forma del trabajo forzoso u obligatorio, debiendo coincidir este día, en la medida de lo posible, con el día consagrado por la tradición o los usos del país o de la región.

Art. 14. — Con excepción del trabajo previsto en el artículo 10 del presente convenio, el trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas deberá estar remunerado en metálico con arreglo a tarifas aplicadas al mismo género de trabajo, que no deberán ser inferiores a las vigentes en la región donde los trabaja-

dores son empleados o en la región donde han sido reclutados, basándose en la tarifa de la región donde sea más elevada. Cuando se trate de trabajo impuesto por jefes en ejercicio de sus funciones administrativas, deberá introducirse cuanto antes el pago de los salarios, de acuerdo con las tarifas indicadas en el párrafo anterior.

Los salarios deberán ser pagados a los propios trabajadores y no a su jefe de tribu o a otra autoridad.

Los días de viaje necesarios para ir y volver del lugar de trabajo, deberán contarse como días de trabajo para el pago de los salarios.

El presente artículo no impedirá que se proporcione a los trabajadores las raciones alimenticias acostumbradas como parte del salario, y estas raciones deberán ser, por lo menos, equivalentes a la suma de dinero que pueden representar; pero no le hará ninguna deducción de salario por el pago de impuestos, alimentos, vestidos, alojamientos especiales que deberán proporcionarse a los trabajadores para mantenerlos en estado de continuar su trabajo, teniendo en cuenta las condiciones especiales del mismo, ni por el suministro de herramientas.

Art. 15. — Toda la legislación referente a la reparación de accidentes de trabajo y toda la legislación que prevea la indemnización a las personas a cargo de los trabajadores fallecidos o inválidos que estén o puedan estar en vigor en el territorio interesado, deberán aplicarse a las personas sujetas al trabajo forzoso u obligatorio en las mismas condiciones que a los trabajadores libres.

De cualquier manera, toda autoridad competente que recurra al trabajo forzoso u obligatorio deberá tener la obligación de asegurar la subsistencia de dicho trabajador cuando, a consecuencia de un accidente o de una enfermedad resultante de su trabajo, se encuentre total o parcialmente incapacitado para subvenir a sus necesidades. Esta autoridad deberá tener también la obligación de tomar todas las medidas para asegurar la subsistencia de toda persona a cargo del trabajador en caso de incapacidad o de fallecimiento resultante del trabajo.

Art. 16. — Las personas sometidas al trabajo forzoso u obligatorio, no deberán, salvo en caso de necesidad excepcional, ser llevadas a regiones donde las condiciones de alimentación y de clima sean tan distintas de aquellas a que se hallan acostumbradas y que constituyan un peligro para su salud.

En ningún caso se autorizará este traslado de trabajadores sin que se hayan aplicado todas las medidas de higiene y de alojamiento impuestas para su instalación y para salvaguardar su salud.

Cuando no se pueda evitar ese traslado, se tomarán las medidas que garanticen la aclimatación progresiva de los trabajadores a las nuevas condiciones de alimentación y de clima, previo informe del servicio médico competente.

Cuando estos trabajadores deban ejecutar un trabajo regular al que no se hallan acostumbrados, se deberán tomar las medidas necesarias para obtener su adaptación a este género de trabajo, especialmente en lo que se refiere al entrenamiento progresivo, a las horas de trabajo, a los reposos intercalados y al mejoramiento o aumento de las raciones alimenticias que puedan ser necesarias.

Art. 17. — Antes de autorizar el recurso al trabajo forzoso u obligatorio para realizar trabajos de construcción o de conservación que obligan a los trabajado-

res a vivir en los lugares del trabajo durante un periodo prolongado, las autoridades competentes deberán asegurarse de:

1^o Que se han tomado todas las medidas necesarias para asegurar la higiene de los trabajadores y garantizarles los cuidados médicos indispensables, y que, en particular:

- a) Estos trabajadores se someterán a un examen médico antes de comenzar los trabajos y a nuevos exámenes con determinados intervalos mientras dure su empleo;
- b) Que se cuenta con un personal médico suficiente, así como con los dispensarios, enfermerías, ambulancias y hospitales necesarios para hacer frente a todas estas necesidades, y
- c) La buena higiene de los lugares de trabajo, el aprovisionamiento en agua de los obreros, víveres, combustibles y material de cocina han sido asegurados de una manera satisfactoria, y se han previsto, en caso necesario, los correspondientes vestidos y alojamiento;

2^o Que se han tomado las medidas necesarias para garantizar la subsistencia de la familia del trabajador, facilitando el envío a ésta de una parte del salario por medio de un procedimiento seguro y con conocimiento o a petición del trabajador;

3^o Que los viajes de ida y vuelta de los trabajadores al lugar del trabajo estarán asegurados por la administración bajo su responsabilidad y a sus expensas, y que la administración facilitará estos viajes utilizando en la medida más amplia posible todos los medios de transporte disponibles;

4^o Que en caso de enfermedad o de accidente del trabajador, que origine una incapacidad de trabajo de cierta duración, la repatriación de los trabajadores será a expensas de la administración;

5^o Que todo trabajador que desee permanecer como obrero libre a la expiración de su periodo de trabajo forzoso u obligatorio, tendrá la facultad de hacerlo sin perder sus derechos a la repatriación gratuita durante un periodo de dos años.

Art. 18. — El trabajo forzoso u obligatorio para el transporte de personas o de mercancías (tales como portadores y cargadores) deberá ser suprimido en el más breve plazo posible, y entre tanto se hace la supresión, las autoridades competentes deberán dictar reglamentos para fijar especialmente:

- a) La obligación de no emplear este trabajo sino para facilitar el desplazamiento de funcionarios de la administración en el ejercicio de sus funciones, o el transporte del material de la administración o, en caso de necesidad absolutamente urgente, para el transporte de otras personas que no sean funcionarios;
- b) La obligación de no emplear para tales transportes más que a hombres reconocidos como aptos físicamente para este trabajo, mediante

un examen médico previo, en todos los casos en que tal examen sea posible; en caso de que no lo sea, la persona que contrata esta mano de obra, deberá asegurarse, bajo su responsabilidad, de que los obreros empleados tienen la aptitud física requerida y que no padecen ninguna enfermedad contagiosa;

- c) La carga máxima que pueden llevar los trabajadores;
- d) La distancia máxima que podrá ser recorrida por estos trabajadores desde el lugar de su residencia;
- e) El número máximo de días por mes o por cualquier otro período, durante los cuales estos trabajadores podrán ser requisados, comprendiendo en este número las jornadas del viaje de vuelta;
- f) Las personas que están autorizadas a hacer uso de esta forma de trabajo forzoso u obligatorio, y la medida en que tendrán derecho a recurrir a él.

Al fijar el máximo de que se trata en las letras c), d) y e) del apartado precedente, las autoridades competentes deberán tener en cuenta los diversos elementos que hay que considerar, especialmente el de la aptitud física de la población que deberá sufrir la requisa, la naturaleza del itinerario que tienen que recorrer y también las condiciones climatológicas.

Las autoridades competentes tomarán, además, disposiciones para que el trayecto cotidiano normal de los portadores no sea mayor que una distancia correspondiente a la duración media de una jornada de trabajo de ocho horas, teniendo en cuenta que para determinarla, no tan sólo habrá que considerar la carga que hay que llevar y la distancia a recorrer, sino también el estado del camino, la época del año y todos los demás factores que hay que tener en cuenta; si fuera necesario imponer a los portadores algunas horas de marcha suplementaria, éstas deberán ser remuneradas con tarifas más elevadas que las normales.

Art. 19. — Las autoridades competentes no deberán autorizar que se recurra a cultivos obligatorios más que con el objeto de prevenir el hambre o una carencia de productos alimenticios, y siempre a reserva de que los alimentos o los productos así obtenidos quedarán de propiedad de los individuos o de la colectividad que los haya producido.

El presente artículo no deberá tener por efecto suprimir la obligación para los miembros de la colectividad de liberarse del trabajo así impuesto, cuando la producción que se encuentre organizada según la ley y la costumbre sobre una base comunal, o cuando los productos o los beneficios resultantes de la venta de estos productos queden de la propiedad de la colectividad.

Art. 20. — Las órdenes que prevean una represión colectiva aplicable a una colectividad entera por delitos cometidos por algunos de sus miembros, no deberán prever el trabajo forzoso u obligatorio para una colectividad como métodos represivos.

Art. 21. — No se hará uso del trabajo forzoso u obligatorio para los trabajos subterráneos que se realizan en las mismas.

Art. 22. — Las memorias anuales que los miembros que ratifiquen el presente convenio se comprometen a presentar a la Oficina Internacional del Trabajo, con-

forme a las disposiciones del artículo 408 del Tratado de Versalles y artículos correspondientes de los demás tratados de paz, sobre las medidas tomadas por ellos para dar efecto a las disposiciones del presente convenio, deberán contener los informes más completos posibles sobre cada territorio interesado, indicando la medida en que se ha utilizado el trabajo forzoso u obligatorio en este territorio e igualmente sobre los puntos siguientes: fines para los que se ha efectuado este trabajo; casos de enfermedad y de mortalidad; horas de trabajo; métodos de pago de salarios y tarifa de estos últimos, así como todo otro dato pertinente.

Art. 23. — Las autoridades competentes deberán promulgar una reglamentación completa y precisa sobre el empleo del trabajo forzoso u obligatorio para hacer efectivas las disposiciones del presente convenio.

Esta reglamentación deberá establecer especialmente las reglas que permitan a cada persona sujeta al trabajo forzoso u obligatorio presentar a las autoridades todas las reclamaciones relativas a las condiciones de trabajo que se le hagan, dándole garantías de que estas reclamaciones serán examinadas y tomadas en consideración.

Art. 24. — En todos los casos deberán tomarse las medidas apropiadas para asegurar la completa aplicación de los reglamentos en lo referente al empleo del trabajo forzoso u obligatorio, ya sea por la extensión al trabajo forzoso u obligación de las funciones de todo organismo de inspección creado para la vigilancia del trabajo libre, ya sea por otro sistema conveniente. Igualmente deberán tomarse medidas para que estos reglamentos lleguen a conocimiento de las personas sujetas al trabajo forzoso.

Art. 25. — El hecho de exigir ilegalmente el trabajo forzoso u obligatorio será objeto de sanciones penales, y todo miembro que ratifique el presente convenio tendrá la obligación de asegurar que las obligaciones impuestas por la ley son realmente eficaces y estrictamente aplicadas.

Art. 26. — Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente convenio, se compromete a aplicarlo en los territorios sometidos a su soberanía, jurisdicción, protección, tutela o autoridad, en la medida en que tenga derecho a suscribir las obligaciones que se refieren a cuestiones de jurisdicción interior. Sin embargo, si este miembro quiere hacer valer las disposiciones del artículo 421 del Tratado de Versalles y de los artículos correspondientes de los demás tratados de paz, deberá acompañar su ratificación de una declaración en que haga constar:

- 1^o Los territorios en los que piensa aplicar íntegramente las disposiciones del presente convenio;
- 2^o Los territorios en los que piensa aplicar las disposiciones del presente convenio con modificaciones, y en qué consisten estas modificaciones;
- 3^o Los territorios respecto de los cuales se reserva su decisión.

La declaración arriba mencionada será reputada como parte integrante de la ratificación y tendrá idénticos efectos. Todo miembro que formule tal declaración tendrá la facultad de renunciar por una nueva declaración a todas o parte de las reservas contenidas en virtud de los párrafos 2^o y 3^o precedentes.

Art. 27. — Las ratificaciones oficiales del presente convenio en las condiciones determinadas por la parte

XIII del Tratado de Versalles y partes correspondientes de los demás tratados de paz, serán comunicadas al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registradas por él.

Art. 28. — El presente convenio no obligará sino a los miembros de la Organización Internacional del Trabajo, cuya ratificación haya sido registrada por la secretaría.

Entrará en vigor doce meses después de haber sido registrada por el secretario general las ratificaciones de dos miembros.

En lo sucesivo, este convenio entrará en vigor para cada miembro doce meses después de haber sido registrada su ratificación por el secretario general.

Art. 29. — Tan pronto como las ratificaciones de dos miembros de la Organización Internacional del Trabajo hayan sido registradas en la secretaría, el secretario general de la Sociedad de las Naciones notificará el hecho a todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Igualmente les notificará el registro de las ratificaciones que le fueren comunicadas posteriormente por los demás miembros de la organización.

Art. 30. — Todo miembro que haya ratificado el presente convenio puede denunciarlo al expirar un período de diez años, a contar de la fecha de entrada en vigor inicial del convenio, mediante una declaración comunicada al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registrada por él. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de haber sido registrada por la secretaría.

Todo miembro que ratifique el presente convenio, y que en el plazo de un año, después de expirar el período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso de la facultad de denuncia prevista por el presente artículo, quedará obligado por un nuevo período de cinco años y, en lo sucesivo, podrá denunciar el presente convenio al expirar cada período de cinco años, en las condiciones previstas en el presente artículo.

Art. 31. — A la expiración de cada período de cinco años, a contar de la entrada en vigor del presente convenio, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la conferencia general un informe sobre la aplicación del presente convenio y resolverá si ha lugar a inscribir en el orden del día de la conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Art. 32. — En caso de que la conferencia internacional adoptase un nuevo convenio que implique la revisión total o parcial del presente convenio, la ratificación del nuevo convenio por un miembro acarrearía en derecho la denuncia del presente convenio sin condición de plazo, a pesar de lo dispuesto en el artículo 30 antes mencionado, a reserva de que haya entrado en vigor el nuevo convenio que implique revisión.

A partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo convenio que implique revisión, el presente convenio no podrá ya ser objeto de ratificación por los miembros.

El presente convenio permanecerá, sin embargo, en vigor, en su forma y contenido, para los miembros que lo hayan ratificado y que no ratifiquen el nuevo convenio que implique revisión.

Art. 33. — Los textos francés e inglés del presente convenio serán igualmente auténticos.

Congreso de la Nación Argentina
Información Parlamentaria

Proyecto de convenio (número 30) relativo a la reglamentación de la duración del trabajo en el comercio y las oficinas (1).

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones, Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el día 10 de junio de 1930, en su décimocuarta reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la reglamentación de la duración del trabajo en el comercio y en las oficinas, cuestión comprendida en el segundo punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un proyecto de convenio internacional, adopta, con fecha veintiocho de junio de mil novecientos treinta, el proyecto de convenio siguiente para su ratificación por los miembros de la Organización Internacional del Trabajo, de conformidad con las disposiciones de la parte XIII del Tratado de Versalles y partes correspondientes de los demás tratados de paz:

Artículo 1º — 1. El presente convenio se aplica al personal de los establecimientos públicos o privados siguientes:

- Establecimientos comerciales, los correos, telégrafos y teléfonos, así como los servicios comerciales de todos los demás establecimientos;
- Establecimientos y administraciones cuyo funcionamiento consiste esencialmente en trabajos de oficina;
- Establecimientos que revistan un carácter a la vez comercial e industrial, excepto cuando no sean considerados como establecimientos industriales.

La autoridad competente en cada país deberá establecer la línea de demarcación entre los establecimientos comerciales y aquellos cuyo funcionamiento depende esencialmente de un trabajo de oficina, de una parte, y los establecimientos industriales y agrícolas, de otra parte.

2. El convenio no se aplica al personal de los establecimientos siguientes:

- Establecimientos que tengan por objeto el tratamiento o la hospitalización de enfermos, heridos, indigentes o alienados;
- Hoteles, restaurantes, pensiones, círculos, cafés y otros establecimientos donde se sirvan artículos para ser consumidos en el propio local;
- Empresas de espectáculos y diversiones.

No obstante, se aplicará el convenio al personal de los establecimientos enumerados en los párrafos a), b), c) del presente apartado, en caso de que por ser autónomas se hallen comprendidas esas dependencias entre los establecimientos a los que se aplica el convenio.

3. La autoridad competente de cada país podrá exceptuar de la aplicación del convenio a:

- Los establecimientos que ocupan solamente miembros de la familia del patrono;

(1) Este convenio ha entrado en vigor el 29 de agosto de 1933.

- Las administraciones públicas en las cuales el personal empleado actúa como órgano del poder público;
- Las personas que desempeñan un cargo de dirección o de confianza;
- Los viajantes y representantes en la medida en que realizan su trabajo fuera del establecimiento.

Art. 2º — A los fines del presente convenio, se considerará como jornada de trabajo el tiempo durante el cual el personal está a disposición del patrono; serán excluidos los descansos durante los cuales el personal no se halla a la disposición del patrono.

Art. 3º — La jornada de trabajo del personal al que se aplica el presente convenio no podrá exceder de cuarenta y ocho horas por semana y ocho horas por día, a reserva de las disposiciones que se mencionan a continuación.

Art. 4º — La duración semanal del trabajo previsto en el artículo 3º podrá ser repartida de manera que el trabajo de cada día no exceda de diez horas.

Art. 5º — 1. En caso de suspensión colectiva del trabajo motivada por a) fiestas locales, o b) causas accidentales o de fuerza mayor (accidentes ocurridos en las instalaciones, interrupción de la fuerza motriz, del alumbrado, de la calefacción o del servicio de agua, siniestros), podrá aplicarse una prolongación en el trabajo diario, a título de compensación de las horas de trabajo perdidas, en las condiciones siguientes:

- Las recuperaciones no podrán ser autorizadas más que durante treinta días al año y deberán efectuarse dentro de un plazo razonable;
- La prolongación de la jornada diaria no podrá exceder de una hora;
- La jornada diaria del trabajo no podrá exceder de diez horas.

2. La autoridad competente deberá ser avisada de la naturaleza, causa y fecha de la suspensión colectiva, del número de horas de trabajo perdidas y de las modificaciones temporales, en el horario previstas.

Art. 6º — En los casos excepcionales, cuando las condiciones en que ha de efectuarse el trabajo hagan inaplicables las disposiciones de los artículos 3º y 4º, los reglamentos de la autoridad pública podrán autorizar la distribución de la duración del trabajo para un período más largo que la semana, a condición de que la duración media de trabajo calculada sobre el número de semanas consideradas no exceda de cuarenta y ocho horas por semana y que en ningún caso el trabajo de cada día exceda de diez horas.

Art. 7º — Los reglamentos de la autoridad pública determinarán:

1. Las derogaciones permanentes que proceda admitir para:

- Las personas cuyo trabajo sea intermitente, a causa de la naturaleza del mismo, tales como conserjes, personal de guardería y conservación de locales y depósitos;
- Las personas directamente ocupadas en trabajos preparatorios o complementarios que deban ser necesariamente ejecutados fuera de los límites previstos para la jornada de trabajo del resto del personal del establecimiento;

- Los almacenes u otros establecimientos cuando la índole del trabajo, la importancia de la población o el número de personas ocupadas hagan inaplicable la duración del trabajo fijado en los artículos 3º y 4º.

2. Las derogaciones temporales, que podrán concederse en los casos siguientes:

- En caso de accidentes ocurridos o inminentes, en caso de fuerza mayor o de trabajos urgentes a efectuar en las máquinas o en el instrumental, pero únicamente en la medida necesaria para evitar que se produzca un trastorno serio en la marcha normal del establecimiento;
- Para prevenir la pérdida de materias de fácil deterioro o evitar que se comprometa el resultado técnico del trabajo;
- Para permitir trabajos especiales, tales como inventarios y balances, liquidaciones, vencimientos y estados de cuentas de todas clases;
- Para permitir a los establecimientos hacer frente a los aumentos de trabajo extraordinarios debidos a circunstancias particulares, siempre que no se pueda normalmente esperar del patrono que recurra a otros medios.

3. Los reglamentos establecidos de conformidad con el presente artículo deberán determinar en cada caso, con excepción de los indicados en el párrafo a) del apartado 2, la prolongación de la jornada de trabajo, que podrá ser autorizada por día, y, en lo que se refiere a las derogaciones temporales, por año.

4. La tarifa de salarios para la prolongación prevista en los párrafos b), c) y d) del apartado 2 de este artículo, será aumentada, por lo menos, en un 25 % sobre el salario normal.

Art. 8º — Los reglamentos previstos por los artículos 6º y 7º deberán dictarse previa consulta a las organizaciones obreras y patronales interesadas, teniendo en cuenta especialmente los contratos colectivos que puedan existir entre esas organizaciones.

Art. 9º — Las disposiciones del presente convenio pueden quedar suspendidas por orden del gobierno de cada país en caso de guerra o en caso de acontecimientos que presenten un peligro para la seguridad nacional.

Art. 10. — 1. Ninguna disposición del convenio afectará a cualquier costumbre o acuerdo en virtud del cual la jornada de trabajo sea menor o la tarifa de remuneración más elevada de lo que se prevé en el presente convenio.

2. Toda restricción impuesta por el presente convenio debe ser agregada, sin ser considerada como derogación, a todas las restricciones impuestas por cualquier ley, decreto o reglamento que fije una jornada de trabajo menor o un tipo de remuneración más elevado que los previstos en el presente convenio.

Art. 11. — A los fines de aplicación efectiva de las disposiciones del presente convenio:

- Deberán tomarse medidas apropiadas para asegurar una inspección adecuada.
- Cada patrono deberá:

- Dar a conocer por medio de anuncios fijados de manera visible en un establecimiento o en todo otro lugar conveniente o según toda otra forma

aprobada por la autoridad competente; las horas en que ha de comenzar y terminar la jornada de trabajo o, si el trabajo se efectúa por equipos, las horas a que empieza y termina el turno de cada equipo;

b) Dar a conocer en igual forma los descansos concedidos al personal que, con arreglo al artículo 2º, no están comprendidos en la jornada de trabajo;

c) Inscribir en un registro en la forma aprobada por la autoridad competente todas las prolongaciones de la duración del trabajo que hayan tenido lugar en virtud del apartado 2 del artículo 7º, así como el importe de su retribución.

3. Será considerado como ilegal el hecho de emplear a una persona por más horas de trabajo que las fijadas en virtud del apartado 2, párrafo a), o durante las horas fijadas en virtud del apartado 2, párrafo b), del presente artículo.

Art. 12.—Todo miembro que ratifique el presente convenio debe tomar las medidas necesarias por medio de un sistema de sanciones para que sean aplicadas las disposiciones del convenio.

Art. 13.—Las ratificaciones oficiales del presente convenio, en las condiciones previstas por la parte XIII del Tratado de Versalles y partes correspondientes de los demás tratados de paz, serán comunicadas al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registradas por él.

Art. 14.—El presente convenio no obliga más que a los miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuya ratificación haya sido registrada por la secretaría.

El presente convenio entrará en vigor doce meses después que las ratificaciones de dos miembros sean registradas por el secretario general.

En lo sucesivo este convenio entrará en vigor para cada miembro doce meses después de la fecha en que su ratificación haya sido registrada.

Art. 15.—Tan pronto como las ratificaciones de dos miembros de la Organización Internacional del Trabajo hayan sido registradas en la secretaría, el secretario general de la Sociedad de las Naciones notificará este hecho a todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Les comunicará igualmente el registro de las ratificaciones que le hayan sido comunicadas ulteriormente por todos los demás miembros de la organización.

Art. 16.—Todo miembro que haya ratificado el presente convenio puede denunciarlo al final de un período de diez años después de la fecha inicial de entrada en vigor del convenio por comunicación dirigida al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registrada por él. La denuncia no tendrá efecto sino un año después de haber sido registrada en la secretaría.

Todo miembro que haya ratificado el presente convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el precedente apartado, no haga uso de la facultad de denuncia prevista por el presente artículo, quedará obligado durante un nuevo período de cinco años, y en lo sucesivo podrá denunciar el presente convenio a la expiración de cada período de cinco años, en las condiciones previstas por el presente artículo.

Art. 17.—A la expiración de cada período de diez años, contados a partir de la entrada en vigor del presente convenio, el Consejo de Administración de la

Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la conferencia general un informe sobre la aplicación del presente convenio y decidirá si ha lugar a inscribir en el orden del día de la conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Art. 18.—En el caso de que la conferencia internacional adopte un nuevo convenio que constituya la revisión total o parcial del presente convenio, la ratificación por un miembro, del nuevo convenio revisado, implicará la denuncia de pleno derecho del presente convenio, sin necesidad de plazo, a pesar del artículo 16 precedente, bajo reserva de que el nuevo convenio revisado haya entrado en vigor.

A partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo convenio revisado, el presente convenio no podrá ser ya objeto de ratificación por los miembros.

El presente convenio quedará, sin embargo, en vigor en su forma y contenido para los miembros que lo hayan ratificado y que no ratifiquen el nuevo convenio revisado.

Art. 19.—Los textos francés e inglés del presente convenio son igualmente auténticos.

Proyecto de convenio (número 32) relativo a la protección contra los accidentes de los trabajadores «dockers» ocupados en la carga y descarga de los buques (revisado en 1932).

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones, Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 12 de abril de 1932, en su décimosexta reunión,

Después de haber aprobado diversas proposiciones relativas a la revisión parcial del convenio adoptado por la conferencia en su duodécima reunión, sobre la protección contra los accidentes de los trabajadores ocupados en la carga y descarga de los buques, cuestión que figura en cuarto lugar en el orden del día de la presente reunión, y

Considerando que dichas proposiciones deben revestir la forma de un proyecto de convenio internacional,

Adopta con fecha veintisiete de abril de mil novecientos treinta y dos el siguiente proyecto de convenio para su ratificación por los miembros de la Organización Internacional del Trabajo, con arreglo a las disposiciones de la parte XIII del Tratado de Versalles y partes correspondientes de los demás tratados de paz.

Artículo 1º—A los fines del presente convenio:

1. El término «operaciones» significa y comprende todo o parte del trabajo efectuado, en tierra o a bordo, para la carga o descarga de todo buque dedicado a la navegación marítima o interior, con exclusión de los buques de guerra, en todo puerto marítimo o interior y en todo muelle o lugar de desembarco de mercancías y otro sitio análogo donde se efectúe este trabajo; y

2. El término «trabajador» comprende toda persona ocupada en dichas operaciones.

Art. 2º—Todas las vías de acceso regulares que pasen por un dique, desembarcadero, muelle u otro sitio análogo que los trabajadores hayan de utilizar para trasladarse al sitio de trabajo donde se efectúen las

operaciones o para el regreso, así como todos los lugares de trabajo situados en tierra, deberán conservarse en condiciones que garanticen la seguridad de los trabajadores que los utilicen.

En particular:

1. Todo los lugares de trabajo en tierra y toda parte peligrosa de las vías de acceso mencionadas, que comuniquen dichos lugares con la vía pública más próxima, deberán estar provistos de un alumbrado eficaz y sin peligro.

2. Los muelles y lugares de desembarco estarán suficientemente despejados de mercancías para mantener libre el paso hacia los medios de acceso a que se refiere el artículo 3º.

3. Cuando se deje un paso a lo largo del borde del muelle o desembarcadero, deberá tener una anchura de 90 centímetros (3 pies), por lo menos, y estar libre de todo obstáculo que no sea construcción fija, aparatos o máquinas en uso.

4. En la medida en que sea practicable, habida cuenta del tráfico y del servicio:

a) Toda parte peligrosa de las vías de acceso y de los lugares de trabajo (por ejemplo, aberturas, recodos y bordes peligrosos) deberá estar provista de barandillas apropiadas, de una altura de 75 centímetros (2 pies 6 pulgadas), por lo menos;

b) Los pasos peligrosos sobre puentes, compuertas y puertas de diques deberán estar provistos, a cada lado y hasta una altura de 75 centímetros (2 pies 6 pulgadas), por lo menos, de barandillas cuyos extremos se prolonguen en una longitud suficiente, sin que tenga que ser superior a 4,50 metros (5 yardas);

5. Las condiciones de dimensiones previstas por el apartado 4 del presente artículo se considerarán como cumplidas, en lo que se refiere a los aparatos en uso en la fecha de ratificación del presente convenio, si las cifras que resulten después de proceder a una medición exacta no son inferiores en más de un 10 % a las mencionadas en dicho apartado 4.

Art. 3º—1. Cuando un buque esté fondeado cerca de un muelle o de otro barco para realizar operaciones, se deberá poner a disposición de los trabajadores medios de acceso que ofrezcan garantías de seguridad para ir y volver del barco, a menos que las circunstancias permitan hacerlo sin necesidad de dispositivos especiales y sin exponerse inútilmente a riesgos de accidentes.

2. Estos medios de acceso deberán consistir:

a) Cuando sea razonablemente practicable, en la escala real o de portalón del buque, pasarela u otro dispositivo análogo;

b) En los demás casos, en una escala.

3. Los dispositivos especificados en la letra a) del apartado 2 del presente artículo deberán tener una anchura de 55 centímetros (22 pulgadas), por lo menos, debiendo estar firmemente sujetos, de manera que no puedan desplazarse; su inclinación no deberá ser muy acentuada y los materiales empleados en su construcción habrán de ser de buena calidad y hallarse en buen estado. A ambos lados y en toda su longitud deberán hallarse provistos de una barandilla eficaz de una altura neta de 82 centímetros (2 pies 9 pulgadas), por lo menos, o bien, si se trata de la escala real, de

una barandilla eficaz de la misma altura a un solo lado, a condición de que el otro lado esté eficazmente protegido por el costado del buque.

No obstante de los dispositivos de esa naturaleza que se hallen en uso en la fecha de la ratificación del presente convenio, podrán continuar en servicio:

a) Los que se hallen provistos a ambos lados de una barandilla de 80 centímetros (2 pies 8 pulgadas) de altura neta, por lo menos, hasta que sean renovados;

b) Los que se hallen provistos a ambos lados de una barandilla de 75 centímetros (2 pies 6 pulgadas) de altura neta, por lo menos, durante dos años a contar de la ratificación del presente convenio.

4. Las escalas a que se refiere la letra b) del apartado 2 del presente artículo serán de una solidez y de una longitud suficientes y estarán debidamente sujetas.

5. a) Las autoridades competentes podrán conceder ciertas excepciones a las disposiciones del presente artículo, siempre y cuando estimen que los dispositivos mencionados no son indispensables para la seguridad de los trabajadores;

b) Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a las plataformas o pasarelas de carga cuando se utilicen exclusivamente para las operaciones.

6. Los trabajadores no deberán emplear ni podrán ser obligados a utilizar otros medios de acceso que los especificados o autorizados por el presente artículo.

Art. 4º—Cuando los trabajadores tengan que atravesar una extensión de agua para ir o volver de un buque con motivo de las operaciones, se deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de su transporte, incluso determinando las condiciones que deban satisfacer las embarcaciones utilizadas.

Art. 5º—1. Cuando tengan que efectuarse las operaciones en bodegas de una profundidad de más de 1,50 metros (5 pies) desde el nivel de cubierta, se deberá poner a la disposición de los trabajadores medios de acceso que ofrezcan garantías para su seguridad.

2. Estos medios de acceso consistirán ordinariamente en una escala, pero sólo se considerará que ésta presenta garantías de seguridad:

a) Si ofrece a los pies un apoyo cuya profundidad, aumentada con el espacio libre detrás de la escala, sea de 11 ½ centímetros (4 ½ pulgadas), por lo menos, y una anchura de 25 centímetros (10 pulgadas), por lo menos, y si dispone de un apoyo firme para las manos;

b) Si su inclinación hacia el interior de la bodega no excede de lo razonablemente necesario para que quede libre la escotilla;

c) Si está provista, en toda su longitud y alineados con ella, de dispositivos que, colocados en las brazolas de las escotillas, ofrezcan apoyo firme a los pies y a las manos (por ejemplo: los tojinos o asas);

d) Si los dispositivos a que se refiere el párrafo precedente ofrecen un apoyo para los pies cuya profundidad, incluido el espacio libre detrás de esos dispositivos, sea de 11 ½ centímetros (4 ½ pulgadas), por lo menos, y cuya anchura mínima sea de 25 centímetros (10 pulgadas);

e) En caso de existir escalas distintas entre las cubiertas inferiores, si estas escalas se encuentran, en la medida de lo posible, en la mis-

ma línea que las escalas que parten de la cubierta superior.

Sin embargo, cuando no se pueda razonablemente exigir, dada la construcción del buque, la instalación de una escala, las autoridades competentes estarán facultadas a autorizar otros medios de acceso, a condición de que éstos reúnan, en la medida en que puedan aplicarse, las condiciones prescritas para las escalas por el presente artículo.

En los buques existentes en la fecha de la ratificación del presente convenio, y hasta que se substituyan las escalas y dispositivos, se considerarán como cumplidas las condiciones de dimensiones previstas en los párrafos a) y d) del presente apartado, si las cifras que resulten después de proceder a una medición exacta no son inferiores en más de un 10 % a los que se mencionan en dichos párrafos a) y d).

3. Deberá dejarse un espacio libre, suficiente para alcanzar los medios de acceso, cerca de las brazolas de las escotillas.

4. Los túneles de los ejes motores deberán estar provistos a ambos lados de asas y estribos adecuados.

5. Cuando haya que utilizar una escala en la bodega de un barco sin cubierta, el encargado de las operaciones deberá suministrar esta escala, la cual deberá tener en su parte superior unos ganchos u otros dispositivos que sirvan para fijarla firmemente.

6. Los trabajadores no deberán emplear ni podrán ser obligados a utilizar otros medios de acceso que los que se especifican o autorizan en el presente artículo.

7. Los buques existentes en la fecha de la ratificación del presente convenio estarán exceptuados de las condiciones de dimensiones impuestas por las disposiciones del apartado 2, párrafo a) d), y de las prescripciones del apartado 4 del presente artículo, durante un plazo de cuatro años, como máximo, a contar de la fecha de dicha ratificación.

Art. 6º — 1. Mientras los trabajadores se hallen a bordo del buque para efectuar las operaciones, toda escotilla de entrada a la bodega de mercancías, accesible a los trabajadores, cuya profundidad, medida desde el nivel de cubierta hasta el fondo de la bodega, exceda de 1,50 metros (5 pies), y que no se halle protegida hasta una altura neta de 75 centímetros (2 pies, 6 pulgadas) por las brazolas, cuando no sea utilizada para el paso de mercancías, carbón u otros materiales, deberá tener a su alrededor una barandilla eficaz, hasta la altura de 90 centímetros (3 pies). La legislación nacional dispondrá si las prescripciones del presente artículo se han de aplicar durante el tiempo de la comida y otras interrupciones cortas del trabajo.

2. Se tomarán iguales medidas en caso necesario para proteger todas las demás aberturas de cubierta que puedan presentar un peligro para los trabajadores.

Art. 7º — Cuando las operaciones deban efectuarse a bordo de un buque, los medios de acceso al mismo, así como todas las distintas partes del barco en las que se hallen ocupados los trabajadores o a las que tengan que trasladarse durante el trabajo, deberán estar debidamente alumbrados.

Los medios de alumbrado empleados deberán reunir las condiciones necesarias para que no consti-

tuyan un peligro para la seguridad de los trabajadores, ni dificulten la navegación de los demás buques o embarcaciones.

Art. 8º — Con objeto de garantizar la seguridad de los trabajadores mientras estén ocupados en colocar o izar los cuarteles de las escotillas, así como los barrotes y galeotas que sirven para cubrirlas:

1º Los cuarteles de las escotillas, así como los barrotes y galeotas que sirven para cubrirlas, deberán conservarse en buen estado;

2º Los cuarteles de las escotillas deberán tener asas proporcionadas a sus dimensiones y peso, a no ser que la construcción de la escotilla o de los cuarteles de escotillas haga innecesario el uso de dichas asas;

3º Los barrotes y galeotas que sirven para cubrir las escotillas tendrán los dispositivos adecuados para que no estén obligados los trabajadores a subir sobre los barrotes y galeotas para fijar dichos dispositivos al cubrir o descubrir las escotillas;

4º Todos los cuarteles de escotillas, barrotes y galeotas, cuando no sean intercambiables, deberán estar marcados distintamente para indicar la cubierta y la escotilla a que pertenecen, así como su verdadera posición sobre éstas;

5º Los cuarteles de escotilla no podrán ser empleados para la construcción de plataformas que se utilicen en las faenas de la carga, ni en otra finalidad que pueda deteriorarlos.

Art. 9º — Se tomarán medidas para que los aparatos de izar pesos, así como todo el material accesorio, fijo o móvil, no sean empleados en las operaciones, en tierra o a bordo de un buque, más que en caso de hallarse en estado de funcionar sin peligro.

En particular:

1. Antes de poner en servicio dichos aparatos y el material fijo de a bordo considerado como accesorio suyo por las legislaciones nacionales, así como las cadenas y cables metálicos de uso obligado en el funcionamiento de aquéllos, deberán ser inspeccionados y probados debidamente por una persona competente, aceptada por las autoridades nacionales, en las condiciones prescritas, y ser comprobada la carga máxima de dicho material, extendiendo el certificado correspondiente.

2. Después de ponerse en servicio todo aparato de izar pesos, utilizado en tierra o a bordo, y todo el material fijo de a bordo considerado como accesorio suyo por las legislaciones nacionales, serán revisados a fondo o inspeccionados en las condiciones siguientes:

a) Serán revisados a fondo cada cuatro años e inspeccionados cada doce meses: pivotes y zunchos, de mástiles y de puntales de carga, de gazas, brazalotes y cualquier otro artefacto fijo cuyo desmontaje sea particularmente difícil;

b) Serán revisados a fondo cada doce meses: todos los aparatos de elevación (tales como grúas, cabrestantes, etcétera), tornos, manivelas y demás accesorios no comprendidos en la letra a).

Todo el material móvil (por ejemplo: cadenas, cables metálicos, anillos, grilletes y ganchos) será objeto de una inspección previa cada vez que vaya a ser

utilizado, salvo en el caso de que haya sido revisado dentro de los tres últimos meses.

Las cadenas no deberán ser acortadas por medio de nudos y se tomarán precauciones para evitar que se deterioren por el roce contra las aristas vivas.

Las gazas de los cables metálicos deberán tener por lo menos tres pasadas en sus empulgueras con un cabo entero de cable y dos pasadas con la mitad de los hilos cortados en cada cabo. Sin embargo, esta prescripción no deberá tener por efecto impedir el uso de otra clase de gazas de una eficacia tan evidente como la estipulada en la presente disposición.

3. Las cadenas y todo material similar que especifiquen las legislaciones nacionales (por ejemplo: ganchos, gazas, grilletas, eslabones) y que no hayan sido sometidas a otras medidas eficaces prescritas por dichas legislaciones nacionales, deberán ser objeto de nueva fundición, en las condiciones siguientes y bajo la inspección de una persona competente aceptada por las autoridades nacionales:

a) Cadenas y material precitado que estén a bordo:

1º Cadenas y útiles usados corrientemente, de 12 ½ mm. (½ pulgada) o menos: una vez cada seis meses;

2º Todas las demás cadenas y útiles, comprendiendo las cadenas de brazalote, pero con exclusión de las cadenas bridas sujetas a los puntales de carga y a los mástiles usados corrientemente una vez cada doce meses.

No obstante, cuando se trata de un material de esta clase que se utilice exclusivamente en las grúas y otros aparatos de elevación a mano, el plazo previsto en el subapartado 1º será de doce meses en lugar de seis, y el plazo previsto en el subapartado 2º será de dos años en vez de uno.

Asimismo, cuando la autoridad competente considere, dadas las dimensiones, la estructura, los materiales o el poco empleo hecho de los útiles precitados, que no es necesario, para la protección de los trabajadores, el cumplimiento de las prescripciones del presente apartado en lo que se refiere a la refundición, dicha autoridad puede exceptuar, por medio de certificado expedido por ella (que puede revocar cuando lo estime conveniente), de la aplicación de esas prescripciones a dichos útiles, bajo reserva de las condiciones que puedan señalarse en el certificado.

b) Cadenas y material precitado que no estén a bordo:

Se tomarán diversas medidas para la refundición de dichas cadenas y útiles.

c) Cadenas y material precitado esté o no a bordo:

Las cadenas y útiles que hayan sido alargados, modificados o reparados por soldadura deberán ser ensayados y comprobados de nuevo.

4. Se conservarán en tierra o a bordo, según los casos, las actas debidamente certificadas que constituyen prueba suficiente de la seguridad en el funcionamiento de los aparatos y material de que se trate; deberá especificarse en dichas actas el máximo de carga autorizada, así como la fecha y el resultado de los ensayos y comprobaciones previstos en los

apartados 1 y 2 del presente artículo, y de las refundiciones u otras operaciones dispuestas por el apartado 3.

Estas actas deberán ser presentadas por quien quede encargado de su conservación a toda persona autorizada a tal efecto.

5. Se deberá marcar y conservar bien claramente la indicación del máximo de carga autorizada en todas las grúas, puntales de carga y cadenas de eslingas, así como en todos los demás aparatos de elevación utilizados a bordo, según se especifiquen en las legislaciones nacionales. El máximo de carga indicado en las cadenas de eslingas estará marcado en cifras o letras visibles sobre las mismas cadenas o bien sobre una placa o anillo de materia duradera y firmemente sujeta a dichas cadenas.

6. Todos los motores, ruedas dentadas, aparatos de transmisión por cadena o por frotamiento, conductores de energía eléctrica y tuberías de vapor deberán estar provistos (siempre y cuando no se compruebe que, por su posición o su construcción, presentan las mismas garantías, desde el punto de vista de la seguridad de los trabajadores, que si estuvieran debidamente protegidos), de dispositivos de protección en la medida que ello sea practicablemente realizable sin perjudicar a la seguridad de la maniobra del buque.

7. Las grúas y los cabrestantes deberán estar provistos de dispositivos adecuados para reducir a un mínimo el riesgo de caída accidental de la carga en el momento de elevarla o descenderla.

8. Deberán adoptarse las medidas necesarias para impedir que el vapor del escape y, en todo lo posible, el vapor directo de todo cabrestante o grúa pueda dificultar la visibilidad en todo lugar de trabajo donde se halle ocupado un trabajador.

9. Deberán adoptarse las medidas necesarias para impedir que un mástil o puntal de carga sea sacado involuntariamente de su soporte.

Art. 10. — Sólo deberán emplearse personas de competencia suficiente y que merezcan confianza para el manejo o conducción de los aparatos de elevación o de transporte, ya sean accionados mecánicamente o de otro modo, o para hacer las señales necesarias a los conductores de dichos aparatos, así como para vigilar el lantión accionado por el cilindro del cabrestante.

Art. 11. — 1. No deberá dejarse suspendida carga alguna de un aparato elevador, si el funcionamiento de este aparato no se halla bajo la vigilancia efectiva de una persona competente, mientras la carga esté así suspendida.

2. Deberán adoptarse las medidas oportunas para que una persona quede encargada de hacer las señales que sean necesarias para la seguridad de los trabajadores.

3. Deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar que se empleen métodos de trabajo peligrosos en el apilamiento y retirado, estiba y desestiba de la carga y otras operaciones que con ella se relacionen.

4. Antes de poner en uso una escotilla se deberán quitar todos los barrotes y galeotas o sujetarlos firmemente para evitar todo movimiento.

5. Deberán adoptarse toda clase de precauciones para que los trabajadores puedan fácilmente evacuar las bodegas o los entrepuentes, cuando estén ocupados en dichos lugares en la carga o descarga de carbón o en otras cargas a granel.

6. No se utilizará ninguna plataforma para las operaciones si no está firmemente construida, conveniente-

mente apuntalada y, en caso necesario, fuertemente fijada.

Para el transporte de la carga entre el buque y tierra no se podrá utilizar una carretilla de mano cuando la plancha de paso esté inclinada de modo que pueda ofrecer peligro.

En caso necesario, las plataformas o planchas de paso deberán estar cubiertas de una materia apropiada para impedir que los trabajadores resbalen.

7. Cuando el espacio de trabajo en una bodega esté limitado al cuadrado de la escotilla, no se deberá, salvo en caso de tener que iniciar la desestiba o reunir la carga en la eslinga:

- Fijar ganchos en los lazos u otros asideros que rodean a las balas de algodón, lana, corcho, sacos de yute u otras mercancías similares;
- Emplear garfios de toneles en la carga y descarga de toneles, a menos que la construcción y naturaleza de los toneles, así como la disposición y el estado de los garfios permitan hacerlo sin peligro probable.

8. Ningún mecanismo de carga, de cualquier clase que sea, deberá cargarse con peso superior al máximo de carga autorizado, salvo en casos excepcionales, pero, aun en estos casos, sólo en la medida autorizada por la legislación nacional.

9. Las grúas utilizadas en tierra de potencia variable (por ejemplo, por elevación o descenso del botalón, variando según el ángulo la capacidad de carga) deberán estar provistas de un indicador automático o de un cuadro indicativo de los máximos de carga correspondientes a las inclinaciones del botalón.

Art. 12. — Las legislaciones nacionales deberán disponer las precauciones que se consideren indispensables para asegurar convenientemente la protección de los trabajadores, teniendo en cuenta las circunstancias en cada caso particular, cuando tengan que trabajar en contacto o a proximidad de materias peligrosas para su vida o su salud, ya sea por la propia naturaleza de las mismas, ya por el estado en que se encuentren en ese momento, o cuando tengan que trabajar en lugares en los que tales materias hayan estado almacenadas algún tiempo.

Art. 13. — En los muelles, diques, desembarcaderos y otros lugares análogos que se utilicen frecuentemente para las operaciones, los elementos de socorro que las legislaciones nacionales deberán ordenar, teniendo en cuenta las circunstancias locales, estarán dispuestas en tales condiciones que sea posible aportar rápidamente los primeros auxilios y, en caso de accidente grave, transportar rápidamente al lesionado al hospital más próximo. Deberá disponerse en permanencia, en los lugares de que se trata, del material necesario para los primeros auxilios, en cantidad suficiente, en buen estado y en sitios fácilmente accesibles para que pueda ser utilizado inmediatamente durante las horas de trabajo. Dicho material de primeros auxilios deberá estar bajo el cuidado de una o varias personas responsables, una o varias de las cuales sean aptas para proporcionar los primeros auxilios y estén dispuestas a prestar inmediatamente sus servicios durante las horas de trabajo.

Deberán igualmente tomarse medidas apropiadas en los muelles, diques, desembarcaderos y otros lugares análogos anteriormente mencionados para prestar auxilio a los trabajadores que cayeran al agua.

Art. 14. — Nadie tendrá derecho a quitar ni desplazar las barandillas, planchas de paso, escalas, dispositivos,

aparatos o material de salvamento, luces, inscripciones, plataformas u otros objetos previstos por las disposiciones del presente convenio, salvo cuando esté debidamente autorizado para ello o en caso de necesidad. Al expirar el plazo durante el cual ha sido preciso retirar los objetos de que se trata, deberán éstos ser colocados nuevamente en su sitio.

Art. 15. — Cada miembro podrá conceder excepciones totales o parciales a las disposiciones del presente convenio, cuando se trate de diques, muelles, desembarcaderos u otros lugares análogos en los que las operaciones se efectúen sólo ocasionalmente o en los que el tráfico sea restringido y quede limitado a pequeños buques, o cuando se trate de ciertos buques especiales o ciertas categorías especiales de buques, o cuando los buques no desplacen cierto tonelaje, así como en los casos en que, dadas las condiciones de clima, no se pueda exigir prácticamente el cumplimiento de las disposiciones del presente convenio.

La Oficina Internacional del Trabajo deberá ser informada de las disposiciones que se dicten para autorizar las excepciones totales o parciales antes mencionadas.

Art. 16. — A reserva de las excepciones estipuladas en otros artículos, las medidas previstas en el presente convenio respecto de la construcción o del equipo permanente de los buques deberán aplicarse sin demora alguna a aquellos cuya construcción haya comenzado después de la fecha de la ratificación del presente convenio. Se deberán aplicar las medidas prescritas a todos los demás buques dentro de un plazo de cuatro años a partir de dicha fecha. No obstante, cuando ello sea prácticamente realizable, deberán aplicarse tales medidas a los referidos buques, sin esperar a que se cumpla el plazo indicado.

Art. 17. — Con el fin de asegurar la aplicación efectiva de todos los reglamentos dictados para la protección de los trabajadores contra los accidentes:

- Dichos reglamentos determinarán claramente a qué personas u organismos incumbe la obligación de cumplir sus prescripciones;
- Se tomarán disposiciones para instituir un sistema de inspección eficaz y para señalar las sanciones aplicables en caso de violación de los reglamentos;
- Los textos de dichos reglamentos o resúmenes de ellos deberán ser fijados en sitios bien visibles en los diques, muelles, desembarcaderos y otros lugares análogos que se utilicen frecuentemente para las operaciones.

Art. 18. — Cada miembro se obliga a concertar con los demás miembros que hayan ratificado el presente convenio, y a base del mismo, acuerdos de reciprocidad que comprendan especialmente el mutuo reconocimiento de las disposiciones adoptadas en sus respectivos países para los ensayos, comprobaciones y refundición de piezas, así como el reconocimiento mutuo de las actas y los certificados extendidos sobre los resultados de estas medidas.

Esta obligación se acepta, en lo que se refiere a la construcción de buques y del material utilizado a bordo, así como en cuanto a las actas y las diversas prescripciones que deben observarse a bordo, según los términos del presente convenio, a reserva de que cada miembro tenga la seguridad de que las disposiciones adoptadas por el otro miembro garantizan a los trabajadores un nivel general de seguridad cuya eficacia sea igual a lo prescrito en su propia legislación.

Los gobiernos tendrán además en cuenta las obligaciones que resultan del apartado 11 del artículo 405 del Tratado de Versalles y artículos correspondientes de los demás tratados de paz.

Art. 19. — Las ratificaciones oficiales del presente convenio, en las condiciones previstas por la parte XIII del Tratado de Versalles y partes correspondientes de los demás tratados de paz, serán comunicadas al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registradas por él.

Art. 20. El presente convenio sólo obligará a los miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuya ratificación haya sido registrada por el secretario general.

El presente convenio entrará en vigor doce meses después de haber sido registradas por el secretario general las ratificaciones de dos miembros.

En lo sucesivo, este convenio entrará en vigor para cada miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Art. 21. — Tan pronto como hayan sido registradas en la secretaría las ratificaciones de dos miembros de la Organización Internacional del Trabajo, el secretario general de la Sociedad de las Naciones lo notificará a todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, les notificará el registro de las ratificaciones que le comuniquen ulteriormente los demás miembros de la organización.

Art. 22. — Todo miembro que haya ratificado el presente convenio puede denunciarlo al cumplirse un plazo de diez años, a contar de la fecha inicial de la entrada en vigor del convenio, mediante declaración dirigida al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registrada por él. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de haber sido registrada en la secretaría.

Todo miembro que haya ratificado el presente convenio y que, en el plazo de un año, después de expirar el período de diez años mencionado en el apartado precedente no haga uso de la facultad de denuncia prevista por el presente artículo, quedará obligado por un nuevo período de cinco años, pudiendo, en lo sucesivo, denunciar el presente convenio al expirar cada período de cinco años en las condiciones previstas en el presente artículo.

Art. 23. — A la expiración de cada período de diez años, a contar de la entrada en vigor del presente convenio, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la conferencia general una memoria sobre la aplicación del presente convenio y decidirá si procede incluir en el orden del día de la conferencia la revisión total o parcial del mismo.

Art. 24. — En caso de que la conferencia adopte un nuevo convenio que constituya una revisión total o parcial del presente convenio, la ratificación por un miembro del nuevo convenio revisado implica de pleno derecho, no obstante lo dispuesto en el artículo 22, la denuncia inmediata del presente convenio, a reserva de que el nuevo convenio revisado haya entrado en vigor.

A partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo convenio revisado, el presente convenio no podrá ya ser objeto de ratificación por los miembros.

El presente convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido, para los miembros que lo hayan ratificado y que no ratifiquen el convenio revisado.

Art. 25. — Los textos francés e inglés del presente convenio son igualmente auténticos.

Recomendación (número 40) que tiende a activar la reciprocidad prevista por el convenio, adoptado en 1932, relativo a la protección contra los accidentes de los trabajadores ocupados en la carga y descarga de los buques.

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones,

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 12 de abril de 1932, en su décimosexta reunión;

Después de haber aprobado diversas proposiciones relativas a la revisión parcial del convenio adoptado en 1929 para la protección contra los accidentes de los trabajadores ocupados en la carga y descarga de los buques, cuestión que figura en cuarto lugar en el orden del día de la reunión, y

Después de haber adoptado un proyecto de convenio que constituye una revisión del convenio antes mencionado, habiendo acordado completar el convenio revisado con una recomendación,

Adopta, con fecha veintisiete de abril de mil novecientos treinta y dos, la recomendación siguiente, para ser sometida al examen de los miembros de la Organización Internacional del Trabajo con el fin de que surta efecto en forma de ley nacional o de otro modo, de conformidad con las disposiciones de la parte XIII del Tratado de Versalles y partes correspondientes de los demás tratados de paz:

La conferencia,

Considerando que el convenio revisado, relativo a la protección contra los accidentes de los trabajadores ocupados en la carga y descarga de los buques, contiene un artículo que trata de la reciprocidad entre los miembros que hayan ratificado dicho convenio,

Recomienda que se tomen las medidas siguientes a fin de activar la reciprocidad prevista por dicho artículo:

1. Tan pronto como sea posible, una vez adoptado el convenio revisado, los gobiernos de los principales países interesados deberán tomar las disposiciones oportunas para entrar en negociaciones con objeto de conseguir una uniformidad razonable en la aplicación del convenio, comprendiendo particularmente las cuestiones mencionadas en el artículo de referencia y la preparación de modelos uniformes de certificados que puedan ser utilizados internacionalmente.

2. La Oficina Internacional del Trabajo deberá ser informada anualmente, por medio de memorias, sobre las medidas tomadas en cumplimiento del apartado precedente.

Proyecto de convenio (número 33) relativo a la edad de admisión de los niños en los trabajos no industriales.

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones, Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad en doce de abril de mil novecientos treinta y dos, en su décimosexta reunión;

Después de haber aprobado diversas proposiciones relativas a la edad de admisión de los niños al trabajo en profesiones no industriales, cuestión que figura en tercer lugar en el orden del día de la reunión, y

Después de haber acordado que dichas proposiciones revistan la forma de un proyecto de convenio internacional.

Adopta, con fecha treinta de abril de mil novecientos treinta y dos, el siguiente proyecto de convenio para su ratificación por los miembros de la Organización Internacional del Trabajo, de conformidad con las disposiciones de la parte XIII del Tratado de Versalles y partes correspondientes de los demás tratados de paz:

Artículo 1º — 1. El presente convenio se aplica a todo trabajo que no haya sido ya objeto de la reglamentación prevista por alguno de los convenios siguientes, adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo, respectivamente, en sus reuniones primera, segunda y tercera:

Convenio que fija la edad mínima de admisión de los niños en trabajos industriales (Washington, 1919);

Convenio que fija la edad mínima de admisión de los niños al trabajo marítimo (Génova, 1920);

Convenio relativo a la edad de admisión de los niños al trabajo agrícola (Ginebra, 1921).

La autoridad competente de cada país determinará, previa consulta a las principales organizaciones patronales y obreras interesadas, la línea de demarcación entre el campo de aplicación del presente convenio y el de los tres convenios antes mencionados.

2. El presente convenio no será aplicable:

a) A la pesca marítima;

b) Al trabajo en las escuelas técnicas y profesionales, siempre que presente un carácter esencialmente educativo, no tenga como objeto ningún beneficio comercial y esté limitado, aprobado y controlado por la autoridad pública.

3. La autoridad competente de cada país estará facultada para excluir de la aplicación del presente convenio:

a) El trabajo en los establecimientos en que estén ocupados únicamente los miembros de la familia del patrono, a condición de que no se trate de ocupaciones nocivas, perjudiciales o peligrosas en el sentido de los artículos 3º y 5º que siguen;

b) El servicio doméstico en una familia por los miembros de la misma.

Art. 2º — Los niños menores de catorce años o los que, habiendo cumplido esta edad, sigan sometidos a la enseñanza primaria obligatoria, en virtud de la legislación nacional, no podrán ser ocupados en ningún trabajo al que se aplique el presente convenio, a reserva de lo que se dispone más adelante.

Art. 3º — 1. Los niños que hayan cumplido doce años podrán ser ocupados, fuera de las horas fijadas para su asistencia a la escuela, en trabajos ligeros, siempre cuando estos trabajos:

a) No sean nocivos para su salud o su desarrollo normal;

b) No sean de un carácter tal, que puedan perjudicar su asiduidad a la escuela o su aprovechamiento de la instrucción dada en ella;

c) No excedan de dos horas diarias, tanto en los días de clase como en vacaciones; ni de siete horas, en ningún caso, el tiempo total.

cado cada día a la escuela y a dichos trabajos ligeros.

2. Estarán prohibidos los trabajos ligeros:

a) Los domingos y días de fiesta pública legal;

b) Durante la noche, es decir, durante doce horas consecutivas que comprendan el intervalo entre las ocho de la noche y las ocho de la mañana.

3. Previa consulta a las principales organizaciones patronales y obreras interesadas, la legislación nacional:

a) Determinará cuáles son los trabajos que pueden considerarse como ligeros a los fines del presente artículo;

b) Prescribirá las garantías preliminares que hayan de llenarse antes de que los niños puedan ser empleados en trabajos ligeros.

4. A reserva de las disposiciones del párrafo a) del apartado 1, que antecede:

a) La legislación nacional podrá determinar los trabajos permitidos y su duración diaria durante el periodo de vacaciones de los niños mayores de catorce años a que se refiere el artículo 2º;

b) En los países donde no exista ninguna disposición relativa a la asistencia obligatoria a la escuela, la duración de los trabajos ligeros no deberá exceder de cuatro horas y media por día.

Art. 4º — En interés del arte, de la ciencia o de la enseñanza, la legislación nacional podrá conceder autorizaciones individuales, en derogación de las disposiciones de los artículos 2º y 3º del presente convenio, con objeto de permitir la presentación de niños en espectáculos públicos, así como su participación como actores o figurante en films cinematográficos.

Sin embargo,

a) No se concederá ninguna excepción en caso de tratarse de un empleo peligroso, en el sentido del artículo 5º siguiente, y especialmente en los espectáculos de circo, *variétés* y *cabarets*;

b) Serán exigidas garantías estrictas con objeto de proteger la salud, el desarrollo físico y la moralidad de los niños; para asegurarles buenos tratos, un descanso adecuado y la continuación de su instrucción;

c) Los niños autorizados a trabajar en las condiciones previstas por el presente artículo no deberán trabajar después de media noche.

Art. 5º — La legislación nacional fijará una edad o edades superiores a las mencionadas en el artículo 2º del presente convenio para la admisión de jóvenes y adolescentes en todo trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se realice, resulte peligroso para la vida, la salud o la moralidad de las personas que lo desempeñen.

Art. 6º — La legislación nacional fijará una edad o edades superiores a las mencionadas en el artículo

2º del presente convenio para la admisión de jóvenes y adolescentes en el comercio ambulante en la vía pública o en establecimientos y lugares públicos, en puestos de comercio al exterior, o en las profesiones ambulantes, cuando tales trabajos se realicen en condiciones que justifiquen la fijación de una edad más elevada.

Art. 7º — Con el fin de conseguir la aplicación efectiva de las disposiciones del presente convenio, la legislación nacional:

a) Establecerá un sistema adecuado de inspección y de control oficiales;

b) Dictará las medidas oportunas para facilitar la indentificación y el control de las personas menores de determinada edad ocupadas en los trabajos y profesiones a que se refiere el artículo 6º;

c) Impondrá sanciones para reprimir las infracciones a la legislación que dé efecto a las disposiciones del presente convenio.

Art. 8º — Las memorias anuales a que se refiere el artículo 408 del Tratado de Versalles y los artículos correspondientes de los demás tratados de paz, contendrán datos completos sobre la legislación que dé efecto a las disposiciones del presente convenio. Estos datos consistirán principalmente en:

a) Una lista de los trabajos que la legislación nacional considera como ligeros en el sentido del artículo 3º;

b) Una lista de los trabajos para los cuales la legislación nacional ha fijado, de conformidad con los artículos 5º y 6º, edades de admisión más elevadas que las establecidas por el artículo 2º;

c) Detalles completos sobre las condiciones en que se autoricen, en virtud del artículo 4º, las exenciones a lo dispuesto en los artículos 2º y 3º.

Art. 9º — Las disposiciones de los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º del presente convenio no serán aplicables a la India. No obstante, en la India:

1. Estará prohibido el empleo de los niños menores de diez años.

En interés del arte, de la ciencia o de la enseñanza, la legislación nacional podrá, sin embargo, conceder autorizaciones individuales en derogación de la disposición que precede, con objeto de permitir la presentación de los niños en los espectáculos públicos, así como su participación en los films cinematográficos, como actores o figurantes.

Además, cuando la edad de admisión de los niños en las manufacturas que no empleen fuerza motriz, y que no estén sometidas a la ley india sobre las fábricas, hubiera sido fijada por la legislación nacional en más de diez años, la edad así prescrita para la admisión al trabajo en dichas manufacturas substituirá a la de diez años, a los fines de la aplicación del presente apartado.

2. Los niños menores de catorce años no podrán ser empleados en ninguno de los trabajos no industriales que la autoridad competente, previa consulta a las principales organizaciones patronales y obreras interesadas, pueda declarar peligrosos para la vida, la salud o la moralidad de aquéllos.

3. La legislación nacional fijará una edad superior a la de diez años para la admisión de los jóvenes y adolescentes en el comercio ambulante en la vía pública o en establecimientos y lugares públicos, en los puestos de comercio al exterior, o en empleos de profesiones ambulantes, cuando esos trabajos se realicen en condiciones que justifiquen la fijación de una edad más elevada.

4. La legislación nacional contendrá medidas para la aplicación de las disposiciones del presente artículo y, en particular, establecerá las penas con que han de ser reprimidas las infracciones a la legislación que dé efecto a las disposiciones del presente artículo.

5. La autoridad competente deberá, después de un periodo de cinco años, a contar de la promulgación de las leyes que den efecto a las disposiciones del presente convenio, examinar de nuevo y por completo la situación con el fin de elevar las edades mínimas previstas en el presente convenio. Este nuevo examen se aplicará a todas las disposiciones del presente artículo.

Si se adoptara en la India una legislación que hiciera obligatoria la asistencia a la escuela hasta la edad de catorce años, el presente artículo dejaría de ser aplicable y los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º serían entonces aplicables a la India.

Art. 10. — Las ratificaciones oficiales del presente convenio, en las condiciones previstas por la parte XIII del Tratado de Versalles y partes correspondientes de los demás tratados de paz, serán comunicadas al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registradas por él.

Art. 11. — El presente convenio sólo obligará a los miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuya ratificación haya sido registrada por el secretario general.

El presente convenio entrará en vigor doce meses después de haber sido registradas por el secretario general las ratificaciones de dos miembros.

En lo sucesivo, este convenio entrará en vigor para cada miembro doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Art. 12. — Tan pronto como hayan sido registradas en la secretaría las ratificaciones de dos miembros de la Organización Internacional del Trabajo, el secretario general de la Sociedad de las Naciones lo notificará a todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, les notificará el registro de las ratificaciones que le comuniquen ulteriormente los demás miembros de la organización.

Art. 13. — Todo miembro que haya ratificado el presente convenio puede denunciarlo al cumplirse un plazo de diez años, a contar de la fecha inicial de la entrada en vigor del convenio, mediante declaración dirigida al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registrada por él. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de haber sido registrada en la secretaría. Todo miembro que haya ratificado el presente convenio y que, en el plazo de un año después de expirar el periodo de diez años mencionado en el apartado precedente, no haga uso de la facultad de denuncia prevista por el presente artículo, quedará obligado por un nuevo periodo de cinco años, pudiendo, en lo sucesivo, denunciar el presente convenio al expirar cada periodo de cinco años en las condiciones previstas en el presente artículo.

Art. 14. — A la expiración de cada periodo de diez años, a contar de la entrada en vigor del presente convenio, el Consejo de Administración de la Oficina In-

ternacional del Trabajo deberá presentar a la conferencia general una memoria sobre la aplicación del presente convenio y decidirá si procede incluir en el orden del día de la conferencia la revisión total o parcial del mismo.

Art. 15. — En caso de que la conferencia adopte un nuevo convenio que constituya una revisión total o parcial del presente convenio, la ratificación por un miembro del nuevo convenio revisado implica, de pleno derecho, no obstante lo dispuesto en el artículo 13, la denuncia inmediata del presente convenio, a reserva de que el nuevo convenio revisado haya entrado en vigor.

A partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo convenio revisado, el presente convenio no podrá ya ser objeto de ratificación por los miembros.

El presente convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido, para los miembros que lo hayan ratificado y que no ratifiquen el convenio revisado.

Art. 16. — Los textos francés e inglés del presente convenio son igualmente auténticos.

Proyecto de convenio (número 34) relativo a las agencias retribuidas de colocaciones

La Conferencia de la Organización Internacional de Trabajo de la Sociedad de las Naciones.

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad, el 8 de junio de 1933 en su décimoséptima reunión;

Después de haber aprobado diversas proposiciones en relación con las agencias retribuidas de colocaciones, cuestión que figura en primer lugar en el orden del día de la reunión, y

Después de haber acordado que dichas proposiciones revistan la forma de un proyecto de convenio internacional:

Adopta, con fecha veintinueve de junio de mil novecientos treinta y tres, el siguiente proyecto de convenio para su ratificación por los miembros de la Organización Internacional del Trabajo, de conformidad con las disposiciones de la parte XIII del Tratado de Versalles y partes correspondientes de los demás tratados de paz.

Artículo 1º — 1. A los fines del presente convenio, la expresión «agencia retribuida de colocaciones» designa:

- Las agencias de colocaciones con fines lucrativos, es decir, toda persona, sociedad, institución, oficina u otra organización que sirva de intermediario para procurar un empleo a un trabajador o un trabajador a un patrono, con objeto de obtener de uno u otro un beneficio material directo o indirecto; esta definición no se aplica a los periódicos u otras publicaciones, a no ser que tengan por objeto exclusivo o principal el de actuar como intermediarios entre patronos y trabajadores;
- Las agencias de colocaciones sin fines lucrativos, es decir los servicios de colocación de las sociedades, instituciones, agencias u otras organizaciones que, sin buscar un beneficio material, perciben del patrono o del trabajador por dichos servicios un derecho de entrada, una cotización o remuneración cualquiera.

Art. 2º — 1. Las agencias retribuidas de colocaciones con fines lucrativos comprendidas en el apartado 1 a) del artículo precedente, deberán ser suprimidas en un plazo de tres años, a contar de la entrada en vigor, para cada miembro, del presente convenio.

2. Durante el período que preceda a esta supresión:

- No será establecida ninguna nueva agencia de colocaciones retribuida con fines lucrativos;
- Las agencias de colocaciones retribuidas con fines lucrativos, estarán sometidas al control de la autoridad competente y no podrán percibir más que las retribuciones y gastos que figuren en tarifa aprobada por dicha autoridad.

Art. 3º — 1. La autoridad competente podrá permitir excepcionalmente la derogación de las disposiciones del apartado 1 del artículo 2º del presente convenio, pero solamente después de haber consultado a las organizaciones patronales y obreras interesadas.

2. Las derogaciones autorizadas en virtud del presente artículo, sólo podrán aplicarse a las agencias dedicadas a la colocación de las clases de trabajadores que designe expresamente la legislación nacional y que pertenezcan a profesiones en las que la colocación se efectúa en tales condiciones especiales que justifican la derogación.

3. El establecimiento de nuevas agencias retribuidas de colocaciones no podrá ser autorizado, en virtud del presente artículo, una vez expirado el plazo de tres años previsto en el artículo 2º.

4. Toda agencia de colocaciones retribuida a la que se conceda una derogación en virtud del presente artículo:

- Quedará sometida al control de la autoridad competente;
- Deberá poseer una licencia anual renovable a discreción de la autoridad competente durante diez años o más;
- No podrá percibir más retribución y gastos que los que figuren en tarifa aprobada por la autoridad competente;
- No podrá colocar ni reclutar trabajadores en el extranjero si no está para ello autorizada por su licencia y a condición de que sus operaciones se efectúen en aplicación de un acuerdo entre los países interesados.

Art. 4º — Las agencias retribuidas de colocaciones sin fines lucrativos, designadas en el artículo 1º, apartado 1 b):

- Deberán poseer un permiso de la autoridad competente y estarán sometidas al control de la misma;
- No podrán percibir retribución superior a la tarifa que será fijada por la autoridad competente, teniendo en cuenta estrictamente los gastos ocasionados;
- No podrán colocar ni reclutar trabajadores en el extranjero si no están para ello autorizadas por la autoridad competente, teniendo en cuenta estrictamente los gastos ocasionados;
- No podrán colocar ni reclutar trabajadores en el extranjero si no están para ello autorizadas por la autoridad competente y a condición de que sus operaciones se efectúen en aplicación de un acuerdo entre los países interesados.

Art. 5º — Las agencias retribuidas de colocaciones comprendidas en el artículo 1º del presente convenio, así como toda persona, sociedad, institución, oficina u otra organización privada que se dedique corrientemente a procurar colocaciones, incluso a título gratuito, estarán obligadas a presentar una declaración a la autoridad competente, indicando si sus servicios de colocación son gratuitos o retribuidos.

Art. 6º — La legislación nacional establecerá las sanciones penales adecuadas para cada infracción de las disposiciones de los artículos precedentes o de las prescripciones que les den efecto, comprendiendo, incluso, la retirada de la licencia o de la autorización previstas en el presente convenio.

Art. 7º — Las memorias anuales previstas por el artículo 408 del Tratado de Versalles y los artículos correspondientes de los demás tratados de paz contendrán todos los datos necesarios sobre las derogaciones concedidas en virtud del artículo 3º.

Art. 8º — Las ratificaciones oficiales del presente convenio, en las condiciones previstas por la parte XIII del Tratado de Versalles y partes correspondientes de los demás tratados de paz, serán comunicadas al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registradas por él.

Art. 9º — El presente convenio sólo obligará a los miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuya ratificación haya sido registrada por el secretario general.

El presente convenio entrará en vigor doce meses después de haber sido registradas por el secretario general las ratificaciones de dos miembros.

En lo sucesivo, este convenio entrará en vigor para cada miembro doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Art. 10. — Tan pronto como hayan sido registradas en la secretaría las ratificaciones de dos miembros de la Organización Internacional del Trabajo, el secretario general de la Sociedad de las Naciones lo notificará a todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, les notificará el registro de las ratificaciones que le comuniquen ulteriormente los demás miembros de la organización.

Art. 11. — Todo miembro que haya ratificado el presente convenio puede denunciarlo al cumplirse un plazo de diez años, a contar de la fecha inicial de la entrada en vigor del convenio, mediante declaración dirigida al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registrada por él. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de haber sido registrada en la secretaría.

Todo miembro que haya ratificado el presente convenio y que, en el plazo de un año después de expirar el período de diez años mencionado en el apartado precedente, no haga uso de la facultad de denuncia prevista por el presente artículo, quedará obligado por un nuevo período de diez años, pudiendo, en lo sucesivo, denunciar el presente convenio al expirar cada período de diez años en las condiciones previstas en el presente artículo.

Art. 12. — A la expiración de cada período de diez años, a contar de la entrada en vigor del presente convenio, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la conferencia general una memoria sobre la aplicación del presente convenio, y decidirá si procede incluir en el orden del día de la conferencia la revisión total o parcial del mismo.

Art. 13. — En caso de que la conferencia adopte un nuevo convenio que constituya una revisión total o

parcial del presente convenio y a no ser que el nuevo convenio disponga lo contrario:

- La ratificación por un miembro del nuevo convenio revisado implica, de pleno derecho, no obstante lo dispuesto en el artículo 11, la denuncia inmediata del presente convenio, a reserva de que el nuevo convenio revisado haya entrado en vigor;
- A partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo convenio revisado, el presente convenio no podrá ya ser objeto de ratificación por los miembros.

El presente convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido, para los miembros que lo hayan ratificado y que no ratifiquen el convenio revisado.

Art. 14. — Los textos francés e inglés del presente convenio son igualmente auténticos.

Proyecto de convenio (número 41) relativo al trabajo nocturno de las mujeres (revisado en 1934)

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones,

Convocada por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 de junio de 1934, en su décimotercera reunión;

Después de haber aprobado diversas proposiciones respecto de la revisión parcial del convenio adoptado por la conferencia en su primera reunión, sobre el trabajo nocturno de las mujeres, cuestión que constituye el séptimo punto del orden del día de la presente reunión;

Considerando que dichas proposiciones deben revestir la forma de un proyecto de convenio internacional,

Adopta, con fecha diecinueve de junio de mil novecientos treinta y cuatro, el siguiente proyecto de convenio, que será denominado: Convenio (revisado) del trabajo nocturno (de las mujeres), 1934.

Artículo 1º — 1. Para la aplicación del presente convenio se considerarán como «establecimientos industriales», en particular:

- Las minas, canteras e industrias extractivas de toda clase;
- Las industrias en las cuales se manufacturen, modifiquen, limpien, reparen, adornen, terminen o preparen productos para la venta, o en las cuales las materias sufran una transformación, comprendiendo la construcción de buques, las industrias de demolición, así como la producción, la transformación y la transmisión de fuerza motriz, en general, y de la electricidad;
- La construcción, reconstrucción, conservación, reparación, modificación o demolición de edificios y construcciones de todas clases; los ferrocarriles, tranvías, puertos, depósitos, muelles, canales, instalaciones para la navegación interior, caminos, túneles, puentes, viaductos, cloacas colectoras, cloacas ordinarias, pozos instalaciones telegráficas o telefónicas, instalaciones eléctricas, fábricas de gas, distribución de agua, u otros trabajos de construcción, así como las obras de preparación y fundación que preceden a los tratados antes designados.

2. En cada país, la autoridad competente determinará la línea de demarcación entre la industria, de una parte, y el comercio y la agricultura, de otra.

Art. 2º—1. Para la aplicación del presente convenio, el término «noche» significa un período de once horas consecutivas, por lo menos, que comprenderán el intervalo que media entre las diez de la noche y las cinco de la mañana.

2. Sin embargo, en caso de circunstancias excepcionales que afecten a los trabajadores empleados en una industria o en una región determinada, la autoridad competente podrá, previa consulta a las organizaciones patronales y obreras interesadas, disponer que, para las mujeres ocupadas en esta industria o en esta región, el intervalo comprendido entre las diez de la noche y las cinco de la mañana pueda ser substituido por el que media entre las once de la noche y las seis de la mañana.

3. En los países en que no se aplique ningún reglamento público al empleo nocturno de la mujer en los establecimientos industriales, la palabra «noche» podrá provisionalmente, y durante un período máximo de tres años, significar, a discreción del gobierno, un período de diez horas solamente, que comprenderá el intervalo que media entre las diez de la noche y las cinco de la mañana.

Art. 3º—Las mujeres, sin distinción de edad, no podrán ser empleadas durante la noche en ningún establecimiento industrial, público ni privado, ni en ninguna dependencia de dichos establecimientos, con excepción de aquellos en que únicamente estén empleados los miembros de una misma familia.

Art. 4º—No se aplicará el artículo 3º:

- a) En caso de fuerza mayor, cuando en una empresa sobrevenga una interrupción de trabajo imposible de prever y que no tenga carácter periódico;
- b) En caso de que el trabajo se haga sobre primeras materias o sobre materias en elaboración susceptibles de alteración muy rápida, cuando sea necesario para salvar dichas materias de una pérdida inevitable.

Art. 5º—En la India y en Siam, la aplicación del artículo 3º del presente convenio podrá ser suspendida por el gobierno, salvo en lo que concierne a las manufacturas *factories*, según las define la ley nacional. De cada una de las industrias exceptuadas se dirigirá una notificación a la Oficina Internacional del Trabajo.

Art. 6º—En los establecimientos industriales sometidos a la influencia de las estaciones, y en todos los casos en que lo exijan circunstancias excepcionales, la duración del período nocturno, mencionado en el artículo 2º, podrá reducirse a diez horas durante sesenta días por año.

Art. 7º—En los países donde el clima haga singularmente penoso el trabajo diurno, el período nocturno podrá ser más corto que el fijado por los artículos anteriores, con la condición de que durante el día se conceda un descanso compensador.

Art. 8º—El presente convenio no es aplicable a las mujeres que ocupen cargos de dirección que impliquen responsabilidad y que no efectúen normalmente un trabajo manual.

Art. 9º—Las ratificaciones oficiales del presente convenio serán comunicadas al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registradas por él.

Art. 10.—1. El presente convenio sólo obligará a los miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuya ratificación haya sido registrada por el secretario general.

2. El presente convenio entrará en vigor doce meses después de haber sido registradas por el secretario general las ratificaciones de dos miembros.

3. En lo sucesivo, este convenio entrará en vigor para cada miembro doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Art. 11.—Tan pronto como hayan sido registradas en la secretaría las ratificaciones de dos miembros de la Organización Internacional del Trabajo, el secretario general de la Sociedad de las Naciones lo notificará a todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo les notificará el registro de las ratificaciones que le comuniquen ulteriormente los demás miembros de la organización.

Art. 12.—1. Todo miembro que haya ratificado el presente convenio puede denunciarlo al cumplirse un plazo de diez años, a contar de la fecha inicial de la entrada en vigor del convenio, mediante declaración dirigida al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registrada por él. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de haber sido registrada en la secretaría.

2. Todo miembro que haya ratificado el presente convenio y que, en el plazo de un año después de expirar el período de diez años mencionado en el apartado precedente, no haga uso de la facultad de denuncia prevista por el presente artículo, quedará obligado por un nuevo período de diez años, pudiendo, en lo sucesivo, denunciar el presente convenio al expirar cada período de diez años en las condiciones previstas en el presente artículo.

Art. 13.—A la expiración de cada período de diez años, a contar de la entrada en vigor del presente convenio, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la conferencia general una memoria sobre la aplicación del presente convenio, y decidirá si procede incluir en el orden del día de la conferencia la revisión total o parcial del mismo.

Art. 14.—1. En caso de que la conferencia adopte un nuevo convenio que constituya una revisión total o parcial del presente convenio y a no ser que el nuevo convenio disponga lo contrario:

- a) La ratificación por un miembro del nuevo convenio revisado implica de pleno derecho, no obstante lo dispuesto en el artículo 12, la denuncia inmediata del presente convenio, a reserva de que el nuevo convenio revisado haya entrado en vigor;
- b) A partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo convenio revisado, el presente convenio no podrá ya ser objeto de ratificación por los miembros.

2. El presente convenio continuará en vigor, en todo caso, en su forma y contenido, para los miembros que lo hayan ratificado y que no ratifiquen el convenio revisado.

Art. 15.—Los textos francés e inglés del presente convenio son igualmente auténticos.

Proyecto de convenio (número 42) relativo a la reparación de las enfermedades profesionales (revisado en 1934).

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo de la Sociedad de las Naciones, Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 de junio de 1934, en su décimoctava reunión;

Después de haber aprobado diversas proposiciones relativas a la revisión parcial del convenio adoptado por la conferencia en su séptima reunión sobre la reparación de las enfermedades profesionales, cuestión que constituye el quinto punto del orden del día de la presente reunión;

Considerando que dichas proposiciones deben revestir la forma de un proyecto de convenio internacional,

Adopta, con fecha veintiuno de junio de mil novecientos treinta y cuatro, el siguiente proyecto de convenio que será denominado: «Convenio (revisado) sobre las enfermedades profesionales, 1934»:

Artículo 1º — 1. Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente convenio se obliga a asegurar a las víctimas de enfermedades profesionales o a sus derechohabientes una reparación basada en los principios generales de su legislación nacional sobre reparación de accidentes de trabajo.

2. La cuantía de esta indemnización no será inferior a la que establezca la legislación nacional por los daños resultantes de accidentes del trabajo. A reserva de esta disposición, cada miembro quedará en libertad para adoptar las modificaciones y adaptaciones que estime oportunas al determinar en su legislación nacional las condiciones que regulen el pago de la reparación de las enfermedades de que se trata, y al aplicar a estas enfermedades su legislación sobre reparación de accidentes del trabajo.

Art. 2º—Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente convenio se obliga a considerar como enfermedades profesionales las enfermedades y las intoxicaciones producidas por las sustancias inscritas en el cuadro que sigue, cuando contraigan estas enfermedades o intoxicaciones los trabajadores ocupados en las profesiones, industrias u operaciones correspondientes, según se indica en dicho cuadro, y que resulten del trabajo en una empresa sometida a la legislación nacional.

Listas de enfermedades y sustancias tóxicas

Intoxicaciones por el plomo, sus aleaciones o sus compuestos, con las consecuencias directas de dicha intoxicación.

Lista de profesiones, industrias u operaciones correspondientes.

Tratamiento de minerales que contengan plomo, incluidas las cenizas plumbíferas de las fábricas en que se obtiene el cinc.

Fusión del cinc viejo y del plomo en galápagos.

Fabricación de objetos de plomo fundido o de aleaciones plumbíferas.

Industrias poligráficas. Fabricación de los compuestos de plomo.

Fabricación y reparación de acumuladores.

Preparación y empleo de los esmaltes que contengan plomo.

Pulimentación por medio de limaduras de plomo o de polvos plumbíferos.

Trabajos de pintura que comprenden la preparación o la manipulación de revestimientos mástiques o tintes que contengan pigmentos de plomo.

Intoxicación por el mercurio, sus amalgamas y sus compuestos, con las consecuencias directas de dicha intoxicación.

Tratamiento de minerales de mercurio. Fabricación de compuestos de mercurio.

Fabricación de aparatos de medición o de laboratorio. Preparación de materias primas para sombrerería.

Dorado a fuego. Empleo de bombas de mercurio para la fabricación de lámparas incandescentes.

Fabricación de cebos con fulminato de mercurio.

Infección carbuncosa.

Obreros que estén en contacto con animales carbuncosos.

Manipulación de despojos de animales.

Carga, descarga o transporte de mercancías.

Las industrias u operaciones reconocidas por las leyes o reglamentos nacionales como expuestas a los riesgos de la silicosis.

Las operaciones de que consta la producción, la separación o la utilización del fósforo o de sus compuestos.

La silicosis con o sin tuberculosis pulmonar, siempre que la silicosis sea causa determinante de incapacidad o muerte.

Intoxicación por el fósforo y sus compuestos con las consecuencias directas de esta intoxicación.

Intoxicación por el arsénico o sus compuestos con las consecuencias directas de esta intoxicación.

Todas las operaciones de que consta la producción, la separación o la utilización del arsénico y sus compuestos.

Intoxicación por el benceno o sus homólogos, sus derivados nitrosos y aminicos con las consecuencias directas de esta intoxicación.

Todas las operaciones de que consta la producción, la separación o la utilización del benceno o de sus homólogos o de sus derivados nitrosos y aminicos.

Intoxicación por los derivados halógenos de los hidrocarburos grasos.

Todas las operaciones de que consta la producción, la separación o la utilización de los derivados halógenos de los hidrocarburos grasos, designados por las leyes nacionales.

Trastornos patológicos debidos:

- a) Al radium y a otras sustancias radioactivas;
- b) A los rayos X.

Todas las operaciones que expongan a la acción del radium sustancias radioactivas o rayos X.

Epiteliomas primitivos de la piel.

Todas las operaciones de que consta la manipulación o el empleo de alquitrán, brea, betún, aceites minerales, parafina, o de compuestos, productos o residuos de estas sustancias.

Art. 3º — Las ratificaciones oficiales del presente convenio serán comunicadas al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registradas por él.

Art. 4º — El presente convenio sólo obligará a los miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuya ratificación haya sido registrada por el secretario general.

El presente convenio entrará en vigor doce meses después de haber sido registradas por el secretario general las ratificaciones de dos miembros.

En lo sucesivo, este convenio entrará en vigor para cada miembro doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Art. 5º — Tan pronto como hayan sido registradas en la secretaría las ratificaciones de dos miembros de la Organización Internacional del Trabajo, el secretario general de la Sociedad de las Naciones lo notificará a todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo les notificará el registro de las ratificaciones que le comuniquen ulteriormente los demás miembros de la organización.

Art. 6º — 1. Todo miembro que haya ratificado el presente convenio puede denunciarlo al cumplirse un plazo de cinco años, a contar de la fecha inicial de la entrada en vigor del convenio, mediante declaración dirigida al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registrada por él. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de haber sido registrada en la secretaría.

2. Todo miembro que haya ratificado el presente convenio y que, en el plazo de un año después de expirar el período de cinco años mencionado en el apartado precedente no haga uso de la facultad de denuncia prevista por el presente artículo, quedará obligado por un nuevo período de cinco años, pudiendo, en lo sucesivo, denunciar el presente convenio al expirar cada período de cinco años en las condiciones previstas en el presente artículo.

Art. 7º — A la expiración de cada período de diez años, a contar de la entrada en vigor del presente convenio, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la conferencia general una memoria sobre la aplicación del presente convenio, y decidirá si procede incluir en el orden del día de la conferencia la revisión total o parcial del mismo.

convenio, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la conferencia general una memoria sobre la aplicación del presente convenio, y decidirá si procede incluir en el orden del día de la conferencia la revisión total o parcial del mismo.

Art. 8º — 1. En caso de que la conferencia adopte un nuevo convenio que constituya una revisión total o parcial del presente convenio, y a no ser que el nuevo convenio disponga lo contrario:

- a) La ratificación por un miembro del nuevo convenio revisado implica de pleno derecho, no obstante lo dispuesto en el artículo 6º, la denuncia inmediata del presente convenio, a reserva de que el nuevo convenio revisado haya entrado en vigor;
- b) A partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo convenio revisado, el presente convenio no podrá ya ser objeto de ratificación por los miembros.

2. El presente convenio continuará en vigor en todo caso en su forma y contenido para los miembros que lo hayan ratificado y que no ratifiquen el convenio revisado.

Art. 9º — Los textos francés e inglés del presente convenio son igualmente auténticos.

Proyecto de convenio (Nº 45) sobre el empleo de mujeres en trabajos subterráneos en las minas de todas clases.

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 4 de junio de 1935, en su décimo novena reunión,

Después de haber aprobado diversas proposiciones relativas al empleo de mujeres en trabajos subterráneos en las minas de todas clases, cuestión que constituye el segundo punto del orden del día de la reunión,

Después de haber acordado que dichas proposiciones revistan la forma de un proyecto de convenio internacional.

Adopta, con fecha veintiuno de junio de mil novecientos treinta y cinco, el siguiente proyecto de convenio que se denominará: «Convenio sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935».

Artículo 1º — Para la aplicación del presente convenio, el término «mina» comprenderá toda empresa, pública o privada, dedicada a la extracción de sustancias situadas bajo tierra.

Art. 2º — En los trabajos subterráneos de las minas no podrá emplearse ninguna persona de sexo femenino, sea cual fuere su edad.

Art. 3º — La legislación nacional podrá exceptuar de esta prohibición:

- a) A las mujeres que ocupen un cargo de dirección y no realicen un trabajo manual;
- b) A las mujeres empleadas en los servicios sanitarios y sociales;
- c) A las mujeres admitidas durante sus estudios a realizar prácticas en la parte subterránea de una mina, con fines de formación profesional;

d) A toda otra mujer que ocasionalmente haya de descender a la parte subterránea de una mina en ejercicio de una profesión que no sea de carácter manual.

Art. 4º — Las ratificaciones oficiales del presente convenio serán comunicadas al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registradas por él.

Art. 5º — 1. El presente convenio sólo obligará a los miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuya ratificación haya sido registrada por el secretario general.

2. El presente convenio entrará en vigor doce meses después de haber sido registradas por el secretario general las ratificaciones de dos miembros.

3. En lo sucesivo, este convenio entrará en vigor para cada miembro doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Art. 6º — Tan pronto como hayan sido registradas las ratificaciones de dos miembros de la Organización Internacional del Trabajo, el secretario general de la Sociedad de las Naciones lo notificará a todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo les notificará el registro de las ratificaciones que le comuniquen ulteriormente los demás miembros de la organización.

Art. 7º — 1. Todo miembro que haya ratificado el presente convenio puede denunciarlo al cumplirse un plazo de diez años, a contar de la fecha inicial de la entrada en vigor del convenio, mediante declaración dirigida al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registrada por él. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de haber sido registrada.

2. Todo miembro que haya ratificado el presente convenio y que, en el plazo de un año, después de expirar el período de diez años mencionado en el apartado precedente, no haga uso de la facultad de denuncia prevista por el presente artículo, quedará obligado por un nuevo período de diez años, pudiendo, en lo sucesivo, denunciar el presente convenio al expirar cada período de diez años en las condiciones previstas en el presente artículo.

Art. 8º — A la expiración de cada período de diez años, a contar de la entrada en vigor del presente convenio, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la conferencia general una memoria sobre la aplicación del presente convenio y decidirá si procede incluir en el orden del día de la conferencia la revisión total o parcial del mismo.

Art. 9º — 1. En caso de que la conferencia adopte un nuevo convenio que constituya una revisión total o parcial del presente convenio y a no ser que el nuevo convenio disponga lo contrario:

- a) La ratificación por un miembro del nuevo convenio revisado implica de pleno derecho, no obstante lo dispuesto en el artículo 7º, la denuncia inmediata del presente convenio, a reserva de que el nuevo convenio revisado haya entrado en vigor;
- b) A partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo convenio revisado, el presente convenio no podrá ya ser objeto de ratificación por los miembros.

2. El presente convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido, para los miembros que lo hayan ratificado y que no ratifiquen el convenio revisado.

Art. 10. — Los textos francés e inglés del presente convenio son igualmente auténticos.

Proyectos de convenio y recomendaciones adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo en su vigésima reunión celebrada en 1936.

Proyecto de convenio (Nº 50) relativo a la reglamentación de ciertos sistemas particulares de reclutamiento de los trabajadores.

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 de junio de 1936, en su vigésima reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la reglamentación de ciertos sistemas particulares de reclutamiento de los trabajadores, cuestión que constituye el primer punto del orden del día de la reunión;

Después de haber acordado que dichas proposiciones revistan la forma de un proyecto de convenio internacional;

Adopta, con fecha 20 de junio de 1936, el siguiente proyecto de convenio que será denominado *Convenio sobre el reclutamiento de trabajadores indígenas, 1936*:

Artículo 1º — Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente convenio se compromete a reglamentar, de conformidad con las disposiciones siguientes, el reclutamiento de los trabajadores indígenas en cada uno de sus territorios en donde tal reclutamiento exista o pudiese ulteriormente existir.

Art. 2º — A los fines del presente convenio:

- a) El término «reclutamiento», comprende todas las operaciones realizadas con objeto de conseguir para sí o proporcionar a un tercero la mano de obra de personas que no ofrezcan espontáneamente sus servicios, ya sea en el lugar del trabajo, o en una oficina pública de emigración o de colocación, o en una oficina dirigida por alguna organización patronal y sometida al control de la autoridad competente;
- b) El término «trabajadores indígenas», comprende a los trabajadores pertenecientes o asimilados a la población indígena de los territorios que dependen de los miembros de la organización, así como los trabajadores pertenecientes o asimilados a la población indígena no independiente de los territorios metropolitanos de los miembros de la organización.

Art. 3º — Cuando las circunstancias hagan deseable esta política, la autoridad competente podrá exceptuar de la aplicación del presente convenio las siguientes clases de operaciones de reclutamiento, siempre que tales operaciones no sean emprendidas por personas o sociedades que ejerzan el reclutamiento profesional:

- a) Operaciones emprendidas por o en nombre de patronos que no empleen un número de trabajadores superior al que se fije como límite;

- b) Operaciones emprendidas en una zona determinada, que se fijará, del lugar en que el trabajo ha de efectuarse;
- c) Operaciones emprendidas con el fin de contratar trabajadores para prestar servicios de carácter personal o doméstico y trabajadores no manuales.

Art. 4º — Antes de aprobar, para una región determinada, cualquier plan de fomento económico que por su naturaleza implique el reclutamiento de mano de obra, la autoridad competente deberá adoptar cuantas medidas puedan ser realizables y necesarias;

- a) Para evitar el riesgo de que se ejerza presión sobre las colectividades interesadas, por o en nombre de los patronos, a fin de obtener la mano de obra necesaria;
- b) Para asegurar, en la medida posible, que la organización política y social de dichas colectividades y sus facultades de adaptación a las nuevas condiciones económicas no corran peligro con la demanda de mano de obra;
- c) Para hacer frente a cualesquiera otras consecuencias enojosas que este desarrollo económico pudiera traer consigo, en lo que se refiere a las colectividades interesadas.

Art. 5º — 1. Antes de autorizar un reclutamiento de mano de obra en un territorio determinado, la autoridad competente debe tener en cuenta las posibles repercusiones que pudiera ocasionar en la vida social de la colectividad interesada el traslado de los adultos del sexo masculino, teniendo presente, sobre todo, los puntos siguientes:

- a) Densidad de la población, su tendencia al aumento o a la disminución y efectos probables del alejamiento de los adultos del sexo masculino, sobre el índice de la natalidad;
- b) Efectos posibles de este alejamiento sobre las condiciones de higiene, de bienestar y de desarrollo de la colectividad interesada, particularmente en lo que se refiere a sus medios de subsistencia;
- c) Peligros que provengan de este alejamiento, en lo que se refiere a las condiciones familiares y morales;
- d) Posibles efectos de este alejamiento sobre la organización social de la colectividad interesada.

2. Cuando las circunstancias hagan realizable y necesaria la adopción de esta política, la autoridad competente deberá, para proteger a las colectividades interesadas contra todas las repercusiones enojosas del alejamiento de los adultos del sexo masculino, señalar el número máximo de los adultos del sexo masculino que puedan ser reclutados en una unidad social dada, de modo que el número de adultos del sexo masculino que se deje en esta unidad no sea inferior a un porcentaje determinado de la proporción normal de los adultos del sexo masculino en relación con las mujeres y con los niños.

Art. 6º — No deberán reclutarse personas no adultas. Sin embargo, la autoridad competente podrá autorizar el reclutamiento de no adultos con el consentimiento de sus padres o de la autoridad competente.

para efectuar trabajos ligeros, a condición de que se prescriban las garantías que han de adoptarse para su bienestar.

Art. 7º — 1. No debe considerarse que el reclutamiento de un cabeza de familia implique el de cualquiera de los miembros de su familia.

2. Cuando las circunstancias hagan realizable y deseable la adopción de esta política, la autoridad competente deberá estimular a los trabajadores reclutados a que se hagan acompañar por sus familias, y muy particularmente cuando tales trabajadores sean reclutados con destino a labores agrícolas o análogas, que hayan de ser ejecutadas a gran distancia de sus hogares y por periodos que excedan de un tiempo determinado.

3. Salvo requerimiento expreso de los interesados, los trabajadores reclutados no deben ser separados de sus mujeres y de sus hijos menores autorizados para acompañarles y residir con ellos en el lugar del trabajo.

4. Salvo estipulación en contrario, antes de la partida del trabajador del lugar de su reclutamiento, la autorización para acompañarle debe considerarse como una autorización para vivir con él mientras dure su empleo.

Art. 8º — Cuando las circunstancias hagan realizable y deseable la adopción de esta política, la autoridad competente podrá subordinar el reclutamiento a la condición de que los trabajadores reclutados sean agrupados en el lugar del trabajo, según sus afinidades étnicas.

Art. 9º — Los funcionarios públicos no deberán reclutar, directa ni indirectamente, para las empresas privadas, salvo los casos en que los trabajadores reclutados deben ser empleados en obras de utilidad pública cuya ejecución esté confiada a empresas privadas por cuenta de una autoridad pública.

Art. 10. — Los jefes y demás autoridades indígenas no deberán:

- a) Actuar como agentes de reclutamiento;
- b) Ejercer ninguna presión sobre los reclutados eventuales;
- c) Recibir de ninguna procedencia una remuneración especial o cualquier otro beneficio especial por el hecho de haber contribuido al reclutamiento.

Art. 11. — Ninguna persona o sociedad podrá realizar actos de reclutamiento profesional a menos que dicha persona o sociedad haya sido debidamente autorizada por la autoridad competente y reclute trabajadores en nombre de la administración pública o en el de uno o varios patronos o asociaciones patronales determinados.

Art. 12. — Los patronos, agentes de patronos, organizaciones patronales, organizaciones subvencionadas por los patronos, agentes de las organizaciones de los patronos y de organizaciones subvencionadas por los patronos no podrán realizar actos de reclutamiento sin un permiso otorgado por la autoridad competente.

Art. 13. — 1. Antes de otorgar un permiso de reclutamiento, la autoridad competente deberá:

- a) Cerciorarse de que el solicitante, si se trata de un particular, posee las aptitudes necesarias y ofrece garantías suficientes;
- b) Obligar al solicitante, a menos que se trate de una organización patronal o de una orga-

nización subvencionada por los patronos, a facilitar una garantía financiera o de otra clase para la buena ejecución de sus obligaciones, como titular del permiso;

- c) Obligar al solicitante, si se trata de un patrono, a facilitar una garantía financiera o de otra clase para el pago de los salarios devengados; y
- d) Cerciorarse de que se han adoptado todas las disposiciones necesarias para proteger la salud y el bienestar de los trabajadores que haya que reclutar.

2. Los titulares de permisos deben llevar un registro que permita comprobar la regularidad de toda operación de reclutamiento o identificar a cada trabajador reclutado, de acuerdo con las normas aprobadas por la autoridad competente.

3. Todo titular de permiso que sea agente de otro titular deberá, en lo posible, percibir un salario fijo; pero si recibe una remuneración proporcional al número de trabajadores reclutados, ésta no debe exceder de un límite que fijará la autoridad competente.

4. La validez de los permisos deberá limitarse a un período determinado, que fijará la autoridad competente y que no deberá exceder de un año.

5. La renovación de los permisos debe subordinarse a la manera en que los titulares hayan respetado las condiciones fijadas para su otorgamiento.

6. La autoridad competente tendrá facultad para:

- a) Retirar un permiso si el titular ha incurrido en alguna infracción o falta que lo descalifique para efectuar el reclutamiento;
- b) Suspender un permiso en espera del resultado de cualquier investigación efectuada sobre los actos del titular de dicho permiso.

Art. 14. — 1. Ninguna persona debe ayudar, como subalterno, al titular de un permiso en las operaciones mismas del reclutamiento, si aquella persona no ha sido aceptada por un funcionario público y está provista de autorización concedida por el titular del permiso.

2. Cada titular de un permiso será responsable de la corrección de la conducta de estos auxiliares.

Art. 15. — 1. Cuando las circunstancias hagan necesaria y deseable la adopción de esta política, la autoridad competente podrá eximir de la obligación del permiso a los trabajadores reclutadores:

- a) Que estén empleados como trabajadores en la empresa para la cual reclutan otros trabajadores;
- b) Que se hallen expresamente encargados por el patrono con arreglo a un documento escrito, del reclutamiento de otros trabajadores;
- c) Que no perciban una remuneración ni ningún otro beneficio por el hecho del reclutamiento.

2. Los trabajadores reclutadores no deberán conceder anticipos sobre los salarios a los reclutados.

3. Los trabajadores reclutadores no deberán poder reclutar sino en una zona determinada por la autoridad competente.

4. Las operaciones de los trabajadores reclutadores deberán ser controladas en la forma prevista por la autoridad competente.

Art. 16. — 1. Los trabajadores reclutados deberán ser presentados a un funcionario público, que comprobará si se han observado las prescripciones de la legislación en materia de reclutamiento y, en particular, si los trabajadores no han sido sometido a una presión ilícita ni reclutados con fraude o error.

2. Los trabajadores reclutados deberán ser presentados a este funcionario lo más cerca posible del lugar del reclutamiento, o cuando se trate de trabajadores reclutados en un territorio para ser empleados en otro dependiente de otra administración, a más tardar, en el lugar de partida del territorio del reclutamiento.

Art. 17. — Cuando las circunstancias hagan realizable y necesaria la adopción de esta disposición, la autoridad competente deberá imponer la entrega, a todo trabajador reclutado, cuyo contrato no se hiciera en el mismo lugar del reclutamiento o cerca de dicho lugar, de un documento escrito como certificado de empleo, cartilla de trabajo o contrato provisional, que contenga los datos que la autoridad competente estime necesarios, como, por ejemplo, las indicaciones de identidad del trabajador las condiciones del empleo en perspectiva y cualquier anticipo sobre los salarios concedido al trabajador.

Art. 18. — 1. Todo trabajador reclutado deberá someterse a un reconocimiento médico.

2. Cuando el trabajador haya sido reclutado para trabajar en una zona alejada del lugar de reclutamiento o haya sido reclutado en un territorio dependiente de otra administración, el reconocimiento médico deberá efectuarse lo más cerca posible del lugar del reclutamiento, y, en el caso de trabajadores reclutados en un territorio para trabajar en otro, sometido a una administración diferente, a más tardar, en el lugar de partida del territorio de reclutamiento.

3. La autoridad competente podrá conceder al funcionario público, a quien deben ser presentados los trabajadores reclutados, conforme al artículo 16 el derecho a autorizar la partida de estos trabajadores antes de cualquier examen médico, a condición de que compruebe:

- a) Que era y sigue siendo imposible someter a estos trabajadores a un reconocimiento médico en el lugar del reclutamiento o en el punto de partida;
- b) Que cada trabajador es físicamente apto para viajar y desempeñar su futuro empleo;
- c) Que cada trabajador se someterá a un reconocimiento médico a su llegada al lugar del trabajo o en un plazo lo más corto posible después de su llegada.

4. La autoridad competente podrá prescribir que los trabajadores reclutados sean sometidos a un reconocimiento médico antes de su partida y a un segundo examen después de su llegada al lugar del empleo, especialmente cuando el viaje de los trabajadores reclutados sea de tal duración o se haga en tales condiciones que pueda resentirse su salud.

5. La autoridad competente debe cerciorarse que se han adoptado todas las medidas necesarias a los fines de la aclimatación y adaptación de los trabajadores reclutados, y de su sometimiento a vacunas preventivas.

Art. 19. — 1. El reclutador o patrono deberá, siempre que sea posible, hacer transportar a los trabajadores reclutados hasta el lugar del trabajo.

2. La autoridad competente deberá adoptar las medidas necesarias, a fin de que:

- Los vehículos o barcos utilizados para el transporte de los trabajadores sean convenientemente aptos para este menester, que ofrezcan buenas condiciones de higiene y suficiente capacidad de transporte;
- Se prevean instalaciones adecuadas cuando los trabajadores deban pasar la noche en viaje;
- Cuando se trate de grandes distancias a recorrer, se adopten todas las medidas necesarias para asegurar a los trabajadores la asistencia médica y un bienestar suficiente.

3. Cuando los trabajadores reclutados deban recorrer grandes distancias a pie para llegar al lugar del trabajo, la autoridad competente debe adoptar las medidas necesarias, a fin de que:

- La duración de las etapas diarias sea compatible con la conservación de la salud y de las fuerzas de los trabajadores;
- Cuando la amplitud del desplazamiento de mano de obra imponga tales medidas, se instalen en lugares adecuados campamentos de descanso o albergues de etapas a lo largo de los caminos principales, y que se mantengan en un estado de limpieza suficiente y permitan prestar la asistencia médica indispensable.

4. Cuando los trabajadores reclutados viajen en grupo para ir al lugar del trabajo y deban recorrer largas distancias, deberán ir acompañados por un guía responsable.

Art. 20. — 1. Los gastos de viaje de los trabajadores reclutados hasta el lugar de su destino, así como todos los gastos ocasionados por la protección del trabajador durante su viaje, deberán incumbir al reclutador o al patrono.

2. El reclutador o el patrono deberán suministrar a los trabajadores reclutados cuanto sea indispensable para su sostenimiento durante el viaje hasta el lugar de su destino y, sobre todo, de acuerdo con las condiciones locales, víveres suficientes y apropiados, agua potable, utensilios de cocina y combustible, ropas y mantas.

3. Este artículo se aplicará a los trabajadores reclutados por trabajadores reclutadores en la medida que considere posible la autoridad competente.

Art. 21. — Todo trabajador reclutado:

- Que se incapacite para el trabajo, ya sea por accidente o por enfermedad durante su viaje hasta el lugar del trabajo;
- Que resulte inapto para el trabajo como consecuencia de un reconocimiento médico;
- Que se encuentre sin colocación, con posterioridad al reclutamiento, por causa ajena a su voluntad;
- Que la autoridad competente compruebe haber sido reclutado por medio de fraude o error, deberá ser repatriado por cuenta del reclutador o del patrono.

Art. 22. — La autoridad competente deberá limitar la cantidad de reclutadores en la medida que considere posible la autoridad competente.

reclutados, a título de anticipo sobre salario, y reglamentar las condiciones en que se hagan estos anticipos.

Art. 23. — Cuando las familias de los trabajadores reclutados hayan sido autorizadas para acompañar a estos últimos en el lugar de su destino, la autoridad competente deberá adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su salud y su bienestar durante el viaje.

En particular:

- Los artículos 19 y 20 del presente convenio deberán aplicarse a estas familias;
- En la eventualidad de la repatriación del trabajador, en virtud del artículo 21, la familia del trabajador deberá ser igualmente repatriada;
- En la eventualidad del fallecimiento del trabajador durante su viaje hasta el lugar del trabajo, su familia debe ser repatriada.

Art. 24. — 1. Antes de autorizar el reclutamiento de trabajadores destinados a ser empleados en un territorio sometido a otra administración, la autoridad competente del territorio de reclutamiento deberá cerciorarse de que han adoptado las medidas necesarias para realizar, conforme a las disposiciones del presente convenio, la protección de los trabajadores reclutados desde el momento en que estos trabajadores dejen de encontrarse bajo la jurisdicción de esta autoridad.

2. Cuando se recluten trabajadores en un territorio para ser empleados en otro, sometido a otra administración, y las autoridades competentes de ambos territorios estimen que las circunstancias y la importancia de este reclutamiento hacen necesarias tales medidas, estas autoridades deberán concertar acuerdos que determinen la medida en que podrá autorizarse este reclutamiento e instituir entre ellas una cooperación para asegurar el control de la ejecución de las condiciones de reclutamiento y empleo.

3. El reclutamiento de los trabajadores en un territorio para emplearlos en otro sometido a diferente administración sólo podrá efectuarse en virtud de un permiso concedido por la autoridad competente del territorio de reclutamiento. Sin embargo, dicha autoridad podrá admitir como equivalente a un permiso por ella concedido, otro otorgado por la autoridad competente del territorio del empleo.

4. Cuando la autoridad competente del territorio de reclutamiento estime que las circunstancias y la importancia de dicho reclutamiento en su territorio, de trabajadores destinados a ser empleados en otro territorio sometido a distinta administración, hagan necesarias tales medidas, la mencionada autoridad deberá estipular que este reclutamiento no puede ser emprendido sino por las organizaciones reconocidas por ella.

Art. 25. — 1. Por lo que se refiere a los territorios mencionados en el artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, todo miembro de la organización que ratifique el presente convenio deberá acompañar su ratificación de una declaración que indique:

- Los territorios en los cuales se comprometa a aplicar sin modificaciones las disposiciones del convenio;

- Los territorios en los cuales se comprometa a aplicar las disposiciones del convenio con modificaciones y en qué consisten estas modificaciones;
- Los territorios en los cuales sea inaplicable el convenio, y, en este caso, las razones por las cuales es inaplicable;
- Los territorios para los cuales se reserva su decisión.

2. Los compromisos mencionados en los subincisos a) y b) del primer inciso de este artículo se considerarán como parte integrante de la ratificación y surtirán idénticos efectos.

3. Todo miembro podrá renunciar, mediante nueva declaración, a todas o parte de las reservas contenidas en su declaración anterior en virtud de los preceptos establecidos en el respectivo artículo.

Art. 26. — Las ratificaciones oficiales del presente convenio serán comunicadas al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registradas por él.

Art. 27. — 1. El presente convenio sólo obligará a los miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuya ratificación haya sido registrada por el secretario general.

2. El presente convenio entrará en vigor doce meses después de haber sido registradas por el secretario general las ratificaciones de dos miembros.

3. En lo sucesivo, este convenio entrará en vigor para cada miembro doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Art. 28. — Tan pronto como hayan sido registradas las ratificaciones de dos miembros de la Organización Internacional del Trabajo, el secretario general de la Sociedad de las Naciones lo notificará a todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo les notificará el registro de las ratificaciones que le comuniquen ulteriormente los demás miembros de la organización.

Art. 29. — 1. Todo miembro que haya ratificado el presente convenio puede denunciarlo al cumplirse un plazo de diez años, a contar de la fecha inicial de la entrada en vigor del convenio, mediante declaración dirigida al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registrada por él. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de haber sido registrada.

2. — Todo miembro que haya ratificado el presente convenio y que, en el plazo de un año después de expirar el período de diez años mencionado en el inciso precedente, no haga uso de la facultad de denuncia prevista por el presente artículo, quedará obligado por un nuevo período de diez años, pudiendo, en lo sucesivo, denunciar el presente convenio al expirar cada período de diez años, en las condiciones previstas en el presente artículo.

Art. 30. — A la expiración de cada período de diez años, a contar de la entrada en vigor del presente convenio, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la Conferencia General una memoria sobre la aplicación del presente convenio y decidirá si procede incluir en el orden del día de la conferencia la cuestión de la revisión total o parcial del mismo.

Art. 31. — 1. En el caso de que la conferencia adopte un nuevo convenio que constituya una revisión total o parcial del presente convenio y a no ser que el nuevo convenio disponga otra cosa:

- La ratificación por un miembro del nuevo convenio revisado implica de pleno derecho, no obstante lo dispuesto en el artículo 29, la denuncia inmediata del presente convenio, siempre y cuando el nuevo convenio revisado haya entrado en vigor;
- A partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo convenio revisado, el presente convenio no podrá ser ya objeto de ratificación por los miembros.

2. El presente convenio continuará en vigor, en todo caso, en su forma y contenido, para los miembros que lo hayan ratificado y que no ratifiquen el convenio revisado.

Art. 32. — Los textos francés e inglés del presente convenio son igualmente auténticos.

Proyecto de Convenio (Nº 51) relativo a la reducción de las horas de trabajo en las obras públicas

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo;

Reunida en Ginebra el 4 de junio de 1936, en su vigésima sesión;

Considerando que la cuestión de la reducción de la duración del trabajo en las obras públicas emprendidas por los gobiernos o subvencionadas por ellos constituye la tercera cuestión del orden del día de la reunión;

Confirmando el principio consagrado en el convenio de las cuarenta horas, 1935, que comprende también el mantenimiento del nivel de vida de los obreros;

Considerando que es deseable que este principio se aplique por acuerdo internacional a las obras públicas; adopta el veintitrés de junio de mil novecientos treinta y seis el proyecto de convenio siguiente que se denominará convenio de reducción de la duración del trabajo (obras públicas), 1396:

Artículo 1º — 1. El presente convenio se aplicará a las personas ocupadas directamente en los trabajos de construcción ingeniería civil, costeados o subvencionados por los gobiernos centrales.

2. A los fines del presente convenio, el alcance exacto de las expresiones «construcción e ingeniería civil», «costeados», y «subvencionados» será definido por la autoridad competente, previa consulta a las organizaciones patronales y obreras interesadas, cuando existan.

3. La autoridad competente podrá, previa consulta a las organizaciones patronales y obreras interesadas, cuando existan, exceptuar de la aplicación del presente convenio:

- A las personas empleadas en empresas que sólo ocupen a los miembros de la familia del patrono;
- A las personas ocupadas en puestos de dirección y que no efectúen normalmente ningún trabajo manual.

Art. 2º — 1. La duración del trabajo de las personas a que se aplica el presente convenio no deberá exceder de un promedio de cuarenta horas por semana.

2. La duración semanal del trabajo podrá extenderse hasta un promedio de cuarenta y dos horas para las personas que trabajan por equipos sucesivos en labores cuyo funcionamiento continuo tenga que estar asegurado necesariamente, por el mismo carácter del trabajo, sin interrupción alguna durante el día, la noche y la semana.

3. La autoridad competente determinará, previa consulta a las organizaciones patronales y obreras interesadas, cuando existan, a qué trabajos se ha de aplicar el inciso 2 del presente artículo.

4. Cuando la duración del trabajo se calcule con arreglo a un promedio, la autoridad competente deberá fijar, previa consulta a las organizaciones patronales y obreras interesadas, cuando existan, el número de semanas sobre el cual puede ser calculado este promedio, así como el número máximo de horas de trabajo por semana.

5. A los fines del presente convenio, la expresión **duración del trabajo**, significa el tiempo durante el cual el personal está a la disposición del patrono, y no comprende aquellos descansos durante los cuales no está a su disposición.

Art. 3º — 1. La autoridad competente puede autorizar, por medio de reglamentos dictados previa consulta a las organizaciones patronales y obreras interesadas, cuando existan, que se exceda el límite de horas de trabajo fijado en el artículo precedente en los casos:

- De personas empleadas en trabajos preparatorios o complementarios que hayan de ser ejecutados necesariamente fuera de los límites señalados al trabajo general de la empresa, de la rama de empresa o equipo;
- De personas empleadas en ocupaciones que, por su naturaleza, impliquen largos periodos de inactividad durante los cuales dichas personas no tienen que prestar una atención sostenida ni desarrollar una actividad material, o no permanecen en sus puestos más que para atender llamadas eventuales.

2. Los reglamentos previstos en el inciso 1) deberán determinar el número máximo de horas de trabajo que se pueden efectuar en virtud del presente artículo.

3. La autoridad competente podrá autorizar que se excedan, determinando en qué medida, los límites de duración del trabajo prescritos en el artículo precedente, cuando ello sea necesario para evitar un entorpecimiento grave en la ejecución de un trabajo determinado, a causa de circunstancias excepcionales, tales como dificultades de acceso al lugar del trabajo o imposibilidad de emplear una mano de obra calificada y suficiente.

Art. 4º — Los límites de las horas de trabajo prescritos en los artículos precedentes podrán ser rebasados, pero únicamente en la medida necesaria para evitar un entorpecimiento grave en la marcha normal de la empresa:

- En caso de accidente, ocurrido o inminente, o en caso de tener que efectuar trabajos de urgencia en las máquinas o el utillaje, o en caso de fuerza mayor;
- Para hacer frente a la ausencia imprevista de una o varias personas de un equipo.

Art. 5º — 1. Los límites de las horas de trabajo fijados en los artículos 2º y 3º, podrán ser ampliados, en caso de que sea necesario prolongar el trabajo de algunas personas para la terminación de una labor cuya interrupción sea técnicamente imposible.

2. La autoridad competente determinará, previa consulta a las organizaciones patronales y obreras interesadas, cuando existan, a qué trabajos se ha de aplicar el inciso 2 del presente artículo.

aplicar el presente artículo, y el número máximo de horas que podrá trabajar el personal en cuestión sobre los límites prescritos.

3. Las horas extraordinarias efectuadas en virtud de las disposiciones del presente artículo deberán ser remuneradas con un aumento del 25 %, por lo menos, del salario normal.

Art. 6º — 1. La autoridad competente podrá conceder un contingente de horas extraordinarias para hacer frente a los aumentos de trabajo excepcionales. Este contingente no se podrá conceder más que en virtud de reglamentos dictados previa consulta a las organizaciones patronales y obreras interesadas, cuando existan sobre la necesidad de esas horas extraordinarias y su número. El máximo de horas así concedidas no deberá dar lugar a que se emplee una persona durante más de cien horas extraordinarias por año.

3. Las horas extraordinarias efectuadas en virtud de las disposiciones del presente artículo, habrán de ser remuneradas con un aumento del 25 %, por lo menos, del salario normal.

Art. 7º — Con el fin de facilitar la aplicación efectiva de las disposiciones del presente convenio, cada patrono deberá:

- Dar a conocer, por medio de carteles colocados de manera visible en el establecimiento o en cualquier otro lugar conveniente, o en otra forma aprobada por la autoridad competente:
 - Las horas en que comienza y termina el trabajo;
 - Cuando el trabajo se efectúa por equipos, las horas en que comienza y termina el turno de cada equipo;
 - Cuando se aplique un sistema de rotación, una descripción de este sistema, que comprenda el horario de trabajo para cada persona o grupo de personas;
 - Las disposiciones tomadas en los casos en que la duración media semanal de trabajo se calcula sobre varias semanas;
 - Los descansos, en la medida en que no se consideren como parte integrante de las horas de trabajo.

- Inscribir en un registro, según modelo aprobado por la autoridad competente, todas las prolongaciones de la duración de trabajo que establecen los artículos 3º, inciso 3; 5º y 6º, así como el importe de su remuneración.

Art. 8º — Los informes anuales presentados por los miembros sobre la aplicación del presente convenio han de comprender informaciones completas, en lo que se refiere principalmente a:

- Las definiciones adoptadas en virtud del artículo 1º, inciso 2;
- Los trabajos que la autoridad competente ha considerado, por su carácter, como de funcionamiento necesariamente continuo, a los fines del artículo 2º, inciso 2;
- Las determinaciones tomadas de conformidad con el artículo 2º inciso 4;
- Las decisiones tomadas de conformidad con las disposiciones del artículo 3º;
- Las horas extraordinarias autorizadas de conformidad con el artículo 6º.

Art. 9º — El presente convenio no podrá afectar en absoluto a ninguna ley, fallo, costumbre ni pacto, entre patronos y trabajadores que asegure condiciones más favorables que las prescriptas en este convenio.

Art. 10. — Las ratificaciones oficiales del presente convenio serán comunicadas al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registradas por él.

Art. 11. — 1. El presente convenio sólo obligará a los miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuya ratificación haya sido registrada por el secretario general.

2. El presente convenio entrará en vigor doce meses después de haber sido registradas por el secretario general las ratificaciones de dos miembros.

3. En lo sucesivo, este convenio entrará en vigor para cada miembro doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Art. 12. — Tan pronto como hayan sido registradas en la secretaría las ratificaciones de dos miembros de la Organización Internacional del Trabajo, el secretario general de la Sociedad de las Naciones lo notificará a todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo les notificará el registro de las ratificaciones que le comuniquen ulteriormente los demás miembros de la organización.

Art. 13. — 1. Todo miembro que haya ratificado el presente convenio puede denunciarlo al cumplirse un plazo de diez años, a contar de la fecha inicial de la entrada en vigor del convenio, mediante declaración dirigida al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registrada por él. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de haber sido registrada.

2. Todo miembro que haya ratificado el presente convenio y que, en el plazo de un año después de expirar el período de diez años mencionado en el inciso precedente, no haga uso de la facultad de denuncia prevista por el presente artículo, quedará obligado por un nuevo período de diez años, pudiendo, en lo sucesivo, denunciar el presente convenio al expirar cada período de diez años, en las condiciones previstas en el presente artículo.

Art. 14. — A la expiración de cada período de diez años, a contar de la entrada en vigor del presente convenio, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la Conferencia General una memoria sobre la aplicación del presente convenio y decidirá si procede incluir en el orden del día de la conferencia la revisión total o parcial del mismo.

Art. 15. — 1. En el caso de que la conferencia adopte un nuevo convenio que constituya una revisión total o parcial del presente convenio y a no ser que el nuevo convenio disponga otra cosa:

- La ratificación por un miembro del nuevo convenio revisado, implica de pleno derecho, no obstante lo dispuesto en el artículo 13, la denuncia inmediata del presente convenio, siempre y cuando el nuevo convenio revisado haya entrado en vigor;
- A partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo convenio revisado, el presente convenio no podrá ser ya objeto de ratificación por los miembros.

2. El presente convenio, continuará en vigor en todo caso en su forma y contenido, para los miembros que lo hayan ratificado y que no ratifiquen el convenio revisado.

Art. 16. — Los textos francés e inglés del presente convenio son igualmente auténticos.

Proyecto de convenio (Nº 52) relativo a las vacaciones anuales pagadas

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 de junio de 1936 en su vigésima reunión,

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a las vacaciones anuales pagadas, cuestión que constituye el segundo punto del orden del día de la reunión,

Después de haber acordado que dichas proposiciones revistan la forma de un proyecto de convenio internacional,

Adopta, con fecha veinticuatro de junio de mil novecientos treinta y seis, el siguiente proyecto de convenio que será denominado convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936:

Artículo 1º — 1. El presente convenio se aplicará a las personas empleadas en las empresas y establecimientos siguientes, ya sean públicos o privados:

- Establecimientos en los cuales se manufacturen modifiquen, limpien, reparen, adornen, terminen, preparen para la venta, destruyan o deshagan productos, o en los cuales las materias sufran una transformación, comprendiendo las empresas de construcción de buques, así como las empresas de producción, transformación y transmisión de electricidad y de fuerza motriz en general;
- Empresas que se dediquen exclusiva o principalmente, a trabajos de construcción, reconstrucción, conservación, reparación, modificación o demolición de las obras siguientes: construcciones y edificios, ferrocarriles, tranvías, aeropuertos, puertos, docks, muelles, obras de protección contra la acción de los ríos y del mar, canales, instalaciones para la navegación interior, marítima o aérea, carreteras, túneles, puentes, viaductos, alcantarillas colectoras, alcantarillas ordinarias, pozos, instalaciones para el riego y drenajes, instalaciones de telecomunicación, instalaciones para la producción o distribución de fuerza eléctrica y de gas, oleoductos, instalaciones para la distribución de agua, y empresas dedicadas a otros trabajos similares y a las obras de preparación o de cimentación que preceden a los trabajos antes designados;
- Empresas de transportes de viajeros o mercancías por carretera o vía férrea, por vía de agua interior o aérea, incluso el movimiento de las mercancías en los docks, muelles, malecones, almacenes y aeropuertos;
- Minas, canteras e industrias extractivas de toda clase;
- Establecimientos comerciales, incluidos correos y servicios de telecomunicación;
- Establecimientos y administraciones cuyo funcionamiento consiste esencialmente en trabajos de oficina;
- Empresas periodísticas;

- h) Establecimientos que tengan por objeto el tratamiento o la hospitalización de los enfermos, lisados, indigentes o alienados;
- i) Hoteles, restaurantes, pensiones, círculos, cafés y otros establecimientos donde se sirvan artículos para ser consumidos en el propio local;
- j) Empresas de espectáculos y diversiones;
- k) Establecimientos que revistan un carácter a la vez comercial e industrial y que no correspondan por completo a una de las categorías precedentes.

2. La autoridad competente de cada país determinará, previa consulta a las principales organizaciones patronales y obreras interesadas, cuando existan, la línea de demarcación entre las empresas y establecimientos arriba mencionados y los que no están incluidos en el presente convenio.

3. La autoridad competente de cada país podrá eximir de la aplicación del presente convenio a:

- a) Las personas empleadas en las empresas o establecimientos en que solamente estén ocupados los miembros de la familia del patrono;
- b) Las personas empleadas en las administraciones públicas, cuyas condiciones de empleo les concedan derecho a un permiso anual con sueldo, de una duración por lo menos igual a la prevista por el presente convenio.

Art. 2º — 1. Toda persona a la que se aplique el presente convenio tendrá derecho, después de un año de servicio continuo, a una vacación anual pagada de seis días laborables, por lo menos.

2. Las personas menores de dieciséis años, incluidos los aprendices, tendrán derecho, después de un año de servicio continuo, a una vacación anual pagada de doce días laborables, por lo menos.

3. No se computan a los efectos de la vacación anual pagada:

- a) Los días festivos oficiales o impuestos por la costumbre;
- b) Las interrupciones de trabajo debidas a enfermedad.

4. En cada país, la legislación nacional podrá autorizar, a título excepcional, el fraccionamiento de la vacación anual; pero únicamente en cuanto a la parte de ésta que exceda de la duración mínima prevista por el presente artículo.

5. La duración de la vacación anual pagada deberá aumentar progresivamente con la duración del servicio, según modalidades que determinará la legislación nacional.

Art. 3º — Toda persona a la que se concedan vacaciones, en virtud del artículo 2º del presente convenio, deberá percibir durante las mismas:

- a) Su remuneración habitual calculada según condiciones que deberán ser fijadas por la legislación nacional, aumentada, en su caso, con el equivalente de su remuneración en especie;
- b) Una remuneración fijada por convenio colectivo.

Art. 4º — Todo acuerdo que implique el abandono del derecho a vacaciones anuales pagadas o la renuncia de las mismas será considerado como nulo.

Congreso de la Nación Argentina
Información Parlamentaria

Art. 5º — La legislación nacional podrá disponer que toda persona que realice un trabajo retribuido durante sus vacaciones pagadas, sea privada de la remuneración que le corresponda durante dichas vacaciones.

Art. 6º — Toda persona despedida por causa imputable al patrono, antes de haber comenzado la vacación que le corresponde, deberá recibir, por cada día de vacación a que tiene derecho en virtud del presente convenio, el total de la remuneración prevista en el artículo 3º.

Art. 7º — A fin de facilitar la aplicación efectiva del presente convenio, cada patrono deberá inscribir en un registro, según modelo aprobado por la autoridad competente:

- a) La fecha en que entran a prestar servicio las personas empleadas por él y la duración de la vacación anual pagada, a que cada una tiene derecho;
- b) Las fechas en que cada una tomará su vacación anual pagada;
- c) La remuneración recibida por cada persona por la duración de su vacación anual pagada.

Art. 8º — Todo miembro que ratifique el presente convenio deberá implantar un sistema de sanciones que asegure su aplicación.

Art. 9º — Ninguna de las disposiciones del presente convenio podrá afectar en modo alguno a ninguna ley, fallo, costumbre o pacto entre patronos y trabajadores que asegure condiciones más favorables que las previstas en el presente convenio.

Art. 10. — Las ratificaciones oficiales del presente convenio serán comunicadas al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registradas por él.

Art. 11. — 1. El presente convenio solo obligará a los miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuya ratificación haya sido registrada por el secretario general.

2. El presente convenio entrará en vigor doce meses después de haber sido registradas por el secretario general las ratificaciones de dos miembros.

3. En lo sucesivo, este convenio entrará en vigor para cada miembro doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Art. 12. — Tan pronto como hayan sido registradas en la Secretaría las ratificaciones de dos miembros de la Organización Internacional del Trabajo el secretario general de la Sociedad de las Naciones lo notificará a todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo les notificará el registro de las ratificaciones que le comuniquen ulteriormente cualesquiera otros miembros de la organización.

Art. 13. — 1. Todo miembro que haya ratificado el presente convenio puede denunciarlo al cumplirse un plazo de diez años, a contar de la fecha inicial de la entrada en vigor del convenio, mediante declaración dirigida al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registrada por él. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de haber sido registrada.

2. Todo miembro que haya ratificado el presente convenio y que en el plazo de un año después de expirar el período de diez años mencionado en el inciso precedente no haga uso de la facultad de denuncia prevista por el presente artículo, quedará obligado por un nuevo período de diez años, pudiendo, en lo sucesivo, denunciar el presente convenio al

expirar cada período, de diez años, en las condiciones previstas en el presente artículo.

Art. 14. — A la expiración de cada período de diez años, a contar de la entrada en vigor del presente convenio, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo deberá presentar a la Conferencia General una memoria sobre la aplicación del presente convenio y decidirá si procede incluir en el orden del día de la conferencia la cuestión de la revisión total o parcial del mismo.

Art. 15. — 1. En el caso de que la conferencia adopte un nuevo convenio que constituya una revisión total o parcial del presente convenio y a no ser que el nuevo convenio disponga otra cosa:

- a) La ratificación por un miembro del nuevo convenio revisado implica de pleno derecho, no obstante lo dispuesto en el artículo 13, la denuncia inmediata del presente convenio, siempre y cuando el nuevo convenio revisado haya entrado en vigor;
- b) A partir de la fecha de entrada en vigor del nuevo convenio revisado, el presente convenio no podrá ser ya objeto de ratificación por los miembros.

2. El presente convenio continuará en vigor en todo caso en su forma y contenido para los miembros que lo hayan ratificado y que no ratifiquen el convenio revisado.

Art. 16. — Los textos francés e inglés del presente convenio son igualmente auténticos.

INFORME DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DEL TRABAJO

Número 17. — Año 1925. — Proyecto de convención relativo a la reparación de los accidentes del trabajo

El desarrollo de la legislación moderna sobre reparación de los accidentes del trabajo está penetrado por el concepto de que su valor de protección se mide, ante todo, por la latitud del campo de aplicación. Por amplios que sean los riesgos cubiertos, las tasas de indemnización que atribuye y los sistemas de garantía del pago instituidos, la legislación no puede considerarse satisfactoria para los trabajadores si sus beneficios quedan limitados a una pequeña parte de aquellos que están expuestos a ser víctimas de accidentes. (1)

En la extensión del campo de aplicación de la ley reparatoria a la generalidad de las personas vinculadas por un contrato de trabajo, con ciertas excepciones de menor importancia, está el objeto esencial de la Convención de 1925. Originariamente, la reparación fué impuesta por la ley a favor de los trabajadores de ciertas categorías de empresas que se consideró que ofrecían peligros especiales. Pero el sistema tiende a generalizarse, ya por sucesivas adiciones a la lista de industrias o actividades comprendidas que figura en las leyes del tipo de la que rige en nuestro país, ya por el abandono de toda enunciación, cuyos inconvenientes conocidos no desaparecen con la amplitud, para adoptar el criterio de que, donde existe un contrato de trabajo, ha de existir responsabilidad del empleador basada en el principio del riesgo profesional. El fundamento jurídico de la

(1) Véase Bureau International du Travail, «La réparation des accidents du travail», Gèneve, 1925, p. 11.

obligación de reparar las consecuencias del accidente imputable al trabajo debe ser el mismo, sea la empresa grande o pequeña, peligrosa o relativamente exenta de riesgos específicos. El riesgo profesional no es el riesgo específico, es el conjunto de riesgos inherentes al trabajo, que son la consecuencia del desarrollo normal de la actividad humana y que debe soportar el empleador para quien son los beneficios de la empresa.

La tendencia a una mayor amplitud del campo de aplicación de la ley nacional de accidentes del trabajo es visible en las disposiciones reglamentarias adoptadas por el Poder Ejecutivo en virtud de la facultad que posee según el artículo 1º de la misma, en la reciente aprobación por el Congreso nacional y ratificación de la Convención de 1921 sobre indemnización de los accidentes del trabajo en la agricultura, y en diversos proyectos de reforma de la ley 9.688 sometidos a consideración de las Cámaras legislativas. La aprobación y ratificación de la Convención número 17 serían un acto concordante con la línea de justicia y de lógico desarrollo del principio en que se asienta la ley nacional, y en este sentido son plenamente aconsejables.

Por otra parte, la convención consagra en su artículo 5º una regla importantísima, la del pago en forma de renta de las indemnizaciones por defunción o incapacidad permanente, que obligará a la revisión del sistema indemnizatorio de la ley 9.688, por tantos conceptos defectuosos e insuficiente. Según nuestra ley, la indemnización, excepto la que corresponde a la incapacidad temporal, es siempre un capital equivalente a mil veces el salario de base, o una fracción de éste. Luego, el artículo 9º dispone el depósito de la indemnización en una caja pública que la invierte en títulos de crédito de la Nación y entrega mensualmente a los interesados las rentas que a ellos correspondan. Pero aun cuando se haya dispuesto, por el decreto de junio 25 de 1918, que en cada caso el importe de la indemnización ingresada se tome como «valor actual, de una renta inmediata temporaria por diez años, con base de una tasa de interés igual a la que produzcan los títulos, ni el sistema de la ley ni el de este decreto permiten incluir a la ley argentina entre las que adoptan las indemnización-renta. Las cuotas mensuales que en diez años agotan el capital correspondiente a la indemnización, y los intereses que ha producido, nada tienen de común con la indemnización en forma de renta; los pagos periódicos, en la técnica de estas leyes, se llaman «rentas, cuando tienen carácter permanente, y, cuando son temporarios, reciben el nombre de «alocaciones». (1) La indemnización que se paga en forma de renta se fija, por lo común, en un tanto por ciento del salario de base anual, siendo la proporción más frecuente en la legislación comparada la del 60 al 66 2/3 %. El empleador responsable, o la institución aseguradora o caja de pensiones que se subroga en sus obligaciones, debe pagar al accidentado o a sus derechohabientes la renta correspondiente, y, si se contempla la conversión de esa renta en una suma global, es cuestión de capitalizarla determinando su valor actual según el período probable en que habría de servirse y un tipo dado de interés. Lo que importa es que el incapacitado permanente reciba una renta vitalicia que compense la disminución de los ingresos que podrá procurarle su trabajo, que el

(1) Véase B. I. T. «La réparation des accidents du travail», Gèneve, 1925, p. 240.

cónyuge del obrero muerto a raíz del accidente o sus ascendientes sin recursos reciban también esa renta, que sus hijos menores sean socorridos hasta que estén en condiciones de ganarse la vida. Será, pues, imprescindible, si la convención se ratifica, sancionar un régimen de indemnizaciones en caso de muerte o incapacidad permanente que se asemeje al que es usual en el continente europeo, donde la obligación patronal o del seguro no tiene como límite una suma global, sino un máximo de pensión que puede o no, según los casos, convertirse en el valor capitalizado correspondiente. Sin duda, las consecuencias del cambio se reflejarían en la organización legal de otros aspectos de la ley como el seguro y el sistema de garantías, y aquí como en lo demás se experimentarán beneficios apreciables derivados de la ratificación.

Número 18. — Año 1925. — Proyecto de convención relativo a la reparación de las enfermedades profesionales.

Ha sido revisado en el año 1934, por lo que no corresponde su consideración sino la de la convención número 42.

Número 19. — Año 1925. — Proyecto de convención relativo a la igualdad de trato a los trabajadores extranjeros y nacionales, en materia de accidentes del trabajo.

Su ratificación implicaría la obligación de extender a los nacionales de cualquier otro país que lo haya ratificado, que fueran víctimas de accidentes del trabajo en territorio argentino, o a sus derechohabientes, los beneficios de la legislación sobre reparación de los accidentes del trabajo, sin ninguna condición de residencia. Sin embargo, en cuanto a los pagos que en virtud de ese principio hubieran de hacerse al exterior, se prevé la posibilidad de arreglos particulares entre los países interesados, lo que supone reservar la facultad de restringirlos o condicionarlos.

La convención número 19 ha sido ya ratificada por Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Chile, China, Colombia, Cuba, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, India, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Méjico, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia, Suiza, Unión Sud-africana, Uruguay y Yugoslavia. Su ratificación por la Argentina no puede ofrecer dificultades y sólo sería una expresión ampliatoria de la política de reciprocidad ya tradicional y concretada en más de una decena de tratados de los previstos por el artículo 14 de la ley 9.688, suscritos con países que también la han ratificado.

Número 20. — Año 1925. — Proyecto de convención relativo al trabajo nocturno en las panaderías.

Su ratificación, acompañada de una posible reforma de la ley 11.338, que ya ha establecido la prohibición del trabajo nocturno en un texto más rígido que el de la propia convención, podría representar una mejora técnica de la legislación, pero no es oportuna mientras no se perciba la posibilidad de derogar, sin volver a la agitación y estado de abierta rebeldía contra la ley que imperaron desde 1926 a 1933, las excepciones a la prohibición del trabajo nocturno contenidas en el decreto 34.445, de enero 13 de 1934, dictado previo acuerdo de las organiza-

ciones representativas de obreros e industriales panaderos.

En efecto, el proyecto de convención señala un periodo de veda de siete horas consecutivas, por lo menos, que comprenderá el intervalo que media entre las once de la noche y las cinco de la mañana. Pero el artículo del decreto citado permite que los trabajos de elaboración y fabricación del pan se efectúen hasta las doce de la noche, y también se autoriza el empleo de un personal reducido desde las doce de la noche hasta las cinco de la mañana, para ser empleado exclusivamente en las tareas de cocimiento y en la preparación de levaduras, excepción que no cabe entre las previstas por el apartado a) del artículo 3º del proyecto de convención.

La experiencia tenida con la ley 11.338 prueba que la prohibición del trabajo nocturno en las panaderías es un objetivo difícil de alcanzar en forma absoluta, por razones técnicas y de competencia industrial, para no mencionar los hábitos de los consumidores. El régimen de excepciones del decreto del 15 de enero de 1934 es una solución que el Poder Ejecutivo calificó de provisional en ese mismo decreto, y podrá ser mañana substituído por otro más amplio o más restringido que esté respaldado, como aquél, por el acuerdo de los patronos y obreros interesados. Como no es posible prever en qué sentido habrá eventualmente de manifestarse todo nuevo acuerdo, la ratificación de la convención puede poner en jaque la normalización del trabajo de los obreros panaderos, por ahora ajustada a una duración y a un sistema de descanso semanal controlables sin dificultad, gracias a las excepciones de la ley 11.338, en virtud de las cuales se les asigna horarios de trabajo que, como no sucedía antes, se cumplen. Por lo pronto destruiría el régimen actual de aplicación de dicha ley y el resultado arriba señalado. De ahí que no se considere aconsejable la ratificación del proyecto número 20.

Número 21. — Año 1926. — Proyecto de convención relativo a la simplificación de la inspección de los emigrantes a bordo de los barcos.

La ratificación de esta convención no presenta ningún inconveniente. Su texto está por completo de acuerdo con los puntos de vista expresados por el gobierno argentino en la respuesta que dió al cuestionario previo de la Oficina Internacional del Trabajo (ver «Rapport sur les simplifications a apporter a l'inspection des émigrants a bord», Genève, Bureau International du Travail, 1926).

La inspección sobre el trato de los emigrantes a bordo preocupa principalmente a los países de emigración, pero también los de inmigración tienen interés en que aquéllos les lleguen en buenas condiciones de salud y de higiene física y mental. De ahí las disposiciones de los artículos 18 a 34 de la ley 817, y la facultad dada por el artículo 3º inciso 3 de la misma al Departamento General de Inmigración, de inspeccionar los buques conductores de inmigrantes y exigir el cumplimiento de las leyes en los puntos en que se refieran al alojamiento, alimentación, comodidad, régimen higiénico y seguridad de los inmigrantes. La convención tiende a evitar que se instalen a bordo, durante el viaje, inspectores oficiales de más de un país, y es indudable la conveniencia de un arreglo de esta naturaleza. Por regla general, el inspector sería designado por el gobierno del país cuyo pabellón lleve el barco.

Número 22. — Año 1926. — Proyecto de convención relativo al contrato de ajuste de los marinos.

Sus disposiciones sólo son aplicables a los buques matriculados en el país que ratifica la convención, que efectúen una navegación marítima; no está amparado por las normas convencionales el ajuste de los tripulantes de los buques afectados a la navegación fluvial, al cabotaje nacional, navios de guerra o del Estado que no tengan aplicación comercial, etcétera (artículo 1º).

Nuestro país, que fuera de algunos buques de cabotaje mayor que llegan a los puertos del Brasil o del Sur de Chile, y de uno o dos transportes fletados ocasionalmente para la navegación de ultramar, no posee una flota mercante marítima a la que pudiera interesar el régimen de la Convención de 1926, debe por ello contemplar la ratificación de ésta, no con relación al alcance de las obligaciones limitadas que tal acto le crearía, sino en cuanto sus normas constituyan un modelo de adopción aconsejable para ser aplicado también a la navegación fluvial y de cabotaje nacional. La República Argentina, en su legislación de fondo sobre el derecho marítimo, incorporada como libro III del Código de Comercio, ha seguido el sistema italiano de no distinguir entre navegación marítima, de cabotaje o fluvial, salvo la excepción de las embarcaciones mínimas, y si no existe un motivo fundamental para variar de régimen, toda ampliación o modificación de las reglas del código sobre el contrato de ajuste debería tener carácter general. Lo mismo puede decirse de las leyes y reglamentos administrativos sobre la materia. Como advirtió el gobierno francés en su respuesta al cuestionario preparatorio de la Convención de 1926, la diferenciación es «irracional en su principio, pues siendo las condiciones de vida de los marinos, en la sociedad de a bordo, absolutamente idénticas cuando el tripulante compromete sus servicios para la navegación de cabos afuera o para la navegación de cabotaje, para la navegación de tráfico internacional o de tráfico nacional, es lógico que el contrato celebrado entre los marinos y el armador sujeta a las partes a los mismos derechos y a los mismos deberes, y les confiera, a unos y a otros, idénticas garantías». (1).

La Convención de 1926 contiene muy pocas disposiciones obligatorias que no estén ya incorporadas a la legislación y reglamentación argentinas sobre ajuste de tripulantes de buques de la matrícula nacional, sea cual fuere la navegación que éstos efectúan. La firma del contrato y las garantías del consentimiento a que se refiere el artículo 3º están establecidas por el juego conjunto de los artículos 984, 988 y 926 del Código de Comercio, y de los artículos 6º, 7º y 8º del reglamento sobre roles, despachos y entradas de embarcaciones, aprobado por superior decreto del 31 de marzo de 1931. El documento que debe recibir cada tripulante, conteniendo la mención de sus servicios a bordo del buque (artículo 5º), es la «libreta de embarco» prevista por los artículos 23 y 33 del reglamento de registro del personal de la marina mercante nacional del 12 de septiembre de 1927. Las especificaciones que debe contener el contrato (artículo 6º),

(1) Véase Bureau International du Travail, rapport sur la codification internationale des règles relatives au contrat d'engagement des marins, Genève, 1926, página 21.

salvo las que llevan los números 4º, 10 c) y 11, que es facultativo aceptar o no por cada legislación nacional, y los números 7º, 8º y 10 a) y b), que podrían establecerse sin mayor dificultad al determinar la forma de llevar el rol de la tripulación, son las que prevén los artículos 926 del Código de Comercio, y 2º, apartado 4, del ya citado reglamento del 31 de marzo de 1931, para aquel libro, por cuyas anotaciones se prueban las condiciones del empleo, siendo indispensable la firma del mismo para que haya contrato de ajuste propiamente dicho (Código de Comercio, artículos 984 y 988). La exigencia del artículo 7º de la convención queda llenada automáticamente por el sistema de las disposiciones del código que acaban de citarse, y la del artículo 8º por la prescripción del artículo 986 del mismo código. Las causas especiales de rescisión del contrato precisadas en el artículo 10 de la convención están admitidas por los artículos 1.000, 1.001 y 1.014 del Código de Comercio. El despido con justa causa, a que se refiere el artículo 11, está contemplado por el artículo 991 del código, y los artículos 996 y 1.016 de éste determinan las circunstancias en que el marino puede pedir su desembarco, con lo que quedaría cumplida la obligación impuesta por el artículo 12 de la convención. El artículo 14, en cuanto exige que todo desembarco debe ser registrado en el documento a que se refiere el artículo 5º, está acorde con lo dispuesto en el artículo 6º del reglamento sobre roles, despachos, etcétera, y en el artículo 26 del Reglamento del Registro del Personal de la Marina Mercante Nacional.

Otras disposiciones de la convención como la que forma parte de su artículo 3º y establece que el contrato no debe contener ninguna cláusula que sea contraria a la legislación nacional, o a la misma convención, y la del artículo 4º, prohibitiva de las estipulaciones derogativas de las reglas normales de competencia de la jurisdicción, no están expresamente consagradas por la ley argentina, pero constituyen una simple ratificación de la doctrina constantemente aceptada por los tribunales de justicia que sostiene el carácter de orden público de las prescripciones legales que amparan a los trabajadores, y su consiguiente irrenunciabilidad.

Es cierto que la convención, en sus artículos 6º y 9º, trata del contrato de ajuste hecho por tiempo indeterminado, forma del mismo que la ley argentina no conoce (Código de Comercio, artículo 985), y del plazo de preaviso para su rescisión, que debería ser por lo menos de veinticuatro horas. Sin embargo, deja entera libertad al legislador nacional para admitir o no el contrato por tiempo indeterminado (artículo 6º, primer párrafo). También el apartado 11 del artículo 6º se refiere a los permisos pagados anuales, pero la ratificación de la convención no implica la necesidad de establecer tal institución en la ley nacional.

En realidad, las únicas modificaciones que debería forzosamente sufrir el derecho interno aplicable al contrato de ajuste, a consecuencia de una posible ratificación de la convención de que tratamos, son las siguientes:

- a) Incluir entre las especificaciones que debe contener el rol o matrícula las previstas en el artículo 6º de la convención que no figuran en el artículo 926 del Código de Comercio, a excepción de las optativas o que no responden

al régimen legal argentino (apartados 4º, 10 c) y 11);

- b) Incorporar al código una disposición destinada a dar efecto al artículo 13 de la convención, tomado del derecho marítimo escandinavo, según el cual el hombre de mar ligado por un contrato de ajuste puede pedir su licenciamiento en determinadas circunstancias de interés capital para él (posibilidad de obtener un empleo de mayor categoría, etcétera), a condición de que asegure su reemplazo por persona competente sin que ello signifique nuevos gastos para el armador. Esta cláusula, si como es lógico, significa algo más que el mero reconocimiento de que el contrato es rescindible por acuerdo de las partes, requeriría un procedimiento especial ante la autoridad marítima para la constatación de la aptitud del sustituto propuesto y la autorización del desembarco cuando el interesado hubiera cumplido la condición legal de presentar una persona competente para reemplazarlo, aunque ésta no fuera aceptada por el armador o su representante;
- c) Prever, en los reglamentos especiales sobre registro de tripulante de la marina mercante, o sobre roles de embarcaciones, etcétera, todas las formalidades y garantías necesarias, fuera de las que ya contienen, para que la autoridad marítima pueda cuidar de que las condiciones del ajuste sean ampliamente conocidas y libremente aceptadas por el tripulante, y de la efectividad de su cumplimiento.

La convención número 22 puede ser ratificada por la República Argentina y sus normas aplicadas no sólo a la navegación marítima sino también a la de cabotaje y a la fluvial.

Número 23. — Año 1926. — Proyecto de convención relativo a la repatriación de los marinos

Como el anterior, es solamente aplicable a los tripulantes de buques que se dediquen regularmente a la navegación marítima, excluido el cabotaje nacional, etcétera.

La esfera limitada de aplicación se justifica aquí por la efectiva diversidad de las situaciones que se presentan con motivo del desembarco de un tripulante, según éste tenga lugar en el país del pabellón del buque o en un puerto extranjero

Son muy pocos, ya se ha dicho, los buques de la matrícula nacional que efectúan el cabotaje marítimo internacional o la navegación de mar, pero las disposiciones de la convención número 23, aun cuando sólo hayan de aplicarse en raras oportunidades, deben ser ratificadas por su espíritu humanitario que refleja preocupaciones relativas a la tutela de la persona del marino, a las que no ha sido ni es ajena la ley nacional.

La repatriación de los tripulantes de los buques mercantes está reglada, en nuestra legislación positiva, por los artículos 993, 998, 999 y 1.012 del Código de Comercio, en cuanto obligación contractual a cargo de capitán, y por algunas disposiciones de la reglamentación consular, en cuanto forma del deber estatal de protección en el exterior.

El artículo 993 del Código de Comercio da derecho a todo oficial u hombre de la tripulación que probare

haber sido despedido sin causa legítima, durante el curso del viaje, a reclamar al capitán del buque el importe de los gastos de retorno. Los artículos 998 y 999 y contemplan el caso especial de la revocación del viaje por hecho del armador, concediendo a los individuos de la tripulación derecho a que se les pague el gasto de transporte desde el puerto del despido hasta el de la matrícula o el de destino, según eligieren. El artículo 1012 establece que los tripulantes enfermos, heridos o mutilados a quienes se haya debido desembarcar, recibirán una indemnización para los gastos de retorno.

Ahora bien; la convención de 1926 no tiene a precisar obligaciones del capitán en lo que se refiere al pago de los gastos de repatriación, sino que, considerando solamente el interés de la gente de mar, establece en substancia que todo tripulante, que no sea desembarcado ya en su propio país, ya en el puerto del ajuste o en puerto próximo a éste, ya en el puerto de salida del buque, tendrá derecho a ser repatriado, y que la autoridad pública del país del pabellón del buque cuidará de esa repatriación, debiendo la legislación nacional adoptar las disposiciones necesarias a este efecto, así como para determinar a quién incumben los gastos, que no podrán quedar a cargo del marino si éste ha sido abandonado por accidente durante el servicio, naufragio, enfermedad imputable o despido por cualquier causa ajena a su voluntad. Es también la legislación nacional la que decide a cuál o cuales de los puertos mencionados por la convención se transportará al marino para hacer efectiva la repatriación, según resulta del informe preparatorio del anteproyecto de convención que figura en la página 543 de las actas de la novena sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo (Ginebra, 1926).

De lo expuesto resulta que la convención impone a los gobiernos de los países ratificantes el deber de asegurar la repatriación de los marinos embarcados en buques de su matrícula, pero no se ocupa de la obligación contractual del capitán relativa al pago de los gastos de retorno, ni de los casos en que corresponda o no satisfacer por este medio el derecho a ser repatriado que se reconoce ampliamente al tripulante. Así, en el supuesto de que ella fuera ratificada por la Argentina y hubiera de establecerse a cargo de quién estarían los gastos de repatriación del marino abandonado por un naufragio, que él no debe soportar (artículo 4º), tanto podría resolverse el punto con una modificación del artículo 1.000 del Código de Comercio, que en este caso y otros semejantes no obliga al capitán al pago de tales gastos como en otra forma.

La convención, y ello explica que se la haya separado de la relativa al contrato de ajuste, afecta principalmente al derecho público, a la intervención del Estado para la efectiva ejecución de la obligación contractual de repatriar, cuando exista, o para asegurar supletoriamente, por sus propios medios, el retorno del marino desembarcado en tierra extraña por causas ajenas a su voluntad.

La protección de los ciudadanos en el exterior, ampliada en ciertas ocasiones hasta comprender a no ciudadanos vinculados a las actividades de carácter nacional, es una función pública que se ejerce en esta materia no sólo por consideraciones de orden humanitario sino por la importancia que tiene el plantel de personal navegante para las necesidades

del comercio o para las de un eventual conflicto armado. De ahí que todos los países confíen atribuciones e impongan deberes a sus representantes consulares en los demás, con el propósito de asegurar la repatriación de los marinos. Entre nosotros, la reglamentación orgánica de la ley 4.712, vigente desde el 1º de julio de 1926, contiene una serie de prescripciones al respecto que comprende:

- a) Reglas sobre deberes de los cónsules en el sentido de procurar la efectividad de las obligaciones que pesan sobre el capitán, según el Código de Comercio (artículos 173 al 175, y 240);
- b) Reglas sobre repatriación de ciudadanos argentinos indigentes o desvalidos (artículos 97 y 98), de alcance incondicionado, teniéndose por argentinos a los extranjeros que sirven en buques nacionales (artículo 171), y, estando especialmente prevista su aplicación a los tripulantes que no tuvieron derecho a asistencia por cuenta del buque, por haber salido de él sin licencia y enfermar o ser heridos en tierra;
- c) Reglas sobre amparo de los tripulantes de buques nacionales mercantes que hayan naufragado, o tocado en puerto por arribada forzosa, o sido abandonados, a cuya repatriación debe proveerse cubriendo preferentemente los gastos con el producto de la venta de los efectos salvados o de la nave; por otra parte, los capitanes de buques argentinos están obligados, a petición de los cónsules, a transportar gratuitamente a puerto de la República, dentro de la proporción de dos hombres por cada 100 toneladas de registro, a marineros naufragos o de buques abandonados, desertores, extraviados o convalecientes, pudiendo utilizar los servicios de éstos a bordo del buque (artículos 223 y 224).

La adaptación de la ley nacional a las exigencias de la convención, supondría una revisión ampliatoria de las normas precedentes, combinada o no con una reforma del Código de Comercio, deberían resolverse los siguientes puntos:

- a) En todos los casos en que el Código de Comercio hace soportar al capitán del buque los gastos de retorno, los cónsules han de tratar de obtener del mismo la entrega de los fondos necesarios, y si no la lograsen, deberán adelantarlos por cuenta de quien corresponda (artículo 6º de la convención). El Estado quedaría subrogado en los derechos del tripulante contra el deudor de la obligación, por aplicación del derecho común;
- b) En los casos de fuerza mayor, como los encargados por el artículo 1.000 del Código de Comercio, cabría:

- 1º Modificar el sistema del código para establecer también en estos casos la repatriación a cargo del armador, ya sea en forma amplia, como la adoptada por el artículo 69 del Código del Hombre de Mar, de 1902, en Alemania, y otras leyes semejantes, o limitando la responsabilidad hasta la concurrencia del valor del buque o

de sus restos y del flete de las mercancías salvadas, según el sistema del artículo 253 del Código de Comercio francés. En cualquier situación, persistiría la obligación estatal supletoria;

- 2º Mantener el régimen del código y declarar lisa y llanamente en el reglamento consular que la repatriación se haría efectiva por el Estado; suprimir la referencia del artículo 224 de este reglamento al producto de la venta de los efectos salvados o de la nave, ya que aun cuando el cónsul pueda disponer de él para ciertos fines, nunca cabría afectarlo a erogaciones que sus dueños no están obligados a soportar.

- c) En lugar del artículo 223 del reglamento que parece imponer un gravamen no autorizado legalmente a los capitanes de buques de la matrícula nacional, o una contraprestación del tripulante por el pasaje de retorno que la convención rechaza en determinados casos (artículo 4º), establecer que las obligaciones del cónsul en lo relativo a la repatriación, quedaran cumplidas si obtuviera para el hombre de mar un empleo remunerado aceptable a bordo de un buque que se dirija a puerto de la República, sin perjuicio de las acciones que por indemnización o gastos de retorno pueda entablar el tripulante contra el capitán o el armador, en su caso (artículos 3º y 5º de la convención);

- d) Considerar el caso especial de la repatriación de tripulantes extranjeros, para asignar alcance neto y definido al artículo 171 del reglamento consular en relación a las diversas situaciones previstas por la convención.

De lo expuesto resulta que la Convención número 23 es ratificable sin dificultad.

Número 24. — Año 1927. — Proyecto de convención relativo al seguro de enfermedad de los trabajadores de la industria, del comercio y del servicio doméstico.

Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique esta convención se compromete a implantar el seguro de enfermedad obligatorio, en condiciones por lo menos equivalentes a las que ella prevé.

Si bien es cierto que se trata de normas muy generales y que no habría plazo señalado para dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por la convención, en caso de que ésta fuera ratificada, debe descartarse momentáneamente la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de cumplir su obligación de someterla al Congreso, se pronuncie a favor de la ratificación. La posición gubernamental frente a la cuestión del establecimiento del seguro obligatorio de enfermedad ha quedado fijado en el mensaje introductorio del proyecto de ley de asistencia y previsión social presentado a la Cámara de Senadores el 28 de agosto de 1934, donde se dijo: «El Poder Ejecutivo no ha creído conveniente buscar la solución integral del problema mediante la implantación del seguro contra la enfermedad, ni mucho menos, por ahora, de una caja nacional de seguros contra los grandes riesgos que son la desocupación, la invalidez y la ancianidad. El régimen de

seguro pide una evolución progresiva... En lo que respecta al riesgo de enfermedad, el proyecto del Poder Ejecutivo tiende a facilitar ese proceso por el estímulo a las mutualidades libres y por la extensión eventual de las prestaciones de las cajas de jubilaciones y pensiones creadas por diversos gremios por las leyes 10.650, 11.110 y 11.232, que habría de tener lugar en forma acorde con la prevista por la convención número 24, medidas que, según otro párrafo del citado mensaje, «prepararán al país para la implantación obligatoria del seguro contra la enfermedad, al cual necesariamente habrá que llegarse, por evolución, dentro de breve tiempo».

Por otra parte, corresponde tener en cuenta que de las dos clases de prestaciones, en dinero y en servicios, que comprendería un seguro de enfermedad ajustado a los lineamientos de la convención número 24, la primera tiene en cierto modo su equivalente para los empleados y obreros del comercio y de la industria con la obligación impuesta a los empleadores por el artículo 155 del Código de Comercio, de continuar pagándoles sus sueldos o salarios en caso de enfermedad, y durante tres o seis meses, según la antigüedad en el servicio sea menor o mayor de diez años.

De acuerdo con el principio sancionado por la misma disposición legal de que en ningún caso, el empleado tendrá derecho a más de una indemnización por su enfermedad, mientras subsista el régimen del Código de Comercio, queda considerablemente limitado el interés del seguro obligatorio para los individuos que serían sus beneficiarios, aun cuando se mantenga íntegro el interés social en la obra de prevención y cura de las enfermedades que podría desarrollar aquel seguro con una buena organización. La necesidad de cuidar estos aspectos del problema, unida a las particulares dificultades de la prestación de asistencia médica y farmacéutica en las extensiones territoriales poco pobladas que contempla el artículo 10 de la convención, propuesto por la delegación gubernamental argentina a la conferencia de 1927, inducen a mantener una prudente actitud de reserva en lo que respecta a la ratificación de la convención número 24.

Número 25. — Año 1927. — Proyecto de convención relativo al seguro de enfermedad de los trabajadores agrícolas.

No puede aconsejarse la ratificación de esta convención, por las razones de orden general expuestas al examinar la convención número 24, a lo que debe agregarse que la diseminación de los trabajadores agrícolas en grandes extensiones territoriales, corriente en nuestro país, salvo en ciertas zonas y en determinadas actividades especiales, constituyen un grave obstáculo para adoptar un sistema de seguro obligatorio de enfermedad más o menos generalizado, tal como lo señaló en la Conferencia de 1927 el delegado sudafricano Hancock, al decir: «Vemos que se han hecho progresos en el seguro social, y mucho más puede hacerse y se hará, pero cuando se trata —como en esta conferencia— de establecer una fórmula común para todas las naciones, deseo poner de manifiesto que países como Canadá, Australia, Argentina, Chile y Sud Africa no pueden prácticamente ajustarse a tal fórmula común. Sud Africa no desea resistir una necesidad, pero a nosotros, los países de ultramar, nos es sumamente difícil hacer que los paí-

ses más viejos, que están más densamente poblados, se den cuenta de la situación».

Número 26. — Año 1928. — Proyecto de convención relativo a la institución de métodos para la fijación de salarios mínimos.

Todo país que ratifique esta convención se obliga a establecer métodos que permitan la fijación de salarios mínimos en las industrias o actividades donde existen salarios excepcionalmente bajos, y conserva la libertad de decidir, previa consulta a las organizaciones patronales y obreras correspondientes, a qué industrias o actividades se aplicarán dichos métodos. El principio de la intervención del Estado en la determinación de la cuantía del salario ha sido ya aceptado por la legislación argentina principalmente en el caso del trabajo a domicilio que contempla la ley 10.505. La forma en que esta ley se aplica está de acuerdo con las disposiciones de la convención, y, si ésta fuera ratificada, sólo habría que promover la extensión de un régimen semejante a todo el territorio nacional y para cualquier clase de trabajo cuyas condiciones indiquen la conveniencia de establecer salarios mínimos obligatorios. No es necesario referirse a ninguna industria en particular para afirmar que, en los últimos tiempos, se ha percibido en diversos sectores de la opinión pública una apreciación clara de la necesidad de que el Estado amplíe su intervención en las cuestiones de salarios. Debe aconsejarse la ratificación de esta convención, que constituirá una refirmación de principios conveniente y oportuna.

Número 27. — Año 1929. — Proyecto de convención relativo a la indicación del peso en los grandes bultos transportados por barco.

Esta convención impone a los gobiernos de los países que la ratifican la obligación de velar por que todo bulto u objeto que pese más de mil kilogramos que deba ser expedido por mar o vía navegable interior, desde un puerto de dicho país, excepto en caso de tratarse de mercaderías en tránsito, lleve marcado su peso en forma visible, medida tendiente a prevenir los accidentes del trabajo que puedan producirse por exceso de carga en las grúas y otros aparatos elevadores.

No puede haber inconveniente para aceptar tal obligación internacional como ya lo han hecho países de comercio marítimo muy importante.

Número 28. — Año 1929. — Proyecto de convención relativo a la protección contra los accidentes de los trabajadores ocupados en la carga y descarga de los buques.

De conformidad con su artículo 23, apartado 2, esta convención no puede ya ser ratificada, por cuanto, a partir del 30 de octubre de 1934, ha entrado en vigencia la convención número 32 sobre la misma materia.

Número 29. — Año 1930. — Proyecto de convención relativo al trabajo forzoso u obligatorio.

Esta convención, que fué adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo con el principal propósito de amparar a las poblaciones indígenas, que son las más afectadas por los regímenes de trabajo compulsivo, exigido por la autoridad pública o por

explotaciones privadas, a las que se concede tal derecho, no es, sin embargo, un proyecto de tratado entre potencias coloniales o especialmente interesadas en el trabajo indígena, sino una convención de carácter general tendiente a abolir toda forma de servicio personal obligatorio, exigida a individuos de cualquier nacionalidad, raza o condición, salvo en ciertos casos de excepción universalmente reconocidos, como el servicio militar, los cargos cívicos, los trabajos por causa de fuerza mayor en caso de guerra, siniestros o amenazas de siniestro, y algún otro de menor importancia.

La República Argentina está en condiciones de poder ratificar esta convención sin reservas. En cuanto ella contiene normas de alcance general, es un documento encuadrado en el espíritu de la Constitución, cuyo artículo 17 establece que «ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley», regla que se hace respetar por sanciones contenidas en los artículos 140 a 145 del Código Penal. Y en cuanto otras prescripciones de la convención contemplan principalmente la protección de los indígenas, concuerdan con una tradición nacional que arranca desde los primeros días de nuestra existencia como pueblo libre, con la abolición del tributo por la Junta Provisional Gubernativa en 1811 y con el decreto de la Asamblea del año 13, que declaró derogada la mita, las encomiendas, el yanaconazgo y el servicio personal de los indios baxo todo respecto y sin exceptuar aún el que prestan a las iglesias y sus párrocos o ministros, siendo la voluntad de esta soberana corporación el que del mismo modo se les haya y tenga a los mencionados indios de todas las provincias unidas por hombres perfectamente libres y en igualdad de derechos a todos los demás ciudadanos que las pueblan».

Número 30. — Año 1930. — Proyecto de convención relativo a la reglamentación de la duración del trabajo en el comercio y las oficinas.

Dentro de las líneas generales de la Convención de Washington, de 1919, sobre limitación de las horas de trabajo en los establecimientos industriales, esta convención aplicable al comercio y oficinas no establece ninguna obligación substancial que no se halle ya contenida en la ley 11.544, que rige en toda explotación pública o privada de carácter comercial, y aun en algunas que no lo tienen.

Su aprobación es plenamente aconsejable.

Número 31. — Año 1931. — Proyecto de convención para limitar las horas de trabajo en las minas de carbón.

Las obligaciones previstas por este proyecto afectarían al régimen de trabajo de toda mina de la que se extraiga hulla o lignito solamente, o bien hulla o lignito principalmente, al mismo tiempo que otros minerales».

No hay motivo para ratificar esta convención, que por lo demás no lo es aún, ya que sólo un país la ha firmado: España; la República Argentina no posee minas de hulla o lignito en explotación.

Número 32. — Año 1932. — Proyecto de convención relativo a la protección contra los accidentes de los «dockers» o trabajadores ocupados en la carga y descarga de buques.

De todos los proyectos de convención adoptados por la Conferencia Internacional, es el que contiene más reglas de detalle, y no es de extrañar por ello, que en la primera forma que le dió la conferencia de 1929, resultase objetable por los países de mayor importancia marítima, ya por dificultades de interpretación, ya por contener algunas exigencias relativas a la seguridad a bordo de los buques que podrían afectar gravemente la utilización de material en servicio, que sin ser enteramente inapropiado no llenaba las condiciones impuestas por la convención.

El texto de ésta, revisado en 1932, a pedido de los gobiernos alemán y británico, tiene en cuenta dichas circunstancias. No corresponde a este informe un estudio, desde el punto de vista técnico, de cada una de las medidas de seguridad establecidas por la convención; el relativo margen de autonomía que ella deja a la legislación o reglamentación local, permitirá sin duda obviar las dificultades de adaptación que puedan presentarse. Pero ha de ser decisivo en el sentido de aconsejar la ratificación al hecho de que ya han tomado esta medida varias de las naciones interesadas en el comercio marítimo, como ser Gran Bretaña e Italia, y también algunos países sudamericanos, a saber, Chile y Uruguay. La mejor garantía de la practicabilidad de las normas contenidas en la convención número 32 está dada por la aceptación británica e italiana.

Número 33. — Año 1932. — Proyecto de convención relativo a la edad de admisión de los niños en los trabajos no industriales.

Este proyecto, que no deroga las reglas especiales de las convenciones de 1919, 1920 y 1921, ya ratificadas por la Argentina, sobre edad mínima de admisión al trabajo industrial, marítimo y agrícola, contempla principalmente el trabajo en el comercio y los espectáculos públicos. Sus disposiciones concuerdan, en términos generales, con las de la ley nacional vigente, y en cuanto prevé algunas excepciones justificables a la regla normal de la prohibición del trabajo a los menores de catorce años, señalaría una pauta correcta para la aplicación de dicha regla en el orden interno. No puede existir ningún inconveniente para la ratificación.

Número 34. — Año 1933. — Proyecto de convención relativo a las agencias retribuidas de colocaciones.

La disposición fundamental de esta convención, es la que obliga a los países ratificantes a suprimir las agencias retribuidas de colocaciones «con fines lucrativos», en un plazo de tres años. Los servicios de colocación de las sociedades o instituciones que, sin buscar un beneficio material, perciben una remuneración cualquiera por «restarlos», no quedan comprendidos en la prohibición, pero deberán estar sometidos al control de la autoridad competente. Se prevén posibles excepciones a la prohibición, previa consulta a las organizaciones patronales y obreras interesadas.

Son conocidas las razones prácticas que se invocan a favor de la supresión de las agencias retribuidas

de colocaciones. El proyecto de convención número 34 está dentro de una corriente de ideas casi universal; las primeras leyes en la materia, como las dictadas entre nosotros, que llevan los números 9.148 y 9.661, se limitaron a reglamentar una actividad contemplada con desconfianza, y la tendencia actual es la de suprimir en absoluto esa actividad, cuando la motivan fines de lucro que manifiestamente la convierten en antisocial y contraria al orden público. Son ya numerosas las leyes europeas y americanas que establecen la prohibición, aunque hasta la fecha no se hayan adherido a la convención de 1933, sino los siguientes países: Chile, España, Finlandia y Suecia. En la Argentina, la ley 12.102, dictada en ejecución de la convención de Génova, sobre la colocación de los marinos, establece que ésta no podrá ser objeto de comercio ejercido con fines de lucro. La fiscalización del Departamento Nacional del Trabajo sobre las agencias particulares de colocaciones que funcionan en la Capital Federal, y las trabas impositivas o administrativas con que se ha procurado desalentar ese comercio, han alejado del mercado de trabajo a un buen número de intermediarios indeseables, pero es aún importante el clandestinismo y, lo que es peor, el ejercicio libre y abierto de estas actividades fuera de los límites de la ciudad de Buenos Aires. Las posibilidades conjuntas de las agencias públicas y gratuitas de colocaciones, ya existentes o de creación futura y obligada, y de la prensa responsable, que entre nosotros desempeña un papel destacado en materia de colocación de trabajadores, no permiten suponer que la supresión de las agencias privadas retribuidas motive perjuicio alguno a los solicitantes u ofertantes de trabajo. Es, en cambio, evidente que tal supresión tendría como consecuencia útil para el bienestar común la de que desaparecieran formas de abusiva explotación de los trabajadores que provocan entre éstos justificado descontento. No puede ser dudoso que las consideraciones de orden público que militan en favor de la prohibición de las agencias pagas de colocaciones fundarían suficientemente la medida desde el punto de vista de la validez de la limitación impuesta en ejercicio del poder de policía a la libertad de comerciar, declarada por el artículo 14 de la Constitución Nacional, que no es sino una de las formas de la libertad de trabajar y ejercer toda industria «lícita» a que se refiere el mismo artículo. La ratificación de la convención número 34 es conveniente y significaría una gran mejora de la legislación social argentina.

Números 35 a 40. — Año 1933. — Proyectos de convención relativos al seguro obligatorio de vejez, de invalidez y de muerte de los asalariados de la industria, comercio y profesiones liberales, trabajo a domicilio, servicio doméstico y empresas agrícolas.

La redacción de estos proyectos, de dos en dos, es idéntica, salvo para algunas cláusulas accesorias, y si la Conferencia Internacional del Trabajo no adoptó textos únicos, fué por la razón exclusiva de que, al separar lo relativo a los asalariados de la agricultura, podría facilitarse la ratificación de las convenciones más generales por los países que tuvieran particulares dificultades para comprender al trabajo agrícola en el campo de aplicación de los seguros sociales.

Si la República Argentina estuviese en condiciones de ratificar las convenciones generales, sería el caso de estudiar por separado los problemas del tra-

bajo agrícola, tal como en ella se presentan, a fin de decidir sobre la conveniencia de incluir o no a esa actividad entre aquellas a que habría de aplicarse el seguro obligatorio de vejez, invalidez y muerte. De hecho no se encuentra en tales condiciones y huelga el examen particular.

Es previa una afirmación expresa que puede hacerse con las propias palabras empleadas en la resolución sobre los problemas generales del seguro social adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo, en 1925: «Un régimen de trabajo fundado en la justicia social exige la organización de una protección eficaz de los trabajadores contra los riesgos que puedan hacer peligrar su existencia y la de sus familias». Nadie puede estar en contra de este enunciado ni del que lo complementa a renglón seguido: «El mejor medio de obtener tal protección consiste en instituir un sistema de seguro social que conceda a sus beneficiarios derechos claramente establecidos».

Queda por saber, sin embargo, si existen circunstancias de orden temporal o local contrarias a la recepción inmediata de instituciones teóricamente consideradas como las mejores para remediar las consecuencias de la inseguridad de la vida de los trabajadores.

Cualquier discusión acerca de las perspectivas de organizar un régimen amplio de seguro obligatorio de vejez, invalidez y muerte, que estuviere de acuerdo con las convenciones de 1933, en la República Argentina, ha de girar alrededor de lo que forma la esencia de esos seguros, la cuestión del nivel de las prestaciones o beneficios y su relación con la importancia de las contribuciones, sea cual fuere su origen, necesarias para costearlo. Ahora bien, sería equivocado creer que este conjunto de convenciones ofrece bases para una solución de ese problema fundamental. Cuanto en ellas se encuentra es una enumeración de reglas sobre campo de aplicación del sistema, circunstancias en que habrían de otorgarse las pensiones, condiciones para tener derecho a las mismas, conservación de derechos para quienes momentánea o definitivamente dejan de ser asegurados obligatorios, partes que debieran contribuir a la constitución de los fondos del seguro, participación de los asegurados en la administración, etcétera. En lo esencial, que es la cuantía de las pensiones, dejan entera libertad para determinarlas de acuerdo o no con el tiempo de antigüedad en el seguro, y hacerlas consistir en una cantidad fija o en un porcentaje del salario asegurado o en una suma variable, según el importe de las cotizaciones pagadas. Sobre monto de las contribuciones o aportes nada dicen, ni tampoco sobre régimen financiero del seguro.

Ahora bien, dentro del marco tan poco ajustado de estas convenciones cabe lo bueno y lo malo. No habría grandes obstáculos para su ratificación si pudieran extenderse a nuevos sectores de la población trabajadora los seguros obligatorios de invalidez, vejez y muerte, ya establecidos en la Argentina por las leyes de jubilaciones y pensiones de empleados y obreros de diversos gremios, que, ha de señalarse, se conforman en líneas generales a lo prescrito por las convenciones de 1933. Pero la experiencia de esta realización parcial de los seguros sociales, que se podría calificar de dolorosa, no permite contemplar esa extensión como posible, cosa que, si no fuera evidente, quedaría probada por el sucesivo fracaso de las leyes números 11.289, sobre jubilaciones y pensiones de empleados y obreros de la industria, el

comercio, etcétera y 12.163, sobre iguales beneficios para el personal de las empresas periodísticas y gráficas, suspendida una y vetada la otra a raíz de la oposición de los contribuyentes obligatorios a admitir sacrificios en mira de ventajas consideradas problemáticas por tenerse la certeza o la impresión de que se reincidiría en el error.

Las instituciones de seguro obligatorio de vejez, invalidez y muerte, que son nuestras cajas de jubilaciones y pensiones, están y han estado desde su origen viciadas por la desproporción entre el valor de las prestaciones prometidas a los afiliados y el de las contribuciones o recursos destinados a costearlas, desproporción que, con prescindencia de la cuestión relativa a si deben adoptarse los sistemas de repartición o de capitalización para cubrir los riesgos, se agravó con una excesiva liberalidad de trato para los asegurados entrados tardíamente al seguro, es decir con los reconocimientos de antigüedad, gracias a los cuales gozaron del régimen normal de beneficios, personas por cuya cuenta no se habían efectuado contribuciones normales, afectándose así al fondo común en perjuicio de los asegurados más jóvenes. El déficit es la consecuencia obligada de estos vicios orgánicos, y trae un estado psicológico de temor ante la inseguridad de que puedan hacerse efectivas más adelante las prestaciones del seguro, no ya tal como se ofrecieran primeramente, sino ni siquiera a un nivel aproximado, y ante la probabilidad de que para establecer un equilibrio cualquiera deban aumentarse las cargas, probabilidad que no sólo alarma a los patronos y obreros o empleados cuyas contribuciones hubieran de ser mayores, sino a la colectividad entera que soporta el costo del sistema.

La forma en que se ha iniciado entre nosotros el seguro social de vejez, invalidez y muerte constituye un serio escollo para su generalización. El ambiente de desconfianza creado alrededor de la solidez de su régimen local sólo ha de disiparse con reajustes de las instituciones existentes que las saneen por completo, y mientras el proceso de restauración, siempre difícil por los intereses que lesiona, no termine, no sólo influye en el espíritu público ese ambiente de desconfianza, sino que, por una contradicción que responde a la falta de conceptos claros sobre los problemas financieros del seguro social, subsiste el espejismo de las jubilaciones y pensiones relativamente elevadas y serán pocos los empleados u obreros que acepten de buen grado contribuir a nuevas cajas en forma equivalente a la establecida por las actuales, si, fijados los beneficios en el nivel mucho más modesto que puedan costear tales contribuciones, resaltan desigualdades de trato.

En el informe de la Oficina Internacional del Trabajo titulado «Les problèmes généraux de l'assurance sociale» (Genève 1925), se lee: «Ninguna institución puede funcionar regularmente sin la buena voluntad constante de la gran mayoría de los interesados. Esta buena voluntad está ligada a ciertas representaciones ideológicas, a las que necesariamente debe adaptarse el sistema financiero de los seguros sociales. Cada asegurado tiene su opinión personal sobre la extensión del riesgo que corre, y sobre el precio al que le parece justo pagar las ventajas prometidas por el seguro».

«Tiene, también, en cada momento de su carrera económica, una facultad límite de pago, más allá de la cual el precio del seguro, aunque representase el «justo precio» de las ventajas ofrecidas, le parecería una carga insoportable». Hay que contar con estos

elementos psicológicos, tal como están determinados para la mayoría por los hechos que puede apreciar, y por el grado de desarrollo de la idea de la previsión individual o colectiva, antes de establecer obligaciones legales teóricamente justificadas pero susceptibles de provocar repercusiones perturbadoras de la tranquilidad y el bienestar comunes.

Las convenciones de 1933 obligan a los países ratificantes después de transcurrido un año de la ratificación. Si no puede extenderse a la generalidad de las actividades a que ellas se refieren el sistema de las actuales cajas de jubilaciones y pensiones, y si la existencia de este sistema y la incompreensión corriente de los objetivos y probabilidades del seguro social, son causas concurrentes para dificultar la adopción de otros, no puede pensarse seriamente en que, dentro del plazo fijado, la República dé cumplimiento a los deberes que entrañaría la ratificación. En esta materia, la preparación de la legislación nacional y del clima social adecuado para recibirla sin choques es previa a la concertación de un compromiso internacional, que podrá aceptarse cuando se trate de mantener lo ya creado, pero no antes.

Número 41. — Año 1934. — Proyecto de convención relativo al trabajo nocturno de las mujeres.

Es el texto revisado de la Convención de Washington sobre el mismo punto que ya ha sido ratificado por la República Argentina. Contempla una posible prolongación hasta las once de la noche del trabajo permitido a las mujeres, manteniéndose a salvo el principio de que el descanso nocturno comprende un período de once horas consecutivas. También modifica la convención anterior para declararla inaplicable a las mujeres que ocupen cargos de dirección que impliquen responsabilidad y que no efectúen normalmente un trabajo manual.

Por ser el régimen prohibitivo de la ley número 11.317 menos flexible que el de las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, la ratificación de la que lleva el número 41 sólo tiene interés en cuanto señalaría ciertos límites a cualquier reajuste legal o reglamentario de dicho régimen, pero no puede haber ningún inconveniente en aprobarla, a fin de no quedar internacionalmente comprometidos a mantener el sistema menos previsor de la Convención de Washington, abandonado ya por ocho de los países que en su primer momento la ratificaron, para substituirlo para el del texto de 1934.

Número 42. — Año 1934. — Proyecto de convención relativo a la reparación de las enfermedades profesionales.

Los miembros de la Organización Internacional del Trabajo que ratifican esta convención se obligan a asegurar a las víctimas de enfermedades profesionales o a sus derechohabientes una reparación basada en los principios generales de su legislación nacional sobre reparación de accidentes del trabajo. La asimilación ya se halla establecida por el artículo 22 de la ley nacional número 9.688, de modo que no se trataría de incorporar una nueva norma interna como consecuencia de la ratificación.

Tampoco habría de alterarse substancialmente la enumeración de las enfermedades profesionales comprendidas en el régimen de la ley de accidentes del trabajo, pues las disposiciones reglamentarias vigentes, en razón de haber dictado el Poder Ejecutivo el

decreto número 81.556, de abril 29 de 1936, incluyen en la lista de esas enfermedades todas las que menciona el cuadro que contiene la convención número 42.

La única consecuencia de la ratificación estaría constituida por la necesidad de substituir la exigencia de que la enfermedad profesional debe ser declarada efecto exclusivo de la clase de trabajo que realizó la víctima durante el año precedente a la inhabilitación, que establece el artículo 22 de la ley 9.688, por el régimen de la presunción del origen profesional de la enfermedad que se conoce con el nombre de «sistema de la doble lista». De acuerdo con este sistema, adoptado por la convención, se considera profesional la enfermedad o intoxicación mencionada en cada caso por el solo hecho de contraerla trabajadores ocupados en la actividad específicamente reconocida como fuente de riesgos, y nada más que para estos trabajadores. El sistema de la doble lista ofrece la manifiesta utilidad de liberar al trabajador de la carga de la prueba sobre la causa profesional de la enfermedad, y por este motivo se lo ha incorporado a las legislaciones más modernas en materia de reparación de los riesgos del trabajo, y a la convención internacional de 1925, de la que es un texto revisado y ampliado la de 1934. Es aconsejable la ratificación de esta última por la República Argentina.

Número 43. — Año 1934. — Proyecto de convención relativo a las horas de trabajo en las fábricas automáticas de vidrio.

Esta convención se aplica a las personas que trabajan, por equipos sucesivos, en operaciones mecánicas continuas, en las fábricas de vidrio que produzcan, mediante el empleo de máquinas automáticas, vidrio continuo para ventanas o de características similares a las de éste.

No existe, en todo el territorio de la República Argentina, ningún establecimiento industrial en que se produzca el vidrio plano con máquinas automáticas. La ratificación de la convención número 43 carecería, pues, de objeto práctico.

Número 44. — Año 1934. — Proyecto de convención para asegurar indemnizaciones o subsidios a los trabajadores en paro forzoso.

Todo país que ratifique este proyecto, y hasta el 1º de diciembre de 1937, sólo lo han hecho Gran Bretaña y el Estado libre de Irlanda, se obliga a establecer un sistema de seguro obligatorio o voluntario de desocupación, o una combinación de ambos, mediante el cual tengan derecho a percibir indemnizaciones de paro todas las personas ocupadas corrientemente en un trabajo por el que perciban un salario o un sueldo, salvo ciertas categorías de trabajadores que se exceptúan, la más importante de las cuales es la de los trabajadores agrícolas. Prevé también la convención sistemas de asistencia en virtud de los cuales se concedan subsidios en dinero o en especie a los desocupados, pero sólo como un complemento de la obligación principal de establecer el seguro obligatorio o voluntario de paro.

No sería oportuna la ratificación de este proyecto para la República Argentina. En primer lugar, porque el problema de la desocupación no tiene en ella los caracteres que ha asumido en los países de gran desarrollo industrial, y, como lo demostró el censo de 1932, afecta principalmente a los asalariados.

agricultura y de la ganadería, a quienes es particularmente difícil extender los beneficios del seguro de paro; la naturaleza de sus actividades y los inconvenientes técnicos que de ella derivan tanto para la sujeción de los trabajadores a las obligaciones que comporta el seguro como para el control de la desocupación, son causa de que, en general, los obreros del campo no estén amparados por los sistemas de seguro obligatorio o voluntario de desocupación, y de que, aun en países en que la densidad de población da al trabajo agrícola caracteres que facilitarían la práctica del seguro, como Italia o Alemania, se haya debido renunciar a las tentativas de implantarlo. La exclusión obligada que consagra la convención de 1934 muestra cómo el seguro de desocupación tiene un interés mucho menor para los países que, como la Argentina, poseen una economía principalmente basada en la producción agrícola-ganadera que para los de economía intensamente industrial.

En segundo término, y ésta es la consideración más decisiva para demostrar la inoportunidad de aceptar la obligación de establecer el seguro de paro en la República Argentina, es absolutamente imposible que tal seguro funcione sin una organización previa del mercado de trabajo que no poseemos. La desocupación que debe indemnizar el seguro es la que proviene de la falta de empleo aceptable. Para acreditar la existencia de dicha falta, que es un hecho objetivo, es necesario confrontar todas las posibilidades de ocupación que se presentan con la oferta de trabajo de los desocupados, y eso sólo puede hacerse fácilmente con un buen sistema de agencias de colocaciones coordinadas sobre la base territorial más amplia que pueda abarcar. «El primer país que adoptó decididamente el seguro obligatorio de desocupación, Gran Bretaña, en 1911, no lo hizo sino después de haber cubierto el país de una red cerrada de agencias públicas de colocaciones instituidas por una ley de 1909, y ninguno de los que, más tarde, siguieron igual camino, dejó de organizar la colocación como una base indispensable del seguro. Asimismo, en los países en que el seguro contra la desocupación se ha constituido en la forma de instituciones facultativas, éstas no han adquirido desarrollo considerable sino en el seno de los sindicatos obreros, es decir, en un medio en que el mercado de trabajo era de los mejor organizados, gracias al conocimiento directo que tienen los sindicatos de las plazas y de los trabajadores disponibles en sus respectivas industrias o profesiones. (1) La República Argentina, que ratificó la convención número 2 de Washington, referente al paro forzoso, no ha dado hasta ahora el debido desarrollo al sistema de oficinas públicas de colocación gratuita, bajo la inspección de una autoridad central que se ha comprometido a instituir por el artículo 2º de la referida convención. Existe sólo un comienzo de organización basada en el Registro Nacional de Colocaciones que funciona en la Capital Federal, pero no se han creado ni las agencias en el interior de la República, que ya se previeron por la ley 9.148, ni otras semejantes. Así, pues, sin desconocer las ventajas inherentes a la institución del seguro de paro forzoso, cabe afirmar que nuestro país no está preparado para adoptarla, y que es conveniente reservar para más adelante la posible ratificación de la convención número 44.

(1) Ver Bureau International du Travail, L'assurance chômage, Genève 1925, página 24.

Número 47. — Año 1935. — Proyecto de convención sobre el empleo de mujeres en trabajo subterráneo en las minas de todas clases.

La medida a que se refiere esta convención está contenida en el artículo 11, inciso b) de la ley nacional 11.317, disposición que prohíbe ocupar a mujeres en canteras o trabajos subterráneos. Nada se opone a la ratificación.

Número 46. — Año 1935. — Proyecto de convención (revisadas) para limitar las horas de trabajo en las minas de carbón.

Véase el informe relativo al proyecto de convención número 31.

Número 47. — Año 1935. — Proyecto de convención para reducir las horas de trabajo a cuarenta por semana.

La reducción a cuarenta horas de la semana de trabajo, después de haber sido discutida en general en la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de 1933 y de haberse presentado a la segunda discusión en la conferencia de 1934 dos anteproyectos de convención relativos a su implantación en la industria y en el comercio y oficinas, que no llegaron a votarse, se planteó en una nueva forma en la conferencia de 1935. Esta última aprobó el proyecto de convención número 47, que constituye una simple afirmación en favor del principio de la semana de cuarenta horas aplicado en forma tal que no implique una disminución del nivel de vida de los trabajadores y de la adopción o del fomento de las medidas que se consideren apropiadas para lograr esta finalidad. El proyecto no entraña para el país que la ratifique sino un compromiso de orden moral, pero por lo que se refiere a la aplicación del principio de la reducción de la semana de trabajo a las diversas clases y empleos, no impone deberes concretos. En efecto, la cláusula que obliga a efectuar esa aplicación de conformidad con las disposiciones de detalle que hayan de prescribirse en los convenios separados que sean ratificados por cada miembro, no tiene ningún valor positivo, pues, como se advierte, equivale a postergar toda asunción de aquellos deberes.

Es evidente que, por medio de la convención número 47, la Organización Internacional del Trabajo se propone obtener que los gobiernos nacionales se definan en pro de una política de reducción de la semana de trabajo como medio de combatir la desocupación, débase ésta a las crisis económicas o a las transformaciones de la técnica que tiende a ahorrar el trabajo humano. La oportunidad y la extensión en que habrían de adoptarse medidas concordes con dicha política quedan totalmente indeterminadas.

Ante semejante presentación del problema, se hace embarazosa la decisión gubernamental. La tesis de que la reducción de la semana de trabajo puede contribuir a que obtenga ocupación cierto número de parados forzosos no admite un rechazo de principio, pero la cuestión de la aplicación más o menos generalizada de esa reducción provoca serias dudas sobre su utilidad final. Es delicado, sobre todo, vincular la disminución de las horas semanales de trabajo con la conservación del nivel de vida de los trabajadores como lo ha hecho la convención de 1935. Ello supone reajuste de salarios tendientes a mantener la remuneración por un período dado de trabajo en la altura

aproximada que hubiera tenido antes de la reducción de las horas de ocupación dentro del mismo. El costo de producción de la industria o actividad afectada, se elevará en cierta medida correspondiente a la importancia relativa del rubro de los salarios en el total de los gastos. Y si el costo de producción sube, los precios reflejan el alza, y depende de la mayor o menor elasticidad de la demanda que el consumo del producto siga efectuándose en igual escala que antes; accesorariamente, la demanda de otros puede ser influenciada por el aumento de precio del que directamente ha sido afectado por el aumento del salario de quienes lo producen. La cadena de repercusiones implica, en definitiva, la posibilidad de que la reducción de la semana de trabajo, en lugar de crear ocupación, provoque un efecto contrario, ya que no puede haber más plazas cubiertas que las requeridas por la cantidad demandada de productos, que no es constante. Por otra parte, y sin admitir conceptos simplistas como el de que el poder adquisitivo de los asalariados incorporados nuevamene al proceso de la producción bastaría para compensar el efecto de la elevación de costos sobre el consumo, puesto que se trata de una redistribución y no de una creación de riqueza, es previsible que las variaciones de la composición conjunta de la demanda resultante de esa redistribución influirán en uno u otro sentido en el mercado de trabajo, según se acreciente o limite la demanda de determinados artículos. Todas estas circunstancias hacen extremadamente difícil aceptar sin reservas una norma de policía del trabajo como la endosada por la convención para reducir las horas de trabajo a cuarenta por semana, y así lo ha entendido desde el primer momento el gobierno argentino, cuyo representante en la Conferencia Internacional del Trabajo, de 1933, doctor Eduardo L. Bullrich, dijo: «En las condiciones actuales, sin profundizar la cuestión, sin estudiar los casos en que la medida sería aplicable, nuestro gobierno no puede aceptar la reducción de la duración del trabajo, porque esta medida podría traer consigo enormes perturbaciones económicas.» Y agregaba: «Parece, sin embargo, que puede existir desde ahora, en nuestro país, la posibilidad de combatir la desocupación tecnológica por medio de una reducción temporaria de la jornada de trabajo, determinando previamente los casos en que la medida puede aplicarse a fin de hacer desaparecer el desequilibrio causado por la racionalización o por medios que hubieran podido producir desocupación en una industria determinada.» Finalmente expresó el doctor Bullrich: «Quiero decir claramente que la Argentina no se propone rechazar un principio que parece aceptable en parte, y cree deseable estudiar la cuestión para no terminar en un fracaso.»

Recientes experiencias de una nación europea muestran los riesgos de una política sistemática de reducción de las horas de trabajo y constituyen un motivo más para que la Argentina mantenga una actitud de prudente expectativa con relación a la misma.

Número 48. — Año 1935. — Proyecto de convención relativo a la organización de un régimen internacional para la conservación de los derechos del seguro de invalidez, vejez y muerte.

En su décimoséptima sesión celebrada en 1933, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó varios proyectos de convenio y una recomendación sobre el seguro de invalidez, vejez y muerte. Quedó pendiente la consideración del problema de la conservación de

los derechos adquiridos o en curso de adquisición, para los trabajadores que transfieren su residencia de un país a otro, punto que, a pesar de haber sido ya incluido en los cuestionarios preparatorios de la labor de aquella conferencia, no se juzgó suficientemente maduro. En la sesión de 1934 se planteó esta cuestión en primera lectura, de acuerdo con el procedimiento de la doble discusión que se sigue normalmente en la conferencia, y se resolvió aprobar el informe y proyecto de conclusiones de la comisión que había examinado el informe preliminar preparado por la Oficina Internacional del Trabajo. Incluida nuevamente en la orden del día de la conferencia de 1935, fué adoptado el presente proyecto de convención.

Existe en la Organización Internacional del Trabajo un evidente interés por la actitud que adoptarán, frente al proyecto, los países de inmigración situados fuera de Europa, pues éstos no participaron, ni directa ni indirectamente, en sus labores preparatorias, y el único representante gubernamental de los mismos que hizo uso de la palabra en la sesión plenaria de la conferencia de 1934, fué el delegado argentino, doctor David O'Connor, quien formuló algunas reservas fundadas en razones de carácter económico.

La expectativa que despierta la posición en que se colocarán los países de inmigración, especialmente los hispanoamericanos, puede comprobarse por los siguientes párrafos de un estudio de Carlos G. Posada, publicado en los *Anales del Instituto Nacional de Previsión*, de Madrid, y ampliamente difundido en edición especial en España y fuera de ella: (1) «Su voz no se hizo oír hasta el último momento ante el pleno de la conferencia. Es de esperar y desear que esta actitud, en interés de todos, no vuelva a reproducirse el año próximo, al discutirse el tema de la conservación de derechos en segunda lectura. El delegado español, señor Sierra, exteriorizó, en nombre de nuestro país, y en realidad en nombre de todos los países de emigración, en momento oportuno, al que más adelante aludiremos, este deseo sentido por la inmensa mayoría de la conferencia.»

El delegado argentino, doctor O'Connor, sostuvo en la conferencia de 1934 que el problema de la conservación de los derechos adquiridos interesaba a los países que, como la Argentina, recibían fuertes contingentes de trabajadores extranjeros, porque si éstos, después de obtener una jubilación o pensión, pudieran abandonar el territorio nacional sin restricción alguna, se produciría quizá un importante drenaje de fondos hacia el exterior. Citaba el hecho de que la Caja de Garantía de la Ley de Accidentes del Trabajo había pagado, en el período 1916-1923, indemnizaciones que representaban doce millones de pesos papel para obreros argentinos, y veintitrés millones para extranjeros.

Para retomar la cuestión desde el punto de vista en que la dejó expuesta el delegado gubernamental argentino, cabe señalar que las cifras por él citadas

pueden ser un índice de la importancia relativa de la mano de obra extranjera y nacional, en el período de tiempo considerado, pero no distinguen entre pagos a extranjeros radicados en el país o en el exterior. Por otra parte, como precisaba el doctor O'Connor, la cuestión de los derechos de los domiciliados en el exterior a efecto de la reparación de los accidentes del trabajo, tiene su régimen particular, que en nuestro país es el de los tratados de reciprocidad, y es ajena a la cuestión de la conservación de los derechos adquiridos en los seguros sociales de invalidez, vejez y muerte.

La Argentina no tiene un sistema general de seguros sociales, pero el punto de la conservación de los derechos adquiridos interesa a las cajas gremiales de jubilaciones y pensiones y a sus correspondientes beneficiarios. Afectaría también a dichas cajas gremiales, en relativa medida, como luego se verá, la cuestión de los derechos en curso de adquisición, sobre la cual nada se dijo en la conferencia de 1934 en nombre del gobierno argentino.

Tanto una como otra fase del proyecto de convención deben ser contempladas por ahora en mira a las consecuencias de su ratificación sobre el actual sistema de jubilaciones y pensiones por cajas gremiales.

Para la mejor comprensión de los aspectos que presenta el tema de la conservación de derechos de los emigrantes en los seguros de invalidez, vejez y muerte, es necesario separarlo en sus dos aplicaciones previstas, a saber:

- a) Conservación de los derechos adquiridos;
- b) Conservación de los derechos en curso de adquisición.

a) Las jubilaciones y pensiones otorgadas por las cajas gremiales argentinas de las leyes 10.650, 11.110 y 11.575, están sujetas a dos regímenes diferentes en cuanto a los efectos que produce el domiciliamiento del beneficiario en el extranjero.

En las jubilaciones y pensiones de las leyes 10.650 y 11.110 (Cajas de Empleados Ferroviarios y del Personal de las Empresas Particulares de Tranvías, Teléfonos, Telégrafos, Gas, Electricidad y Radiotelegrafía), se pierde todo derecho a la jubilación o pensión si el beneficiario se domicilia en el extranjero sin permiso previo del Poder Ejecutivo. (Ley 10.650, artículos 35 y 47, reformados por las leyes 11.308 y 11.605; ley 11.110, artículos 30 y 41). En cambio, tratándose de jubilaciones y pensiones de la ley 11.575 (Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Bancarias), se suspende el pago de la jubilación o pensión si el beneficiario se domicilia en el extranjero sin dar conocimiento al directorio. (Ley 11.575, artículo 65.)

Como se ve, este último caso no subordina el derecho del beneficiario que se domicilia en el extranjero a ninguna autorización oficial, y la obligación de dar conocimiento del hecho al directorio tiene simplemente por objeto facilitar el control que debe ejercer la institución y las relaciones de ésta con los jubilados o pensionistas.

En cambio, el régimen del permiso previo del Poder Ejecutivo para fijar domicilio en el extranjero, que existe en las otras cajas, tiene el propósito de evitar que los pagos a jubilados o pensionistas radicados en el exterior puedan alcanzar en un momento dado una magnitud tal que determine un problema social y económico considerable. Así se explica que dichos permisos y sus renovaciones se hayan concedido

normalmente sin dificultades, y que solamente en una oportunidad se haya tratado de dejarlos sin efecto, y esto en forma general, a principios de 1932 la economía argentina sufría las consecuencias de un desequilibrio en la balanza internacional de pagos, y se trataba de restringir a lo indispensable las remesas de fondos al exterior. De ahí que el 21 de febrero de ese año, el Poder Ejecutivo en acuerdo de ministros dictara un decreto cancelando todos los permisos anteriormente otorgados a jubilados y pensionistas de toda índole para domiciliarse en el extranjero. Posteriormente se consideró que era innecesario mantener ese decreto, por estar en cierto modo refrenado el ausentismo de los beneficiarios de jubilaciones y pensiones mediante el recargo del 30 % con que debían pagar el impuesto a los réditos, de acuerdo con el artículo 16 de la ley 11.586, y se lo dejó sin efecto por nuevo decreto dictado en acuerdo general de ministros el 4 de julio de 1932.

La enorme mayoría de los beneficiarios de jubilaciones y pensiones de las diversas cajas está domiciliada en la Argentina. Ello es natural en el caso de los trabajadores nacionales y lo es también en el de los extranjeros, porque cuando éstos han alcanzado el límite de años de trabajo que les permite jubilarse, sobre todo si la jubilación es la ordinaria, suelen haberse arraigado definitivamente en nuestro país, al que han traído o en el que han constituido su familia. Es conocido el fenómeno de la asimilación rápida de los inmigrantes a nuestro medio social, con el que se funden, salvo raras excepciones, fenómeno que se ha advertido mientras predominó la inmigración de origen español e italiano. Entre los jubilados de nacionalidad extranjera constituyen hoy la mayoría los de ese origen; si bien es posible que en el futuro esa mayoría disminuya, por efecto de las nuevas corrientes inmigratorias procedentes de la Europa central y oriental, ello tardaría años en producirse, y sólo en el caso de que la nueva inmigración no se arraigase con igual fuerza que la anterior, podría variar el criterio con que ahora ha de contemplarse el problema que estamos considerando. En el supuesto de que la Argentina resuelva aceptar compromisos internacionales en esta materia, cabe recordar que el artículo 26 del proyecto de convención establece que los países ratificantes podrán denunciarla a los cinco años de su entrada inicial en vigor, o al cumplirse cada nuevo período de cinco años sucesivos.

Los lazos familiares, sociales y económicos que retienen al jubilado o pensionista extranjero en el territorio nacional y, en menor grado, la imposición fiscal al ausentismo, así como las restricciones en materia de cambios, constituyen otros tantos impedimentos a su emigración. No parece, pues, indispensable condicionar el derecho a los beneficios de las diversas leyes de jubilaciones y pensiones a una autorización previa, en los pocos casos en que los respectivos titulares quieran o necesiten domiciliarse en el exterior. Esa condición no existe para los jubilados y pensionistas bancarios, lo que demuestra que no ha habido en el Congreso de la Nación una política sistemática al respecto. La Argentina podría ratificar el proyecto de convención en cuanto se refiere a la conservación de derechos adquiridos, sin riesgo alguno de importancia.

b) El segundo aspecto del proyecto de convención, el de la conservación de los derechos en curso de adquisición, interesa al país en grado relativo mientras

no tengamos un régimen típico de seguros sociales de invalidez, vejez y muerte.

En efecto, tiende a establecer un sistema que garantice la continuidad del seguro social a favor de los trabajadores que han estado sujetos al mismo en un país determinado y pasan a ejercer sus actividades en otro, en que también quedan obligatoriamente asegurados.

El objeto de tal sistema no es otro que el de evitar que un trabajador que ha estado asegurado y ha efectuado aportes en dos o tres países durante varios años, pueda encontrarse privado de los beneficios del seguro porque no haya alcanzado a cumplir en cada país el plazo mínimo de afiliación al instituto asegurador que la ley exija, o porque, aun cumplido este plazo en alguno, el posterior cese de los aportes al instituto respectivo haga caducar sus derechos.

La justa solución de estos casos se procura ya hacer tiempo mediante tratados bilaterales que se han convenido entre diversos Estados europeos que poseen regímenes similares de seguros sociales. La lista de dichos tratados es extensa y puede consultarse en la página 227 del informe gris preparado por la Oficina Internacional del Trabajo para la discusión de este tema en la conferencia de 1934. En cuanto a la técnica de las soluciones internacionales adoptadas en los mismos, pueden observarse tres procedimientos diferentes característicos, a saber:

1. Transferencia de los aportes a una institución única de seguro;
2. Transferencia de los capitales representativos de los derechos en curso de adquisición;
3. Conservación de los derechos en cada país y repartición de las prestaciones entre las instituciones de seguros de los diversos países.

Los métodos 1 y 2 implican ciertas dificultades y complicaciones administrativas que han determinado una aplicación relativamente poco frecuente de los mismos. En cambio, el método 3, mediante el cual se establece la unidad de la carrera de asegurado del trabajador emigrante, sin que haya transferencia de fondos ni aun arreglo de cuentas entre las instituciones de seguro a las que aquél haya estado afiliado, es el que más se ha difundido. El proyecto de convención está basado en ese método, cuya clave es la totalización de los períodos de afiliación al seguro en los diversos países en que el emigrante haya estado sujeto al mismo, y la determinación de las prestaciones a cargo de cada institución, en forma equitativa. Es decir, que si bien se computarán todos los períodos de afiliación a efecto de establecer si el asegurado tiene la antigüedad de servicios requerida por la ley de cada país para obtener los beneficios del seguro, cada institución no concedería, en cambio, estos beneficios en las mismas condiciones que a quienes hubieran cumplido el período íntegro legal de afiliación a la misma, sino que abonaría las prestaciones en función del número y valor de los aportes que hubiera percibido efectivamente cuando éste fuera el sistema normal de liquidar todo o parte del seguro, y en la proporción en que el tiempo de afiliación en la institución interesada esté con respecto al período total computable, cuando se trate de prestaciones que se calculen con prescindencia del valor de los aportes.

Vuelve a presentarse, al estudiar cuál debe ser la posición de la Argentina en cuanto a este punto, la

(1) Carlos G. Posada. — *La conservación de los derechos del emigrante en los seguros de invalidez, vejez y muerte*, ante la XVIII Conferencia Internacional del Trabajo, Madrid, 1934, página 18.

necesidad de contemplar el estado actual de cosas, por una parte, y las posibilidades del futuro, por otra.

Por el momento, el régimen internacional de conservación de derechos en curso de adquisición no jugaría sino en pequeña escala, dada la diversidad existente entre los seguros sociales de invalidez, vejez y muerte, propiamente dichos, y el sistema de los beneficios que otorgan las cajas de jubilaciones argentinas a empleados y obreros de los gremios especiales para que han sido creadas. En efecto, nuestras cajas están en el caso que contempla el apartado 4 del artículo 2º del proyecto de convención, o sea el de los regímenes especiales de seguros profesionales. El informe preparado por la Comisión de la Conservación de Derechos designada en la conferencia de 1934, en su capítulo II, apartado 6, decía a este respecto: «En muchos países existen regímenes de seguros especiales instituidos en beneficio, sea de los asalariados de ciertas profesiones, tales como mineros y marinos, sea de ciertas categorías sociales, como los empleados, trabajadores no manuales. Estos regímenes comportan ventajas particulares, pero también aportes más elevados que en el régimen general e interprofesional. El paso del régimen general a un régimen profesional no debe hacerse en detrimento de este último. Si trabajadores afiliados, primero a un régimen general y después a un régimen profesional, pudiesen hacer valer íntegramente, con respecto a este último, el tiempo de afiliación al seguro general, resultarían mejor tratados que los afiliados asegurados continuamente a un régimen profesional. Hay aquí una cuestión de equidad que se presenta tanto en el orden nacional como en el internacional.»

La disposición antes mencionada establece que en los regímenes profesionales de seguros no se totalizarán, para el cómputo del plazo de afiliación o el número de cotizaciones exigido, sino los períodos de afiliación a un régimen especial correspondiente en otro u otros países, o si éste no existiera, los cumplidos en la profesión de que se trate bajo el régimen de seguro que le fuera aplicable. En tal caso, nada habría que objetar por nuestra parte, ya que el principio de la conservación de derechos en curso de adquisición entre regímenes equivalentes o similares está incorporado a nuestro derecho interno (ley 10.650, artículo 50; ley 11.110, artículo 54; ley 11.575, artículo 13), y las mismas razones de equidad en que se fundan estas disposiciones son las que justifican la internacionalización del sistema.

La conservación de los derechos en curso de adquisición puede llegar a ser de un real interés para nosotros, si en el futuro se crea un régimen general de seguros sociales de invalidez, vejez y muerte. Entonces aumentaría apreciablemente la cantidad de beneficiarios del mismo, y la reciprocidad entre la Argentina y los demás países que ratificaran la convención sería efectiva y no aparente, como sucede con los tratados bilaterales que hemos suscrito sobre el pago de indemnizaciones por accidentes del trabajo, en los que todo el provecho es para los países de emigración, porque es ínfimo el número de ciudadanos argentinos radicados en ellos que eventualmente podrían resultar favorecidos por aquellos tratados. En cambio, la reciprocidad para la conservación de derechos en curso de adquisición en los seguros sociales contemplaría los casos de trabajadores domiciliados en la Argentina después de haber estado asegurados en el extranjero, que mantendrían su condición de beneficiarios de las correspondientes instituciones

y, en su caso, recibirían prestaciones de éstas en nuestro propio país.

La circunstancia antes recordada de que los inmigrantes, por lo general, se incorporan definitivamente al medio nacional, muestra las ventajas que puede tener para nuestro país el régimen del proyecto de convención.

Sin embargo, será prudente no adelantarse a ratificarlo en un cambio previo de ideas con los gobiernos de los países de emigración que manifiesten interés por el mismo. Hasta el 1º de diciembre de 1937 sólo dos de éstos, España y Hungría, han registrado su ratificación y, en cambio, son numerosos los que le han negado expresamente acuerdo o han postergado toda decisión al respecto. Ciertas cuestiones de diversidad de regímenes de los seguros sociales o de transferencias posibles de fondo entre país y país, ligadas al juego del proyecto de convención, podrán ser aclaradas en conversaciones preliminares de representantes de las instituciones aseguradoras que hayan de quedar obligadas por la aceptación ulterior de aquél, y aun será tal vez necesario recurrir a los convenios bilaterales complementarios a que se refieren sus diversos artículos. Sólo así significará la ratificación un acto positivo de consecuencias precisas.

Número 49. — Año 1935. — Proyecto de convención para la reducción de las horas de trabajo en las fábricas de botellas de vidrio.

Fijada la actitud de reserva frente al proyecto de convención de carácter general sobre la semana de cuarenta horas, y siendo el proyecto número 49 una adaptación de los principios del anterior al caso particular de una industria continua que no tiene desarrollo apreciable en la Argentina, la fabricación de botellas por medio de máquinas automáticas, no resulta indicada su ratificación.

Número 50. — Año 1936. — Proyecto de convención relativo a la reglamentación de ciertos sistemas particulares de reclutamiento de los trabajadores.

La reglamentación encarada por este proyecto ha sido estudiada únicamente como problema del trabajo indígena, y tiene por objeto remediar abusos inherentes a la inferioridad en que se hallan por lo general las comunidades indígenas de países poblados o colonizados por la raza blanca u otra igualmente dominadora, para resistir presiones de los empresarios de las explotaciones agrícolas y otras que requieren abundante mano de obra para su desenvolvimiento. La presión no sólo se resuelve en trabajo forzoso, régimen que ha sido objeto del proyecto de convención votado por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1930, y que afortunadamente nuestros indios no han sufrido desde el tiempo remoto de las encomiendas y los repartimientos; sin llegar al extremo de infligir castigos a los que no quieren trabajar, las formas desviadas de coerción, adelantos en dinero o mercancías, soborno de caciques o incentivos falaces, son males inseparables del libre reclutamiento de indígenas. Y una vez reclutados éstos, las condiciones de su transporte al lugar del trabajo y las de repatriación, en su caso, constituyen aspectos del trato que se da a los trabajadores, en que con frecuencia se comprueban procedimientos condenables. De todo ello se ocupa el proyecto de convención número 50, que, mientras no sea un hecho la abolición

total del reclutamiento propiciada por la recomendación que la conferencia de 1936 votó juntamente con aquél, quiere someterlo a la vigilancia de la autoridad pública y especificar obligaciones a cargo de los empleadores que se valgan del mismo.

Entre nosotros, aunque el problema es de pequeña escala, por ser reducida la cantidad de indígenas que habita el territorio nacional, no ha dejado de presentarse y de ser contemplado por el gobierno con verdadera comprensión. Es así como en los años 1914 y 1915, el ministro del Interior aprobó contratos celebrados entre representantes del poder público y de dos de los grandes ingenios azucareros del Norte de la República, por los que se regulaban las condiciones de reclutamiento, transporte, trabajos y pago de los indígenas conchabados en los territorios de Formosa y Chaco, contratos que rigieron varios años. Con posterioridad, por decreto del 11 de enero de 1927, que reglamentó las funciones de la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios se encargó a ésta de vigilar e inspeccionar el trato que reciben los indios en los obrajes, ingenios y demás establecimientos industriales (artículo 4º), se prohibió contratar indios en los territorios nacionales para los trabajos de obraje y zafra, canales y vías férreas, fuera de las zonas en que residen, sin intervención de la comisión referida (artículo 6º), y se estableció que ésta conocería en los contratos de trabajo, pudiendo negar la ocupación de los indígenas en determinadas circunstancias (artículo 5º). Desde entonces, los interesados han debido convenir siempre con la Comisión de Reducciones de Indios las condiciones para la trata, marcha, paga, racionamiento y licenciamiento de los indígenas, y lo siguen haciendo en todos los casos de reclutamiento. Las normas del proyecto de convención concuerdan en buena parte con las que se siguen por la autoridad nacional, por ejemplo, en cuanto se exige que los vehículos utilizados para el transporte sean aptos para este menester, ofrezcan buenas condiciones de higiene, etcétera, y si en otros aspectos no han sido practicadas antes por nosotros, como del examen médico obligatorio de los reclutados, no puede haber sino ventajas en adoptarlas íntegramente, pues representan el resultado de un estudio detenido y basado en la experiencia de los países coloniales, sobre la política que es conveniente y practicable en situaciones semejantes a la que debemos considerar. Aconsejaremos, pues, aprobar y ratificar este proyecto de convención.

Número 51. — Año 1936. — Proyecto de convención relativo a la reducción de las horas de trabajo en los trabajos públicos.

La reducción a cuarenta horas de la semana de trabajo, después de haber sido materia de la llamada «convención de principio» de 1935, está siendo contemplada, en su aplicación concreta a cierto grupo de industrias y actividades, por una serie de proyectos de convención especiales que ha aprobado la Conferencia Internacional del Trabajo. El primero de éstos, que tiene un campo de aplicación de verdadera importancia, es el que trata de la adopción de la semana de cuarenta horas en los trabajos de construcción e ingeniería civil, costeados o subvencionados por los gobiernos centrales.

Sabido es que uno de los fines con que se sostiene la reducción de la semana de trabajo es el de facilitar la participación de los trabajadores en los bene-

ficios del progreso técnico. Afírmase que, en la construcción y edificación, éstos han sido muy rápidos en los últimos años, tanto más cuanto que han resultado favorecidos por la utilización de técnicas nuevas: hormigón, carpintería metálica, utilización de elementos *standard*, etcétera, y por el empleo de máquinas de gran rendimiento para los trabajos de movimiento de tierra, la utilización del cemento y otros. Sin embargo, el personal obrero utilizado en la construcción y edificación sigue siendo crecido, y es que la técnica nueva ha contribuido a crear oportunidades de trabajo al abaratar las obras. Se necesita menos gente que antes para determinadas tareas, pero se ofrece trabajo a mucha más al aumentar la demanda de su producto.

Nadie puede atribuir seriamente a la mecanización o racionalización el ser causa de paro forzoso en estas industrias. Cuando en ellas se ha experimentado el paro, es porque sus actividades están condicionadas por las posibilidades del ahorro y del crédito a largo plazo. En épocas de depresión económica disminuyen o desaparecen las utilidades que forman la fuente mayor de ahorro, se restringe el crédito y, en consecuencia, se percibe una inmediata y brusca caída de la demanda de obras.

Ante una desocupación originada, sobre todo, por causas económicas generales, sólo queda la tesis de que la reducción de la semana de trabajo pueda ser un remedio parcial del paro. Pero esa reducción, aplicada como quiere la convención de 1935, es decir, en forma tal que no implique una disminución del nivel de vida de los trabajadores, significa un encañamiento de las obras, que puede estimarse para algunas en el 10 %, si se tiene en cuenta que los salarios representan alrededor de la mitad de los gastos de construcción, y que por cuarenta horas de trabajo se debería pagar lo que antes por cuarenta y ocho; para otras, en donde ya se trabaja menos de cuarenta y ocho horas por semana, o que exigen un personal relativamente inferior, el aumento sería naturalmente más pequeño.

Ahora bien, no sólo porque la elevación de los costos tiende siempre a que haya menos obras y menos obreros ocupados, sino por el carácter de industria llave que tiene en el más alto grado la de la construcción, según investigaciones, de las que resulta que los desocupados de un importante núcleo de actividades industriales se distribuyen entre éstas casi exactamente en la proporción en que participan directa o indirectamente en el ramo de la construcción (1), la política que lo encarece no puede ser acertada como medio para reabsorber la desocupación.

Si se ciñe su alcance a las obras construidas por cuentan del Estado el problema no cambia de aspecto, ya que los aumentos de las partidas de salarios forzosamente se reflejarían en el programa de construcción posible con determinada cantidad de recursos.

Aparte de las razones que anteceden, contrarias a la conveniencia de ratificar el proyecto de convención número 51, cosa que hasta el 1º de diciembre de 1937 no ha hecho ningún país miembro de la Organización Internacional del Trabajo, puede mencionarse la ausencia, en la construcción de obras públicas, de los motivos de competencia internacional en los costos de producción o explotación que justifican el

(1) Ver H. Rittershausen, *Paro forzoso y capital*, Barcelona, 1935, pág. 191.

sistema de las convenciones. Si un país considera útil la medida de reducir la semana de trabajo, puede aplicarla sin que lo estorbe la circunstancia de que no lo hagan los demás. La Argentina, cuyo gobierno central ha desarrollado en los últimos seis años una intensa política de construcción de obras públicas invirtiendo más de cuatrocientos millones de pesos moneda nacional en caminos, edificios, puertos, canales, etcétera, ha sabido apreciar el valor de esa acción como ayuda para resolver una situación de falta de trabajo que desapareció progresivamente. No necesitó y menos necesita de la semana de cuarenta horas. A ninguna otra nación le interesa que la adopte en sus obras públicas; y ella debe conservar libertad para seguir, en cualquier eventualidad futura, el camino que mejor convenga a las circunstancias del momento, negándose a ratificar el proyecto de convención de 1936.

Número 52. — Año 1936. — Proyecto de convención relativo a las vacaciones anuales pagadas

Las vacaciones anuales con goce de sueldo o salario constituyen una de las instituciones de la reglamentación del trabajo que se abren camino en el mundo entero. Concedidas en un principio a ciertas categorías privilegiadas de empleados, funcionarios públicos o personal superior de las grandes empresas, la ley, el contrato colectivo o la costumbre han extendido luego el núcleo de beneficiarios hasta comprender en muchos países, a la generalidad de los trabajadores del comercio, la industria y otros ramos especiales de actividad.

La convención de 1936 se propone afirmar esta difusión del principio, y para ello adopta un sistema muy prudente, el de exigir un mínimo de seis días laborales para la duración de las vacaciones, y que esta última aumente progresivamente con la duración del servicio, según modalidades que determinará como lo prefiera la legislación nacional.

Las vacaciones retribuidas que el artículo 156 de nuestro Código de Comercio, reformado por la ley 11.729, ha instituido a favor del empleado de comercio —factor, dependiente, viajante, encargado u obrero— comienzan por ser de diez días al año, cuando la antigüedad en el servicio no excede de cinco de éstos, para llegar a treinta cuando la antigüedad es mayor de veinte años. Se trata de un régimen encuadrado en el de la convención en cuanto, sin ser el único posible, llena los requisitos del plazo mínimo y de la progresión creciente de las vacaciones, pero no así en cuanto atañe al campo de aplicación. Se sostiene, con serios fundamentos, que la ley 11.729 no fué dictada para regir las condiciones del trabajo del obrero de la industria, y de ahí que las nuevas disposiciones del Código de Comercio no se interpreten en forma similar por todos los jueces llamados a aplicarlas, con lo que se tiene una verdadera incertidumbre del derecho. La justicia de paz y los tribunales de comercio de la Capital Federal consideran al obrero de la industria comprendido por los beneficios de la ley, mientras en la provincia de Buenos Aires y otros fueros locales decide la cuestión en forma negativa. Por otra parte, ciertas categorías de establecimientos cuyo personal está expresamente mencionado por el proyecto de convención, como las empresas de prensa, establecimientos hospitalarios y semejantes, empresas de espectáculos y diversiones, etcétera, no

son de por sí empresas de comercio, aunque pueden tener la forma de tales, y las actuales disposiciones del código son inadecuadas para incluir estos casos con carácter general, en lo que respecta al régimen de las vacaciones pagas.

No puede afirmarse, por tanto, que la ley interna armonice con el proyecto de convención. Pero sería deseable obtener esa armonía no sólo para evitar la subsistencia de la actual confusión de cosas, sino para que, cualquiera que sea la duración de las vacaciones que pueda fijarse para las diversas categorías de trabajadores, a partir del mínimo de seis días establecidos por la convención, se asegure su efectividad con los medios de control y las sanciones a que ésta se refiere en sus artículos 7º y 8º. Así se enmendará el error de haber querido tratar como una simple obligación contractual de derecho privado, la que es, por su naturaleza, una institución de la legislación del trabajo, semejante a las de la limitación de la jornada, o el descanso hebdomadario, que no pueden funcionar correctamente sino bajo la vigilancia especial del poder público, y con una responsabilidad directa del empleador frente a éste.

La ratificación del convenio traería consigo, pues la necesidad de revisar el régimen de vacaciones pagas creado por la ley de reformas al Código de Comercio. Adoptada ya la institución por nuestro país, cosa que facilita aquel acto, la oportunidad que él daría de mejorar y aclarar la ley interna es un motivo más para realizarlo.

Enrique Forn.
Jefe de la División de Legislación.

Sr. Presidente (Teisairé). — Está en consideración.

Sr. Bavio. — Pido la palabra.

El Senado entra a considerar en este momento la aprobación de diversos convenios adoptados por la Conferencia Internacional del Trabajo, siempre consecuente con el propósito del actual gobierno de regularizar la situación pendiente con respecto a la aprobación legislativa de los diversos convenios.

En realidad, el Poder Ejecutivo envió al Congreso todos los convenios y recomendaciones aprobados por la Conferencia Internacional del Trabajo, pero recomienda solamente la aprobación de 17 de estos instrumentos, que desde 1925 hasta 1936 fueron aprobados por el mencionado organismo internacional.

Como dice el despacho, ellos se refieren a la reparación de los accidentes del trabajo; a la igualdad de trato a los trabajadores extranjeros y nacionales en materia de reparación de esos accidentes; a la simplificación de la inspección de los inmigrantes a bordo de los barcos, materia que para nuestro país tiene especial importancia, como no escapará al criterio de los señores senadores.

Se refieren, asimismo, al contrato de ajuste de los marinos; a la repatriación de los mismos, que quedan en los puertos muchas veces como consecuencia del abandono de sus embarca-

ciones; a la indicación del peso en los grandes bultos transportados por barcos teniendo en cuenta la seguridad de los obreros que trabajan en los diques; al trabajo forzoso u obligatorio, siendo de notar, a este respecto, que en la Conferencia Internacional del Trabajo se ha bregado y se lo sigue haciendo para que se llegue a la supresión total del trabajo forzoso u obligatorio en las naciones.

Contempla también uno de los convenios la protección contra los accidentes de los trabajadores especialmente afectados a la carga y descarga de los buques, que en lenguaje internacional se llaman «dockers», y sobre la admisión de los niños en los trabajos no industriales.

El Poder Ejecutivo dice con toda razón que estos convenios cuya aprobación solicita se refieren a formas de protección jurídica de los trabajadores, concordantes en mayor o menor grado con las que se han incorporado ya a la legislación positiva interna del país. Y agrega que no quiere decir esto, como muy bien lo sabe el Congreso, que sea obstáculo para aprobar el proyecto de convenio el hecho de que no se ajuste a las leyes nacionales en vigor sobre la materia. Pero hago notar a los señores senadores que este mensaje fué elevado al Congreso el 22 de septiembre de 1938 y que desde entonces a la fecha nuestra legislación, en lo que se refiere a los derechos del trabajador y en general al trabajo, ha progresado en forma extraordinaria, como que es de la esencia de la revolución y del gobierno actual la transformación de todas las normas jurídicas que rigen el trabajo con miras siempre al mejoramiento y a la mejor convivencia, convencido nuestro gobierno que la mejor forma de trabajar por la paz social en el país y fuera de él es hacer progresar todo lo que se refiere a la reglamentación y estructuración de las normas que rigen el trabajo y las condiciones del mismo.

Notemos de paso, señor presidente, cómo se han preocupado las diversas delegaciones que han asistido a las conferencias de los proyectos que se refieren a extender los beneficios de los accidentes del trabajo. Se justifica, pues, plenamente, la preocupación del Senado argentino al reformar nuestra ley 9.688 de acuerdo con el proyecto aprobado ya, ley que en realidad, en la hora actual, no está de acuerdo ni con las condiciones de trabajo, ni con los jornales que ganan los obreros, ni con las conclusiones a que se ha llegado en las diversas reuniones de las conferencias internacionales del trabajo.

Es por eso que sería de desear que cuanto antes nuestro país pudiera llegar a la modifi-

cación de la ley 9.688 para ponerla a tono con la época y con las conclusiones a que se ha llegado en las diversas reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo.

En lo que respecta a los proyectos de convenio y recomendaciones aprobados por la Conferencia Internacional del Trabajo, en las cuatro reuniones últimas, el gobierno expresa su deseo de llegar pronto a la normalidad, en cuanto a la aprobación por parte del Congreso.

Notemos también, señor presidente, que los convenios que se van a aprobar en virtud de este proyecto de ley que viene en revisión se han estructurado con la presencia y con la colaboración de la delegación argentina en la conferencia. Y dice nuestro gobierno con toda razón que al pedir la aprobación de estos convenios lo mueve el deseo no sólo de cumplir con los compromisos internacionales contraídos por la República, hacia una institución digna de auspicio por las elevadas finalidades que se propone y el acierto de su importante labor cumplida, sino, asimismo, agrega el mensaje del Poder Ejecutivo, por su honda y constante preocupación de promover en la República el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los obreros de la ciudad y del campo y de contribuir en forma efectiva al afianzamiento y progreso de la cooperación pacífica entre las naciones.

Es decir, señor presidente, que al aprobar todos estos convenios que han sido examinados con toda detención tanto en la Cámara de Diputados como en las reuniones de los señores senadores, vamos a concordar con el propósito del Poder Ejecutivo de normalizar y regularizar la situación existente actualmente. Debemos destacar que con posterioridad a estos convenios se han suscripto otros en las sucesivas reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo, reuniones a las que siempre han concurrido delegaciones argentinas, y en esta hora, más que nunca esas delegaciones argentinas están compuestas por técnicos de derecho y además por representantes de los obreros y de los organismos sindicales argentinos, y no solamente de los representantes del capital y de las grandes organizaciones industriales.

Ha llamado la atención en los últimos tiempos, en las conferencias internacionales, la variedad y diversidad de la composición de estas delegaciones argentinas, pues nuestro país envía nutridas delegaciones a todas las conferencias internacionales, sobre todo las que tratan cuestiones de trabajo, que se realizan en los últimos tiempos en diversas partes del mundo.

No creo, señor presidente, que sea necesario entrar al análisis detallado de cada uno de los convenios a que se refiere este proyecto de ley.

Los señores senadores los conocen perfectamente. La prensa los ha comentado en diversas oportunidades, y sobre todo en la época de su aprobación por este importante organismo internacional.

De manera que con estas pocas palabras dejo fundado el criterio de la Comisión de Relaciones Exteriores en el sentido de que el Honorable Senado debe prestar su aprobación a este proyecto de ley.

Sr. Ramella. — Pido la palabra.

Los convenios que se ratifican fueron remitidos por el Poder Ejecutivo, en un mensaje del 22 de septiembre de 1938, donde se enuncian conceptos que podríamos llamar bastante temerarios en lo que se relaciona con el desenvolvimiento del derecho del trabajo. Es tal vez por esa causa que en ese mensaje no se aconsejaba la aprobación de algunos convenios internacionales, que luego han sido superados ampliamente por la legislación argentina.

El Parlamento argentino se está poniendo ahora al día en lo que se relaciona con la ratificación de los convenios internacionales del trabajo, que habían sido lamentablemente olvidados por los parlamentos anteriores.

Los que ahora consideramos se refieren a problemas que han sido contemplados ya en casi todos los casos por la legislación argentina, de modo tal que esta ratificación implica en realidad resolver un problema estrictamente formal.

Voy a hacer una ligerísima comparación entre los puntos resueltos por algunos convenios internacionales contenidos en el despacho que acaba de leerse y la legislación argentina.

El primer convenio del año 1925, sobre reparación de los accidentes de trabajo, ha sido contemplado por la ley argentina 9.688, la que como muy bien lo ha expresado el señor miembro informante fué modificada por este Senado con un criterio mucho más amplio, y respondiendo al verdadero concepto del derecho social, es decir, que la reparación del accidente del trabajo no debe ser, en realidad, una obligación patronal, sino que la indemnización ha de hacerse con un concepto de responsabilidad social, porque es la sociedad la que debe al obrero la protección necesaria y no puede hacerse depender ello de una relación meramente contractual.

El otro punto se refiere a la igualdad de trato a los trabajadores extranjeros y nacionales, en materia de reparación de accidentes del trabajo. Con respecto a la situación de los extranjeros que residen en nuestro país, la Argentina ha superado ampliamente esta situación, por cuanto la Constitución del 53 y la actual, en sus artículos 26 y 21 establecían la

más absoluta igualdad respecto a los derechos que gozan los extranjeros con relación a los nacionales. La única situación que podría suscitar dudas, es la relativa al goce de los derechos que correspondían a los parientes extranjeros residentes fuera del país, respecto de personas accidentadas en nuestro país, cuestión que se ha venido resolviendo por medio de convenios bilaterales realizados con numerosos países extranjeros y autorizados por el artículo 19 de esta convención general que se ratifica ahora.

Otro punto. La convención número 26 de 1928, sobre institución de métodos para la fijación de salarios mínimos. Este problema se contempla de manera integral y orgánica en el decreto 33.202 de 1945, ratificado por la ley 12.921, por el que se crea el Instituto Nacional de las Remuneraciones. Una vez en plena marcha la idea, contenido y los principios que informan este instituto, el problema de los salarios se habrá resuelto, en mi concepto, aquí de manera completa e integral.

También se relaciona el convenio con la fijación de los salarios de los trabajos a domicilio, asunto que fué resuelto en nuestro país por la ley 12.713.

Aparte de eso, como es de pública notoriedad, se han dictado una cantidad de decretos, luego ratificados por la ley 12.921, fijando los salarios o constituyendo los organismos para la fijación de los mismos, que en realidad es el concepto verdadero que debe informar esta materia, pues no es propio que la misma ley fije los salarios como norma general; es conveniente crear los organismos que, en las oportunidades determinadas, y de acuerdo con la región, fije los salarios de los obreros y de los empleados; ese es el concepto que ha prevalecido, por ejemplo, en la fijación de los salarios del trabajador rural y que está funcionando en nuestro país por medio de sus comisiones paritarias, de manera ampliamente satisfactoria.

Otro punto es el relativo al trabajo forzoso u obligatorio, contenido en la convención número 29 del año 1930. Este es un punto que nuestro país también hace tiempo ha eliminado, porque en realidad constituye una forma de esclavitud, y en el artículo 30 de nuestra Constitución se dice categóricamente —reproducción en esta parte del correlativo artículo de la Constitución anterior— que «ningún servicio personal es exigible sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley», es decir, que contiene las mismas disposiciones que la convención que se ratifica, a saber, que el trabajo puede ser obligatorio solamente en el caso de una condena judicial por penas previstas con anterioridad en las leyes respectivas.

Con respecto a la duración de la jornada de trabajo que contempla la convención número 30 del año 1930, también se ha dictado una legislación abundante en nuestro país, comenzando por la ley 11.544, que fija esa jornada legal del trabajo.

Con respecto a otros puntos de la convención, los números 33, 41 y 45, que enuncio conjuntamente por referirse a materias afines, sobre edad y admisión de los niños en los trabajos industriales, sobre trabajo nocturno de las mujeres y sobre empleo de las mujeres en trabajos subterráneos, en minas de todas clases, la ley 11.317 se refiere especialmente a estos puntos, y el artículo 6º de la referida ley habla especialmente de la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres, aunque tal vez no con la misma amplitud con que se refiere la convención que se ratifica; y el artículo 11 de la misma ley también prohíbe el trabajo de las mujeres en las minas, por lo que está de acuerdo con la convención que se ratifica.

Aparte de eso, ha habido otras disposiciones legales que contemplan la situación del trabajo de los niños, como los decretos 6.289, del año 1943, 7.662, del mismo año, modificado por el decreto 14.538, del año 1944, todos ratificados por la ley 12.921.

En cuanto al punto contenido en el número 34 del año 1933, sobre agencias retribuidas de colocaciones, en nuestro país se legisla en la ley 9.148, modificada por las 12.101 y 9.661, modificadas a su vez por la 12.102; pero me parece que en este punto nuestra legislación va a tener que ser acomodada a la convención que se ratifica, porque ésta prohíbe de manera absoluta el establecimiento de agencias retribuidas de colocaciones con fines lucrativos y fija un plazo máximo de tres años para que ellas sean suprimidas de los respectivos países. En cambio, nuestra legislación prohíbe de manera terminante la instalación de agencias retribuidas de colocaciones con fines lucrativos, solamente para el trabajo marítimo. Entiendo que en lo sucesivo habrá que dictar la ley que prohíba —como lo dice la convención— las agencias retribuidas de colocaciones con fines lucrativos, en todo el territorio del país.

Con respecto al punto 42 del convenio del año 1934 sobre reparación de las enfermedades profesionales, que está contemplada en el artículo 22 de la ley 9.688, —que como ya se ha informado ha sido modificada por el propio Senado y que deberá ser convertida en ley por la Cámara de Diputados— nuestra legislación del año 1915 es completamente insuficiente en relación al riesgo profesional, porque el principio que informa la ley 9.688 es el de que el

riesgo profesional debe ser como una consecuencia directa del trabajo que está realizando el obrero. En cambio, la convención que se aprueba tiene un criterio mucho más amplio: basta que la enfermedad haya sido contraída en el trabajo para que sea objeto de una indemnización.

En lo referente a las vacaciones anuales pagadas, que se contemplan en el convenio número 52 del año 1936, la legislación vigente en la Argentina es mucho más avanzada que la convención que se ratifica, porque ésta admite solamente un mínimo de seis días de vacaciones pagadas, y por la ley 11.729, por los decretos 1.740 y 32.412 de 1945, ratificados por la ley 12.921, las vacaciones de que gozan nuestros empleados y obreros son por un plazo muchísimo mayor. En este punto, pues, la legislación internacional es inferior a la que rige actualmente en nuestro país.

He querido hacer esta referencia que, como he dicho, es muy ligera, estableciendo una comparación entre nuestra legislación y el concepto internacional sobre el derecho del trabajo, para demostrar que nuestro país está a la vanguardia en esta materia, ya que en muchos aspectos supera a los más avanzados principios de la legislación obrera en el orden mundial. Y también demuestra esta enumeración que he hecho, que todavía nuestra legislación obrera es un poco inarticulada y algunos principios contenidos en unas leyes, chocan con los contenidos en otras. De ahí la conveniencia de llegar a la sanción del código social, en cuya tarea está empeñado singularmente el jefe del movimiento revolucionario, general Perón.

Por estos fundamentos, señor presidente, adhiero al despacho que ha producido la comisión.

Sr. Presidente (Teisaire). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar, en general, el despacho.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular, es igualmente aprobado.

Sr. Presidente (Teisaire). — Queda convertido en ley.

7

TITULO DE EXPEDICIONARIOS AL POLO SUR PRO BUSQUEDA DEL ANTARCTIC.

—Se lee:

Despacho de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Defensa Nacional (Ejército, Marina y Aeronáutica) ha considerado el proyecto de ley del señor senador Tanco y